

En noviembre miles de personas celebraron durante la primera Marcha del Orgullo que tuvo lugar en India luego de que la Corte Suprema descriminalizara el sexo homosexual.

Crédito: Indraneel Chowdhury/NurPhoto vía Getty Images

SECCIÓN 2

EL DESAFÍO DE LA EXCLUSIÓN Y LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS

EL DESAFÍO DE LA EXCLUSIÓN Y LA REIVINDICACIÓN DE DERECHOS

2018 fue un año en que, por todo el mundo, las personas de comunidades históricamente apartadas del poder se levantaron para hacer frente a su exclusión. Los miembros de grupos excluidos, tales como migrantes, refugiados, mujeres, jóvenes y personas LGBTQI, se han puesto a la vanguardia de la respuesta, convergiendo en protestas, movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil (OSC) para desafiar al poder, hacer frente a la política y la economía de la exclusión y cambiar los términos del debate. Las respuestas más efectivas de la sociedad civil fueron a menudo aquellas que estuvieron lideradas por personas excluidas, y aquellas que asumieron las múltiples capas de exclusión que se superponen a la hora de denegar derechos a tantas personas.

En países tan diversos como Camerún, Chile y Corea del Sur, las mujeres iniciaron movimientos #MeToo para desafiar el acoso sexual y superar las barreras estructurales que supone, tales como la remuneración desigual, la violencia de género y la insuficiente representación femenina en la política. En Argentina, Kenia y, con éxito notable, en Irlanda, se defendió el derecho al aborto, se luchó por él y se produjeron avances. En diversos países, sobrevivientes de abuso sexual en la Iglesia católica desafiaron su condición de víctimas para buscar reparación. Al mismo tiempo que se producían estas campañas y victorias, desde de la propia sociedad civil, incluidas dos grandes organizaciones como Oxfam y Save the Children, nos vimos obligados a cuestionarnos nuestra complicidad a la hora de reforzar estructuras de poder desiguales y permitir la explotación y el abuso sexual y, por extensión, a cuestionar nuestras culturas laborales y los supuestos que sustentan nuestro trabajo.

Se lograron avances importantes en la promoción de los derechos LGBTQI en India, donde la sociedad civil acudió a los tribunales para obtener la despenalización de la homosexualidad, y en otros países como Costa Rica y Portugal. Pero también hubo retrocesos tales como la reedición de violentas cazas de brujas en Tanzania. En los Estados Unidos, los jóvenes cuestionaron su exclusión de la política, desafiando el poder del lobby de las armas al negarse a jugar según las reglas convencionales y pasando de sobrevivientes a activistas.

Las personas migrantes y refugiadas fueron las que menos avances experimentaron, ya que sufrieron el abandono de los estados o, peor, fueron vilipendiadas por gobiernos y políticos populistas de derecha, en una amplia franja de países europeos y más allá. Migrantes y refugiados lucharon por hacer oír su voz allí donde pudieron, y la sociedad civil los apoyó, afirmando los valores de la compasión y el derecho a la asistencia humanitaria, rechazando la demonización y llamando la atención sobre las razones de fondo – la emergencia humanitaria, la denegación de libertades básicas, la pobreza aplastante – que llevan a las personas a migrar. Por hacerlo, y cada vez que desafió la exclusión y puso en tela de juicio el poder de los privilegiados, la sociedad civil se convirtió en blanco de ataques, físicos y verbales, y de represión estatal.

SOBREVIVIENTES CONVERTIDOS EN ACTIVISTAS: LOS ESTUDIANTES ESTADOUNIDENSES DESAFÍAN AL LOBBY DE LAS ARMAS

El 14 de febrero, un ex alumno abrió fuego contra estudiantes y personal de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, Estados Unidos, y mató a 17 personas. Fue el tiroteo masivo más letal de 2018 en los Estados Unidos, aunque lamentablemente no fue ni el primero ni el último.

Pero no se trató de un momento más en que lamentar la tragedia y pasar rápidamente la página tras los funerales y los consabidos “pensamientos y oraciones”. La respuesta al tiroteo de Parkland fue diferente. Los jóvenes, entre ellos los sobrevivientes del ataque, se movilizaron como nunca antes para cuestionar su exclusión del discurso político y de la toma de decisiones. Los sobrevivientes se convirtieron en activistas, canalizando su trauma en la determinación de generar cambios y demostrando su capacidad para promover ideas que habían sido mantenidas fuera de la agenda. Dieron nueva forma al **debate** sobre el control de armas comunicándose con el público en general, formando alianzas y ejerciendo presión sobre los políticos electos, dirigiendo hacia ellos sus reclamos en función de sus posiciones sobre la regulación de las armas. Iniciado y liderado por las personas más directamente afectadas por el problema en cuestión, los estudiantes, el movimiento por el control de las armas ganó mentes y corazones. Lo hizo gracias a que los jóvenes reaccionaron rápido, soñaron en grande,



Emma González se contó entre los por lo menos 1,2 millones de manifestantes de la Marcha por Nuestras Vidas.

Crédito: Noam Galai/WireImage

cambiaron la narrativa, ignoraron los antiguos guiones y hablaron desde el corazón. Así, dejaron unas cuantas **lecciones** de las cuales muchos actores de la sociedad civil podemos aprender.

Lanzado con el hashtag #NeverAgain (#NuncaMás), el movimiento creció rápidamente; la organización a nivel de base **comenzó** el día posterior al tiroteo. Los estudiantes de Parkland comenzaron a decir lo que pensaban, por internet y en los medios tradicionales, cuando los funerales todavía estaban en marcha. En un mitin en Fort Lauderdale el 17 de febrero, **Emma González** se convirtió en una de las caras más conocidas del movimiento al **llamar la atención** sobre la inacción de los políticos y hacer hincapié en las donaciones que los políticos reciben de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).

Días después del tiroteo, los estudiantes del área de Washington DC se **manifestaron** tumbándose en el suelo fuera de la Casa Blanca para instar al presidente Donald Trump a actuar. Poco después, un grupo de estudiantes de Parkland **viajó** a Tallahassee, la capital del estado de Florida, para hacerse escuchar mientras los legisladores votaban una moción para presentar un proyecto de ley de prohibición de los rifles de asalto. Cuando la moción fracasó, los estudiantes recordaron a los legisladores la cercanía de las próximas elecciones, que tendrían lugar a mediados del mes de noviembre, y les advirtieron que pronto estarían en condiciones de votar.

En marzo, los estudiantes **lideraron** en Washington DC la Marcha por Nuestras Vidas (March for Our Lives), centrada en la exigencia de un mayor control de armas. Fue una de las protestas **más grandes** en la historia de los Estados Unidos. Por lo menos 1,2 millones de personas se manifestaron en la capital y en más de 450 eventos en los Estados Unidos, así como en el exterior. El impulso se mantuvo y la Marcha por Nuestras Vidas se convirtió en un movimiento permanente que comenzó a hacer campaña para que los jóvenes se registraran para votar y, de ese modo, pudieran responsabilizar a sus representantes por sus posiciones sobre la regulación de las armas y el financiamiento de la NRA. Sus esfuerzos fructificaron cuando la participación de los jóvenes **augmentó** en 10% en las elecciones de noviembre, con una

marcada preferencia por candidatos progresistas que, en algunas votaciones ajustadas, resultó decisiva.

Jaclyn Corin (JC) y Matt Deitsch (MD)¹, de **Marcha por Nuestras Vidas**, describen las particularidades de la reacción ante el ataque a Parkland en comparación con los anteriores:

JC: Fue muy importante que los jóvenes se pusieran de pie, porque ante cada tiroteo masivo anterior a este, o bien nadie se levantaba o los que lo hacían eran muy silenciosos y nadie los escuchaba. Esta vez, hubo chicos de 16, 17 o 18 años de edad que aparecían en las pantallas de televisión, gritándoles a las mismas personas a las que se suponía que debían “respetar”. Les gritábamos y a la gente le fascinó nuestra intensidad.

MD: La NRA ha practicado algo que a veces se denomina “normalización”, creando una narrativa que no se basa en la realidad, pero la historia se cuenta tantas veces que para algunas personas se convierte en realidad. Entonces, inmediatamente supimos que lo que necesitábamos hacer era hablar del tema con la verdad. Por supuesto que han tratado de desacreditar esta verdad, pero no han podido hacerlo. Cuando sucedió lo de Parkland, personalmente me aterroriqué por mi hermano y mi hermana, y cuando ellos llegaron a casa, mi hermana – era su cumpleaños – fingía que estaba todo bien, pero mi hermano estaba visiblemente enojado. En ese momento pensábamos que solo tres personas habían muerto, y mi hermano insistía: “Necesito saber si fulano o mengano están bien”. Él estaba tan enojado que me miró y dijo: “No estoy traumatizado, estoy cabreado. Estoy furioso porque algo tiene que pasar”. Dijo esto a los 20 minutos de llegar a casa, y en ese momento sentimos que podíamos hacer cualquier cosa.

¹ Todas las entrevistas citadas en este informe son extractos editados. Las versiones completas de las entrevistas pueden encontrarse en nuestro sitio web, <https://www.civicus.org/index.php/media-center/news/interviews>.

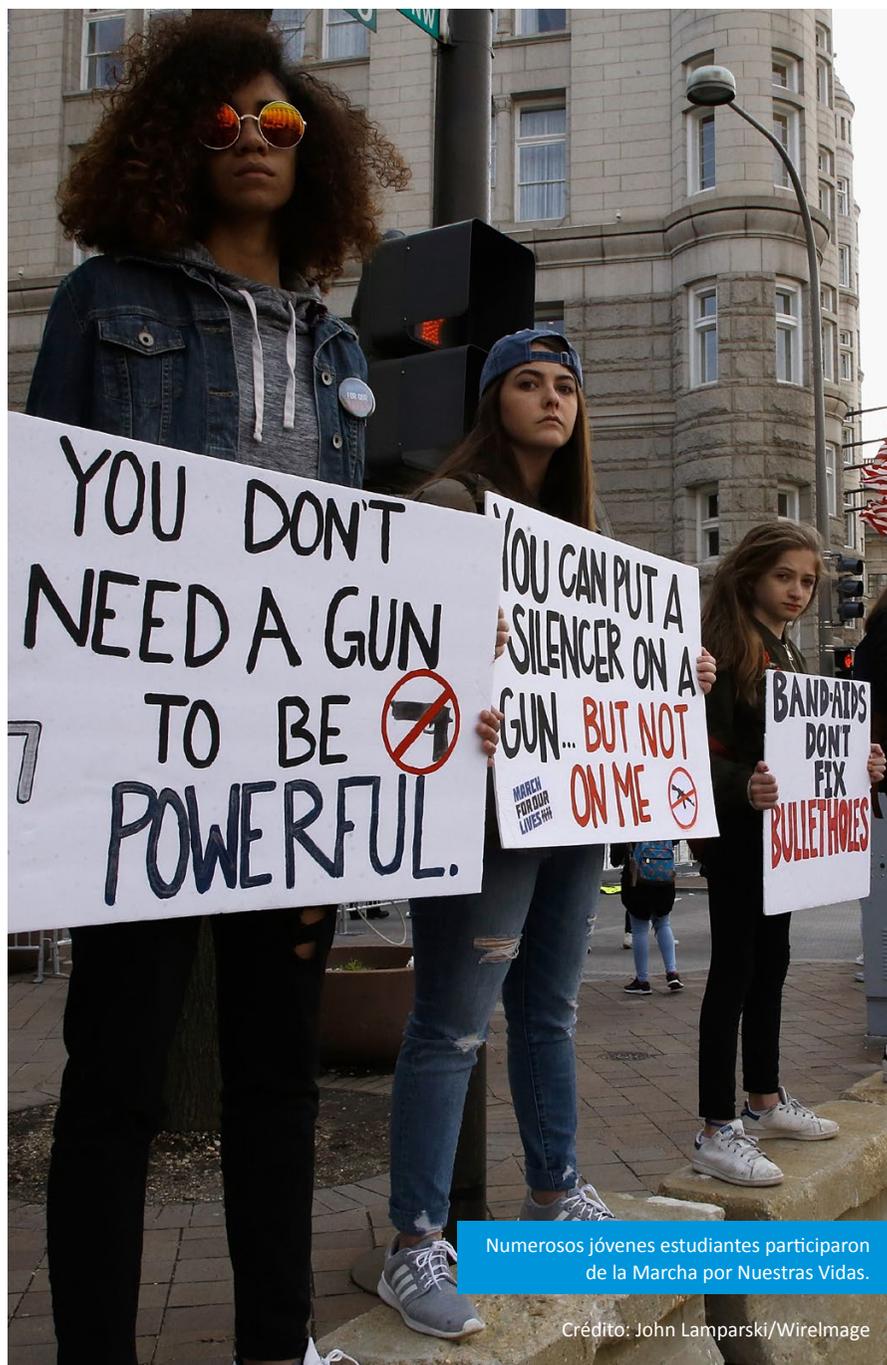
Los medios esperaban afuera en casi todos, si es que no en todos los funerales. En cada funeral al que asistí, cuando salí había una cámara frente a mi cara. Así que teníamos la opción: podíamos llorar y guardarnos esa ira acerca de la necesidad de cambio, o podíamos expresarla. Lo que hicimos fue aprovechar la mirada puesta sobre nosotros y expresar un mensaje muy poderoso. No es que otras víctimas de tiroteos masivos u otros defensores de la reforma de la regulación de las armas hayan tenido mensajes menos poderosos. Lo que hizo la diferencia fue que hicimos algo que la gente no estaba acostumbrada a ver: rompimos el ciclo que ocurre ante una tragedia – las familias en la televisión, los funerales, la graduación, la secuencia casi como en una exhibición. Y no permitimos que nos convirtieran en una exhibición. Una cosa que dijo el padre de Joaquín Oliver se quedó conmigo; él dijo: «Cuando los periodistas me llaman, les digo que no soy noticia. Lo que estamos haciendo puede convertirse en noticia, pero ya no somos noticia. El tiroteo en Parkland sucedió, ya fue. Necesitamos que las noticias sean algo mejor, algo positivo que produzca un cambio». Me dijo esto una semana después del funeral de su hijo, y su mensaje realmente me inspiró. No le estamos contando a la gente lo que pasó: todos saben lo que pasó. Puede que estén pergeñando su propia versión, pero todos saben lo que ocurrió. Solo se trata de asegurarnos de que no tengamos que pasar por algo así otra vez, y que ninguna familia vuelva a sentirse como se sienten ahora estas familias increíbles.

El impulso continuó. El 20 de abril, en el 19º aniversario del tiroteo en la escuela de Columbine, miles de estudiantes participaron en un **paro nacional** durante el cual salieron de clase para exigir el control de armas. El movimiento pronto se expandió y los sobrevivientes de Columbine **se unieron** a los estudiantes de Parkland. Ese mismo mes, un grupo de activistas lanzó la campaña **#NoRA** (Asociación No al Rifle) para alentar a los ciudadanos a que dieran su voto a los candidatos financiados por la NRA en las elecciones de noviembre. Un sobreviviente de Parkland, David

Hogg, inició una **campaña** de boicot contra dos firmas financieras que invierten en compañías de armas. A principios de mayo, los manifestantes se presentaron en el encuentro anual de la NRA en Dallas – el primero desde Parkland –, donde se reunieron 80.000 miembros de la organización. Las redes sociales también **se movilizaron**, y con éxito, para boicotear a las empresas que ofrecen descuentos a los miembros de la NRA: a principios de 2018 varias aerolíneas, bancos, empresas de alquiler de coches y hoteles **cortaron sus vínculos** con la NRA. Los titulares generados por las protestas del movimiento Marcha por Nuestras Vidas se ensamblaron y contribuyeron a hacer más poderosa a la acción individual en las redes sociales.

Al activarse, el movimiento se enfrentó cara a cara, de una manera que rara vez ocurre en la política estadounidense, con el poder del lobby atrincherado y los vastos recursos de la NRA. Como señalaron los estudiantes, la magnitud de las donaciones políticas de la NRA sería la única razón por la cual no se aprobó ninguna legislación federal importante sobre el control de armas desde el tiroteo de Columbine en 1999. El movimiento demostró que era posible trabajar de otra manera: no fue necesario tratar de igualar dólar a dólar el poder enraizado de la NRA. El poder del boicot, por ejemplo, podría movilizar un poder económico diferente, pero igualmente efectivo, contra el poder de la donación política.

Esto convirtió al movimiento en blanco de una reacción violenta por parte de un establishment a la defensiva. Las compañías que se habían disociado de la NRA fueron amenazadas con un boicot por parte de los partidarios de la NRA. En una actitud enfermiza que se ha vuelto corriente en el contexto político tóxico y polarizado de los Estados Unidos, las credenciales de los sobrevivientes fueron cuestionadas: se les **acusó** de ser “actores de crisis” – agentes pagados de alguna conspiración imaginada, y sus antecedentes familiares fueron cuestionados en sitios web de extrema derecha y medios conservadores. En el primer día de la convención de la NRA en Dallas, el presidente Trump mostró sus verdaderos colores cuando **habló** en defensa de la Segunda Enmienda y el derecho de tener y portar armas. El movimiento por el control de armas no se sorprendió: la campaña presidencial de Trump



Numerosos jóvenes estudiantes participaron de la Marcha por Nuestras Vidas.

Crédito: John Lamparski/WireImage

de 2016 se había **beneficiado** de un apoyo de la NRA de más de 30 millones de dólares, incluyendo un financiamiento de casi 20 millones destinado a costear anuncios para atacar a su oponente, Hillary Clinton.

A pesar de la inevitable reacción en contra, Jaclyn y Matt están convencidos de la capacidad del movimiento para hacer una diferencia y expresan una confianza generacional en que el tiempo está de su lado:

*JC: Creemos que nuestras probabilidades son increíblemente altas; es solo cuestión de tiempo. Lo fácil ocurrirá primero: por ejemplo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora tendrán financiamiento para **investigar** la violencia con armas de fuego, y es posible que se establezca un registro digitalizado. Todo esto va a ocurrir primero. En cambio, llevará más tiempo lograr que se prohíban los fusiles de asalto y los cargadores de alta capacidad. Pero va a ocurrir, porque no nos iremos a ninguna parte hasta que esté hecho.*

MD: A David Hogg le preguntaron en la televisión si creía que tendríamos éxito. Dijo que sí, y el reportero retrucó: “Pero la gente en tu contra es muy poderosa, es una organización grande, están formando líderes todos los días y tienen un montón de dinero”. Y David contestó: “Sí, pero nosotros vamos a sobrevivirlos”. Es así de simple: los jóvenes se están uniendo para salvarse las vidas unos a otros. La generación mayor egoísta, en la que se incluye la dirección de la NRA, se derrumbará. Tiene que ocurrir, porque han sido parte de la corrupción de nuestra democracia y de las libertades estadounidenses durante mucho tiempo.

JC: Hay muy pocas personas en el otro lado en comparación con el nuestro, porque los jóvenes de hoy, en el siglo XXI, tenemos la mente más abierta que nunca antes, y eso nos hace optimistas. Nuestras mentes abiertas son el resultado de la educación que hemos recibido y del hecho de que somos conscientes de que tenemos mucho más que aprender.

MD: *En mucho de lo que hacemos seguimos el modelo de Martin Luther King Jr. y los Viajeros de la Libertad, el movimiento por los derechos civiles y los movimientos por el sufragio femenino y la liberación de la mujer: todos los movimientos que expandieron la democracia. Estamos emitiendo el mismo tipo de mensaje. Funcionó antes: no tuvimos una democracia en Estados Unidos hasta que a todos se les reconoció el derecho de votar. ¡Estados Unidos solo ha sido una democracia en los últimos 50 años! Y hablamos de ser un país libre, pero incluso ahora, con la tendencia al encarcelamiento masivo, las leyes que exigen la identificación de los votantes, los requisitos de registro y todas las tácticas de supresión del voto (véase sección 3), en realidad no somos una verdadera democracia. Estamos utilizando los mismos métodos que funcionaron en el pasado para expandir nuestra democracia.*

Las protestas por el control de armas de fuego se produjeron en un contexto de creciente movilización en los Estados Unidos: aproximadamente **una de cada cinco** personas ha asistido a una protesta política desde 2016. **Jesse Chen**, de **Powerline**, coloca al movimiento Marcha por Nuestras Vidas dentro de este contexto de protesta más amplio:

*Cuando Trump ganó en noviembre de 2016, y cuando asumió el cargo en enero de 2017, fuimos testigos de todo un movimiento y una energía por izquierda, pero también por derecha. La gente ha estado marchando por las calles en resistencia, en **marchas de mujeres** durante los primeros fines de semana de la presidencia de Trump y en marchas científicas que llegaron poco después. En la derecha la energía también ha aumentado, no solo cuando Donald Trump derrotó a otros 16 candidatos y se quedó con la nominación republicana, sino también, por ejemplo, con sus mítines y las marchas de Charlottesville, una auténtica exhibición en agosto de 2017 del nacionalismo blanco y el patriarcado blanco bajo amenaza.*

Los estudiantes que participaron en la Marcha por Nuestras Vidas

contaban con un montón de antecedentes recientes, frescos en sus mentes, que podían mirar y decir: “Hemos visto gente marchando muy recientemente. Si estoy de acuerdo o en desacuerdo con ellos es irrelevante. Ser un activista es un comportamiento normal, socialmente aceptable. Yo también voy a hacerlo”. Dicho esto, creo que no es aconsejable sacar conclusiones a partir de una instantánea. Para mí, este momento en el que nos encontramos ahora, con estudiantes organizando protestas masivas por la regulación de las armas, está en línea con una tendencia que viene de por lo menos 10 años atrás.

*En mi opinión, esta tendencia comenzó en los primeros años de la administración de Obama, cuando muchas personas de izquierda se dieron cuenta de que Barack Obama no estaba tan a la izquierda como habían esperado. Creo que este hecho condujo, al menos en parte, al surgimiento de **Occupy Wall Street**.*

*Pocos años más tarde aparecieron los Dreamers (‘soñadores’) (véase más abajo), el movimiento **Black Lives Matter** (‘las vidas negras importan’) y, por supuesto Bernie Sanders, entre otros que se ubicaron en la izquierda. Una clara energía anti-establishment enhebra todos estos movimientos. De igual modo y al mismo tiempo, en la derecha se estaba formando el movimiento conservador del Tea Party, que organizó mítines y marchas en todo el país en respuesta a la derrota en las elecciones de 2008. El Tea Party ganó varios escaños en el Congreso en 2010, lo que acabó no solo dándole el control del Congreso y ocasionando una serie de cierres del gobierno, sino también, indiscutiblemente, alimentando el notable ascenso de Donald Trump unos años más tarde.*

A lo largo de este mismo período hemos tenido varios tiroteos masivos. En 2012, 14 años después de Columbine, fue el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook. Niños de seis años fueron asesinados a tiros en una escuela primaria, y el gobierno de este

país y su gente no hicieron nada. Ese fue un momento de fracaso colectivo para este país, en el cual la gente de repente se dio cuenta de que si no podemos actuar ante algo tan trágico, tal vez no haya un modo viable de actuar ante el problema de las armas. Entonces, definitivamente creo que en los años posteriores a Sandy Hook hubo un sentimiento de desesperanza y nuestro gobierno fue incapaz de hacer algo significativo al respecto. Esa desesperanza parece haber cedido, al menos parcialmente, con los estudiantes de Parkland. Además, ahora que tenemos a la administración Trump, todos los problemas, tanto abiertos como cerrados, están de vuelta sobre la mesa.

Interrogado acerca de las lecciones que movimientos preexistentes, como Black Lives Matter, pueden haber transmitido a la Marcha por Nuestras Vidas, Jesse señaló:

Una cosa importante que muestra Black Lives Matter es que los movimientos translocales funcionan. La persistencia de la noción del control centralizado de una campaña por parte de una OSC o un líder icónico es en mi opinión una de las razones por las cuales los movimientos progresistas en general no son tan exitosos como muchos movimientos conservadores. Los conservadores saben que no se necesita marchar hacia Washington DC para producir un cambio – puedes marchar en tu propia ciudad, en tu pueblo o en tu vecindario. En términos comparativos, los liberales sobre-extienden y sobre-invierten su confianza en el gobierno como solución y no se involucran tanto a nivel personal y local. Esto es algo que Black Lives Matter realmente ayudó a sacar a la luz. Creo que el liderazgo de Black Lives Matter realmente merece el crédito por su efecto disruptivo positivo sobre el activismo progresista de los Estados Unidos. Porque ese modelo hiperlocal y translocal puede resultar extremadamente efectivo, especialmente para lograr un cambio sistémico.

Los cofundadores de Marcha por Nuestras Vidas se han vuelto icónicos, pero el movimiento también incluye a personas aquí en Brooklyn o en Nueva Jersey. Los líderes de esos espacios translocales también son líderes, y no están siendo “controlados” por un liderazgo central, del mismo modo en que los activistas de Black Lives Matter no están siendo “controlados” por un liderazgo de la red Black Lives Matter o de cualquiera de las otras redes facilitadoras. Las OSC también deben reflexionar sobre esto: en muchos sectores de la sociedad civil tradicional los movimientos están demasiado centralizados en las oficinas de las OSC.

Lo evidente diferencia entre Black Lives Matter y Marcha por Nuestras Vidas es que los estudiantes son un grupo diverso de ciudadanos. Entonces, muchos espectadores pueden pensar que representan un menor desafío para la estructura de poder existente y para el patriarcado blanco. Cuando miro a Black Lives Matter veo una historia de opresión profunda que, literalmente, forma parte del ADN de este país y es el motor de un movimiento enorme. Esto me dice varias cosas, pero la primera de ellas es que la democracia es una lucha que nunca termina. Una lucha que incluye la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Derechos de Votación de 1965, la candidatura de Jesse Jackson en las elecciones primarias demócratas de 1984 y la elección de Obama como presidente en 2008. Pero no ganamos la democracia con nuevas leyes ni elecciones – ni siquiera con revoluciones. La democracia es algo por lo que siempre necesitas seguir luchando.

Creo que lo que Black Lives Matter nos enseña es que, en general, esta es una pelea que nunca termina. Espero que nuestros educadores en las escuelas estén guiando a los activistas estudiantiles a través de este proceso porque, tal como esos estudiantes sin duda han aprendido en los últimos meses, que la gente sienta pena por uno a raíz de una tragedia sufrida no es suficiente para que haga algo por cambiar lo que no es sino una injusticia fuertemente arraigada en nuestro sistema.

A pesar de los desafíos actuales, Jesse sigue siendo optimista en relación con el futuro, ante una nueva generación de jóvenes que crecen como activistas para desafiar el poder del establishment:

Actualmente el activismo ya no es tan considerado una cosa de nerds. En el pasado, la respuesta popular solía ser: “No me gusta la política”. Pero intenta “no estar en política” en los Estados Unidos de Donald Trump, y serás visto como desinformado y poco sofisticado. Estamos viendo un compromiso mucho mayor en el espacio cívico, y en vistas de la decreciente participación ciudadana de los últimos años, esta es una de las mejores cosas no partidistas que Trump ha hecho por los Estados Unidos. Ahora la gente está otra vez hablando de asuntos cívicos, y se habla de política incluso en los estadios deportivos. Esto es fundamental en una democracia. No podemos seguir adelante en piloto automático, realizar elecciones cada cuatro años y esperar que nuestros líderes hagan lo correcto por nosotros. Debemos aprender a organizar, canalizar y mantener la presión entre elecciones, de manera translocal y en escala, sobre el gobierno que tenemos, no sobre el que deseamos tener. Estos estudiantes nos muestran algunas formas en que esto se puede hacer, y no es posible que yo sea el único que piense que eso es muy bueno.

En relación con los estudiantes, nos da una gran esperanza el hecho de que no habrá que esperar hasta que hagan un par de años de universidad y “salgan de su caparazón” para que algunos de ellos se conviertan en jóvenes adultos activistas. Hay niños que marchan por las calles de sus propias ciudades, en algunos casos para disgusto de las administraciones de sus propias escuelas y consejos municipales, y están presentes para defenderse por sí mismos. Bien por ellos. Los jóvenes son el futuro en forma humana. Merecen que sus voces sean escuchadas al igual que las del resto de los ciudadanos.

Ahora que el activismo es popular en la escuela secundaria, hay más personas que se unen a la ciudadanía activa y, con suerte, no

esperarán cinco años, hasta estar en la universidad, para participar. Esta tendencia fundamental nos brinda a todos la oportunidad tanto de reconectarnos con las bases como de reconectarnos con temas que es posible que algunos de nosotros, a pesar de tener las mejores intenciones, hayamos abandonado en el pasado. Así que sí, tengo esperanzas respecto de adonde nos conducirá esta tendencia.

EL PODER DE LA COMPASIÓN: LA SOCIEDAD CIVIL DE PIE JUNTO A MIGRANTES Y REFUGIADOS

Durante 2018 y en múltiples contextos, la sociedad civil trabajó para defender los derechos de personas migrantes y refugiadas y experimentó el rechazo estatal y político por ello. En el Mar Mediterráneo, una frontera clave a través de la cual migrantes y refugiados intentan cruzar desde el norte de África hacia Europa, la sociedad civil trató de ofrecer una respuesta humanitaria, luchando por mantener a las personas vivas y evitar que se ahogaran en un contexto muy peligroso: aproximadamente **2275 personas** murieron al cruzar el Mediterráneo durante 2018. En los países que bordean el Mediterráneo y en toda Europa, la sociedad civil ofreció la ayuda esencial que los estados ya no brindan a las comunidades de migrantes y refugiados, y abogó por los derechos de estas personas vilipendiadas por gobiernos y políticos. En los Estados Unidos, el debate se volvió cada vez más cruel, y los derechos de migrantes y refugiados fueron repetidamente atacados. En América Latina, crisis políticas y humanitarias – especialmente la de Venezuela – llevaron a muchas personas a desarraigarse y exigieron una respuesta por parte de la sociedad civil de los países vecinos.



Las operaciones de búsqueda y salvamento lideradas por OSC fueron fundamentales para salvar vidas en el Mediterráneo.

Crédito: Chris Grodotzki/Sea-Watch.org

Vivimos tiempos difíciles y conflictivos. El populismo de derecha, que ha ganado terreno incluso en una franja de países europeos, *(véase sección 3)* obtiene su apoyo movilizando a sectores mayoritarios de la población contra las minorías. Explota los temores profundos de las personas en relación con sus medios de vida, la seguridad y el acceso a servicios y dirige la ira y el odio contra las comunidades de migrantes y refugiados. El discurso de odio y la agresión hacia las personas migrantes y refugiadas y, por extensión, hacia comunidades minoritarias establecidas, se ha normalizado. Incluso cuando los populistas de derecha no están en el poder, han desplazado el discurso político, y los gobiernos y partidos establecidos han endurecido sus posturas en relación con la migración y el asilo para tratar de reforzar sus apoyos. Como consecuencia de ello, en muchos países europeos la asistencia humanitaria ha sido **criminalizada**, y en la frontera entre los Estados Unidos y México se encuentra bajo ataque. La sociedad civil se ha convertido en un blanco y es objeto de confrontación directa por parte de gobiernos y partidos políticos. Si bien el espacio para la sociedad civil – el espacio cívico – está **siendo atacado** en su totalidad, incluso en un país tras otro en toda Europa, el espacio para la sociedad civil que trabaja con migrantes y refugiados, en particular, está colapsando de manera alarmante. La sociedad civil está siendo acusada, con frecuencia creciente, de estar ayudando a criminales y traficantes de personas, y a pesar de ello persevera en el ejercicio de su derecho a ofrecer una respuesta humanitaria, reafirmando los valores de la compasión y la solidaridad.

ITALIA: LA CRIMINALIZACIÓN DE LA RESPUESTA HUMANITARIA EN EL MEDITERRÁNEO

Una tendencia particularmente alarmante de 2018 fue la criminalización de las misiones de búsqueda y salvamento (SAR, por sus siglas en inglés) realizadas por OSC en el Mar Mediterráneo, con el gobierno de **Italia** a la vanguardia de la represión. En virtud de su acuerdo financiero de 2017 con el gobierno de **Libia**, respaldado por otros estados de la Unión Europea (UE), el servicio guardacostas libio desempeña el rol principal de prevención de la migración en todo el Mediterráneo. Este acuerdo se mantiene pese a la inestabilidad y el conflicto en Libia y a las acusaciones de que el servicio de guardacostas está implicado en el **tráfico de personas** y en actos de violencia y **violaciones** de los derechos humanos de migrantes y refugiados. En mayo, la OSC *Global Legal Action Network* (Red Acción Legal Global) presentó una **demanda** en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos para impugnar el acuerdo, sobre la base del testimonio de 17 sobrevivientes de un naufragio que fueron devueltos a Libia y sometidos a horribles abusos de sus derechos humanos.

A pesar de que los cruces del Mediterráneo hacia Italia disminuyeron en 2018, el discurso y las políticas contra la inmigración continuaron aumentando. Este fue un tema clave en las elecciones de marzo, que resultaron en la formación de un gobierno populista anti-inmigración y anti-UE y anti-sociedad civil en ese país. El nuevo gobierno se apresuró a adoptar una línea más dura, y Matteo Salvini, el ministro del Interior entrante, acaparó los titulares con sus declaraciones de que Italia ya no sería “el campo de refugiados de Europa”. Esta dura retórica puso al gobierno en conflicto con las operaciones de SAR lideradas por OSC.

En junio, poco después de llegar al poder, el gobierno italiano **impidió** a uno de los últimos barcos civiles de SAR – el **Aquarius**, operado por Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Méditerranée – atracar en Italia. El barco quedó varado en el mar durante una semana, con unas 630 personas a bordo, incluidos 123 menores no acompañados. También se le negó el permiso para atracar en **Malta**, hasta que el nuevo gobierno de centroizquierda de España acabó permitiéndole **atracar** en ese país. La situación alcanzó un punto crítico en noviembre, cuando las autoridades italianas **incautaron** el Aquarius. Las autoridades congelaron los activos de MSF en Italia, impusieron una multa de 460.000 euros (aproximadamente 528.000 dólares) e iniciaron investigaciones contra 24 personas por “tráfico y gestión ilegal de residuos”. El fiscal involucrado había hecho declaraciones públicas alegando cooperación entre las OSC que realizaban SAR y los traficantes de personas, aunque hasta la fecha dichas acusaciones han resultado infundadas. El mes siguiente, al Aquarius le fue **revocada** su matrícula panameña, y en diciembre MSF y SOS Méditerranée **anunciaron** que el barco cesaba sus operaciones.

La represión continuó en tierra. En septiembre, el gobierno italiano **aprobó** un proyecto de ley que facilita la deportación de los migrantes y permite despojarlos de la ciudadanía italiana si se los encuentra culpables de delitos graves. Al mes siguiente **Mimmo Lucano**, el alcalde de Riace, un pueblo que había rejuvenecido dando la bienvenida a los migrantes, fue puesto bajo **arresto domiciliario** por presuntos delitos económicos y financieros. Sus partidarios sospecharon que la causa de su detención fue su defensa del modelo de una próspera comunidad multiétnica, que lo puso en conflicto con el nuevo gobierno.

El gobierno italiano se mostró desafiante ante la extensa condena internacional. En su primer discurso como Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en el mes de septiembre, Michelle Bachelet **criticó** al gobierno de Italia por su acción contra las operaciones SAR lideradas por OSC, así como por los crecientes ataques contra migrantes y romaníes, y anunció su intención de enviar delegaciones de la ONU a **Austria** e Italia. En respuesta, Matteo Salvini **comentó**

“

A PESAR DE QUE
LOS CRUCES DEL
MEDITERRÁNEO
HACIA ITALIA
DISMINUYERON
EN 2018, EL
DISCURSO Y LAS
POLÍTICAS CONTRA
LA INMIGRACIÓN
CONTINUARON
AUMENTANDO.

”

que “no aceptamos lecciones de nadie, y mucho menos de la ONU”. En noviembre, expertos en derechos humanos y relatores especiales de la ONU se unieron para **condenar** el endurecimiento del marco legal italiano para migrantes y refugiados, así como los ataques contra las operaciones SAR de la sociedad civil, y declararon que “salvar vidas no es un delito. Proteger la dignidad humana no es un delito. Los actos de solidaridad y humanidad no deben ser criminalizados”. La Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE llamó la atención sobre la creciente **criminalización** de las OSC que conducen SAR en **Grecia**, Italia y Malta.

La **Relatora Especial** de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, **Agnes Callamard**, compartió su punto de vista. En su informe de 2018, “**Salvar vidas no es delito**”, describió el modo en que el cierre del espacio cívico afecta a las personas que necesitan ayuda humanitaria, en el Mediterráneo y más allá. Agnes describe el contexto de su informe:

Este informe surgió de la indignación. Indignación por los reiterados ejemplos que encontré de personas que actúan en solidaridad con los demás y que están siendo amenazadas con acciones legales, en sitios como Europa y los Estados Unidos, como parte de políticas contra la inmigración. Indignación también por la criminalización de la asistencia humanitaria y las organizaciones que la brindan, todo ello como efecto del régimen de antiterrorismo y sanciones. A continuación, mi investigación, basada en evidencias empíricas y en el derecho internacional aplicable a estas situaciones, demostró que los gobiernos estaban violando sus obligaciones de proteger el derecho a la vida cada vez que impedían a las personas intervenir en situaciones conducentes a asesinatos arbitrarios o a la privación de la vida, o las criminalizaban por hacerlo.

El mayor impacto directo que encontré fue sobre los migrantes en las fronteras, ya sea en el Mediterráneo o en zonas desérticas. En el caso del Mediterráneo, está muy claro que el número de refugiados y migrantes muertos o asesinados ha aumentado debido a que ya

no hay actores humanitarios en misiones de búsqueda y salvamento de quienes se arriesgan a cruzar el mar.

Agnes define lo que la sociedad civil podría hacer para responder a esta situación:

La sociedad civil debe aprovechar todas las oportunidades posibles para cuestionar el marco legal antiterrorista y, más en general, de la seguridad nacional, por lo que le está suponiendo para la sociedad civil y para la sociedad en general. Es esencial que la sociedad civil pase a la ofensiva, porque este discurso global se ha convertido en un monstruo que está devorando al derecho internacional y a la gobernanza global basada en la ética. No podemos permitirnos estar a la defensiva y adaptarnos al lenguaje de la seguridad.

Se puede y se debe hacer mucho más para proteger las intervenciones de la sociedad civil nacional e internacional para salvar vidas. La sociedad civil podría abogar para que el principio de “exención humanitaria” sea plenamente reconocido por los organismos internacionales y los estados, y se aplique en el contexto de las políticas tanto antiterroristas como migratorias. La sociedad civil podría investigar e informar regularmente acerca del impacto de las políticas de lucha contra el terrorismo, las políticas migratorias o las políticas de salud sexual y reproductiva sobre los derechos humanos de los beneficiarios, incluido su derecho a la vida.

Espero que la sociedad civil también pueda confiar en el análisis y la interpretación legal contenidos en mi informe para fortalecer la protección de su trabajo, inclusive con fines de litigio. Pueden utilizarlo para respaldar el argumento de que se está amenazando no solo su derecho a la libertad de asociación, sino también los derechos de las personas a las que sirven: en primer lugar, su derecho a la vida, su derecho a no ser arbitrariamente asesinadas. Los servicios que brindan las OSC ayudan a cumplir con las obligaciones del estado, y si el estado no puede o no está dispuesto a proporcionar esos servicios,

al menos no debe impedir que otros hagan lo que él debería haber hecho en primer lugar.

La solidaridad no es un delito. Los actos de solidaridad deben ser protegidos, deben ser presentados como un modelo para las sociedades y nunca deben ser criminalizados. La hermandad es un valor que debemos proteger. Salvar vidas no es un crimen.

Al tiempo que ofrecía resistencia a estas presiones internacionales, el gobierno italiano presionó fuertemente a la UE para que adoptara una línea más dura en materia de inmigración. En junio **amenazó** con hacer colapsar una cumbre clave de la UE si no se abordaban sus preocupaciones sobre la inmigración. Finalmente se llegó a un acuerdo que incluyó el compromiso de establecer centros migratorios en países fuera de Europa.

La sociedad civil también ha estado presionando para conseguir una respuesta europea unificada ante la inmigración que coloque en el centro a los derechos humanos y afirme el derecho a la acción humanitaria. **Silvia Stilli** de **AOI**, en Italia, explica lo que la sociedad civil está tratando de hacer y podría hacer aún en mayor medida, en su país y en toda Europa:

La sociedad civil se ha estado movilizando para tratar de conectar los problemas globales, regionales y nacionales. La migración no es un problema independiente. Es algo que nos afecta a nivel nacional, pero esto se debe a nuestra ubicación geográfica en la región mediterránea.

El 24 de julio, varios sectores de la sociedad civil italiana organizaron colectivamente un “bombardeo por correo electrónico” a la guardia costera. Millones de ciudadanos se unieron a esta iniciativa. Se trató de una gran movilización para solicitar que los guardacostas ignoraran las instrucciones de trasladar el manejo de los migrantes a los guardacostas libios. Fue la primera vez desde las elecciones que fuimos testigos de una movilización tan masiva.

Tras un período muy difícil en que los grupos de la sociedad civil en Italia hicieron frente a difamaciones, campañas de desprestigio y



En noviembre, miles de personas protestaron en Roma contra el racismo y las duras políticas migratorias del gobierno italiano.

Crédito: Stefano Montesi/Corbis via Getty Images

acusaciones, este fue un hecho positivo ya que supuso un desafío a las tendencias negativas, a través de una masiva movilización ciudadana de apoyo.

La sociedad civil italiana está casi unánimemente de acuerdo en un punto: los derechos humanos básicos y fundamentales no pueden ser negados. Por eso no apoyan el cierre de puertos, ni el bloqueo de barcos y su devolución a Libia. En el caso del Aquarius, la respuesta ha sido fundamentalmente citar los tratados y normas internacionales y solicitar la apertura de puertos invocando la necesidad de puertos seguros. Los puertos libios claramente no cumplen con la definición de puertos seguros.

La sociedad civil solicita que las organizaciones humanitarias puedan continuar trabajando con los guardacostas y el resto de los actores presentes en el mar, como solía ocurrir. Ha habido una serie de decisiones judiciales que respaldan las acciones de los barcos de rescate de la sociedad civil. Cuando los barcos de rescate han sido bloqueados, los jueces han determinado que habían cumplido con las normas internacionales, especialmente con la Ley del Mar, lo cual definitivamente invalida la capacidad del estado para bloquearlos.

La sociedad civil está tratando de movilizar a diferentes actores dentro de Italia – no solamente a grupos de la sociedad civil, sino también a autoridades locales y actores del gobierno, tales como los que se ocupan de la salud y la educación, y está reclamando un enfoque más integrado y estratégico, al menos a nivel nacional, en relación tanto con el rescate en el mar como con las mejores prácticas para integrar comunidades. También pide cambios en la política exterior y en la política de cooperación para el desarrollo, para dar cuenta de las complejidades y dinámicas de los países y regiones de donde provienen los migrantes y tratar de estabilizarlas para evitar que las personas emigren. En suma, adoptar un enfoque más unificado, al menos a nivel de Italia, aunque también debería haber un enfoque a nivel europeo.

La sociedad civil señala la necesidad de adoptar una política estratégica a nivel europeo sobre este tema, en el cual, a diferencia de la cuestión del cierre de los puertos, las opiniones de la sociedad civil están alineadas con las del gobierno.

Desde las principales redes de la sociedad civil europea se reconoce la necesidad de presentar una nueva narrativa sobre la migración y la integración de los migrantes en Europa. Dicha narrativa debería subrayar los aspectos positivos su presencia, en función no solamente del argumento económico sino también de los beneficios del crecimiento social y cultural de Europa. Es necesario invertir en esto en tanto que estrategia política de mediano y largo plazo. Esta es una de las cosas más importantes que la sociedad civil italiana debe hacer junto con redes europeas más amplias para cambiar las percepciones de temor frente a la inseguridad y la inestabilidad.

En el día a día de las operaciones de SAR en el Mediterráneo han participado **Giorgia Linardi** (GL), de **Sea-Watch**, en Italia y **Julian Pahlke** (JP) de **Jugend Rettet** (Rescates Juveniles) en **Alemania**. Les preguntamos qué es lo que motiva su trabajo.

JP: Jugend Rettet fue fundada a principios de 2016 por un par de jóvenes en Berlín. En tanto que jóvenes europeos, no podíamos permitir que Europa se convirtiera en una fosa común. El nuestro es un continente tan rico, ¿por qué habríamos de permitir que personas menos afortunadas se ahoguen en el mar? Puede que estemos geográficamente desconectados del Mediterráneo, pero como europeos no podemos estar desconectados del problema, porque si nos fijamos en la forma en que nuestros países tratan a los inmigrantes y refugiados, esta no es la Europa que queremos.

Cuando surgió la idea de organizarse, los medios informaban diariamente sobre ahogamientos en el Mediterráneo. Con la esperanza de disuadir a los migrantes de cruzar el Mediterráneo, a

finis de 2014 la UE y sus estados miembros se retiraron del rescate marítimo. Nos movilizamos en respuesta a la inacción de nuestros gobiernos, que estaba – y está – causando la muerte de miles de personas. Tras organizarnos y recaudar fondos, a principios de 2016 logramos comprar y convertir un barco, el *luventa*, que comenzó a patrullar el Mediterráneo Central en julio de 2016.

GL: Sea-Watch también es una OSC de SAR, y también es bastante joven. Comenzamos en el verano de 2015 con pocas personas y ahora contamos con el apoyo de unos 150 voluntarios activos. No queríamos mirar desde afuera mientras miles de personas morían en el Mediterráneo. Como sociedad civil, queríamos estar allí porque no nos convencía la información que recibíamos sobre lo que estaba sucediendo, y sabíamos que había un vacío en términos de capacidad de SAR. Queríamos estar presentes para monitorear la situación, exigir rendición de cuentas y presionar a las autoridades para que asumieran la responsabilidad de proporcionar la capacidad adecuada de SAR. Y cada vez más nos preparamos para poder realizar rescates, porque pronto nos dimos cuenta de que no alcanzaba con simplemente estar en el Mediterráneo, localizar a las personas en peligro y brindar asistencia de emergencia mientras esperábamos la llegada de las autoridades, porque estas podrían demorar demasiado, o directamente no venir.

El nombre de nuestra organización, Sea-Watch, trata de transmitir la idea de un ojo independiente de la sociedad civil capaz de ver sin filtros lo que sucede y corregir la narrativa que se difunde sobre lo que está sucediendo, al mismo tiempo que tomar medidas para rescatar a las personas y de ese modo realizar los valores de solidaridad y derechos humanos en el mar, que están siendo cada vez más descuidados.

Lo que los dos dejan en claro es que la provisión de una respuesta de SAR por parte de la sociedad civil no es la primera opción; más bien, la sociedad civil intervino cuando los gobiernos dejaron de proporcionar estos servicios esenciales:

JP: Tratamos de llenar un vacío haciendo lo que nuestros gobiernos no están haciendo: rescatar a personas que de lo contrario morirían. Exigimos un programa gubernamental centrado en el rescate marítimo y la descriminalización de los solicitantes de asilo y los refugiados, mientras realizamos operaciones de SAR. Antes de ser **confiscado** por las autoridades italianas en agosto de 2017, nuestro barco navegaba cerca de las aguas territoriales de Libia en busca de embarcaciones en riesgo. Rescatamos a las personas de los botes, les ofrecimos comida

“

TRATAMOS DE
LLENAR UN VACÍO
HACIENDO LO
QUE NUESTROS
GOBIERNOS NO
ESTÁN HACIENDO:
RESCATAR A
PERSONAS QUE
DE LO CONTRARIO
MORIRÍAN.

”

y agua, les brindamos primeros auxilios y tratamos de llevarlos a un lugar seguro. En 2016 y 2017, llevamos a cabo 15 misiones de rescate y salvamos a más de 14.000 personas.

Pero lo que alguna vez fue una relación caracterizada por la tolerancia y cierto nivel de cooperación empeoró cuando se tomó la decisión de traspasar las operaciones a Libia y el gobierno de Italia se inclinó hacia la derecha, con políticos en aparente competencia por ofrecer la retórica más divisiva sobre la inmigración:

JP: En 2016 y durante parte del 2017, el Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (MRCC) envió los casos de rescate a la sociedad civil, y la cooperación con las autoridades, particularmente en Italia, fue bastante buena. Pero en algún momento de 2017 la situación cambió y el MRCC comenzó a no redirigir los casos hacia nosotros sino a enviarlos al servicio guardacostas libios. Y en agosto de 2017 nuestro barco fue registrado y confiscado, y todavía no lo hemos recuperado. El día anterior nos habíamos negado a firmar un código de conducta con el gobierno italiano que nos habría obligado a violar el derecho marítimo internacional.

Ha habido un cambio enorme. La labor de SAR está principalmente en manos de la sociedad civil, pero la sociedad civil está siendo atacada. Ahora no solamente las personas que se desplazan son atacadas; también las personas defensoras de derechos humanos y las OSC son calumniadas, acosadas y sometidas a procesos judiciales. Diez miembros de nuestra tripulación están actualmente bajo investigación judicial y nuestra organización ha sido acusada de connivencia con traficantes de personas, de contribuir a la migración ilegal y de portar armas. Incluso si el caso no prospera, ellos logran lo que buscan, ya que entretanto estamos impedidos de hacer nuestro trabajo de rescate y otras OSC de rescate ya han abandonado el Mediterráneo y suspendido sus misiones.

GL: Nuestra relación con el gobierno italiano también cambió para peor. Nunca, jamás participamos en una operación de SAR sin coordinar con el MRCC.

*Durante largo tiempo ellos coordinaron todas las operaciones de SAR en el Mediterráneo, e incluso en algún momento llegaron a considerar a los barcos de la sociedad civil como una especie de flota cívica. Pero cuando la situación cambió, lo hizo rápidamente. El cambio posiblemente comenzó alrededor de febrero de 2017, cuando se firmó la **Declaración de Malta**, que habilitó al servicio guardacostas libio para contener la migración en Libia.*

Esto ocurrió a la par de una fuerte campaña de deslegitimación y criminalización de las organizaciones y activistas que trabajan con migrantes y refugiados. Además de “conspirar con contrabandistas”, también se nos acusa de “ayudar involuntariamente a criminales” al alentar a los contrabandistas a que envíen personas en condiciones cada vez peores, y de ser un “factor de atracción” que alienta a más inmigrantes a intentar cruzar.

Nuestra relación con las autoridades se fue volviendo más tensa a medida que trataron de delegar la responsabilidad por las operaciones de rescate en el servicio de guardacostas libios. Sabemos que Libia no puede controlar el área de SAR bajo su jurisdicción. Primero, porque no tiene la capacidad. Segundo, porque de acuerdo con la definición legal, un rescate no puede considerarse concluido si las personas son devueltas a un lugar donde sus vidas corren peligro. Nuestras misiones siguen el derecho marítimo internacional y los principios humanitarios, por lo que no podemos permitir que las misiones de SAR concluyan cuando las personas son devueltas a Libia, donde hay una guerra civil. Cuando detiene a las personas que intentan cruzar a Europa, la guardia costera de Libia las envía a campos de detención donde permanecen en condiciones terribles y sus derechos humanos son sistemáticamente violados.

Si nuestros gobiernos siguen apoyando y financiando un sistema que envía migrantes a Libia, nos colocan en una posición en la cual no podemos colaborar con las autoridades tal como solíamos hacerlo. Lo que hacemos en cambio es seguir estrictamente el marco legal internacional que regula las operaciones de SAR en el mar desde el punto de vista del derecho marítimo, el derecho de los refugiados y los derechos humanos y los principios humanitarios. Desafortunadamente, la práctica estatal está legitimando un sistema ilegal, lo cual nos coloca en una relación de conflicto con las autoridades, pese a que no es lo que deseamos. Ahora, cada vez que nos involucramos en una operación de rescate, carecemos de una autoridad de referencia competente que asuma la responsabilidad sobre el caso e indique un puerto seguro de desembarco lo antes posible, tal como lo estipula la ley.

La criminalización a que nos enfrentamos en todos los niveles – mediático, político y judicial – está vinculada con la dirección que ha adoptado la política. En Italia, la forma en que se representó a la inmigración influyó en gran medida sobre el resultado de las elecciones. El país ahora está gobernado por alguien que prometió poner a “los italianos primero” y que todo el tiempo habla negativamente sobre los migrantes. La situación en el Mediterráneo fue manipulada para ganar la confianza de la gente a través del miedo.

Pero para nosotros es particularmente difícil hacer que la gente vea todo esto porque hemos sido intensamente definidos como delincuentes y personas poco confiables. Por lo tanto, tenemos que trabajar para cambiar las percepciones públicas de las OSC. Dado que estamos ocupados reaccionando y defendiéndonos, tenemos cada vez menos tiempo y recursos para hacer la parte sustancial de nuestro trabajo.



Manifestantes con las manos pintadas de rojo, símbolo de la sangre de las personas que han muerto en el mar, protestaron contra las políticas migratorias del nuevo gobierno italiano.

Crédito: Simona Granati/Corbis vía Getty Images

*En noviembre, junto con los barcos de otras dos OSC – la española Open Arms (Brazos Abiertos) y la recién creada plataforma italiana **Mediterranea** – asistimos a un barco pesquero español que participaba en una operación de rescate. Los guardacostas libios intervinieron y se llevaron a 26 personas, pero 12 personas fueron abandonadas y rescatadas por el barco pesquero español, que no sabía qué hacer con ellas. Sus instrucciones eran devolverlos a Libia, pero las personas rescatadas les dijeron que preferirían que los dejaran ahogarse antes que regresar a Libia. La tripulación del barco pesquero entendió que no podía devolverlos a Libia. Pero como nadie los dejaba desembarcar, debieron permanecer allí, con un clima terrible, durante más de 10 días, hasta que finalmente se acordó que desembarcarían en Malta y serían trasladados a España. ¡Doce personas! Multiplica esto por cientos y miles, y te harás una idea de lo difícil que se ha vuelto la situación y del poco espacio que queda para la acción humanitaria.*

JP: Con el avance del populismo de derecha, el contexto está cambiando rápidamente en toda Europa. Básicamente, los políticos de varios países le están diciendo a la gente que se acostumbre a la idea de que las personas se ahoguen a nuestras puertas y creando una situación de sospecha pública hacia las organizaciones humanitarias y de derechos humanos. Los medios de comunicación han difundido falsas acusaciones contra nosotros y han creado una atmósfera en la cual es difícil operar.

*Aunque la situación política en Alemania es diferente de la de Italia en muchos aspectos, también allí existe mucha desconfianza hacia organizaciones como la nuestra. El ministro del Interior alemán dijo recientemente que los activistas de SAR deben ser arrestados para que no pongan en peligro a más personas. Tenemos un **partido de extrema derecha** que obtiene entre el 15 y el 20% de los votos (pero que afortunadamente, a diferencia de Italia, no*

forma parte del gobierno) y ha contribuido enormemente a la percepción distorsionada de nuestro trabajo. Su mensaje ha sido ampliamente difundido porque incluso los partidos de centro persiguen el claro objetivo de mantener lejos a los migrantes, incluso si eso significa enviarlos a lugares donde sus derechos humanos serán brutalmente violados. Muchas personas que aún creen que los derechos humanos son universales y no se les pueden quitar a nadie se han desplazado hacia el Partido Verde y los partidos de izquierda. Por lo tanto, la política se está moviendo simultáneamente en ambas direcciones.

En respuesta a esta situación, las OSC que han estado involucradas en operaciones de SAR han intentado establecer conexiones más sólidas con el resto de la sociedad civil, superando las **divisiones** que tradicionalmente han existido entre las OSC humanitarias y las OSC de desarrollo y derechos humanos, y movilizándolo a la ciudadanía en defensa de los derechos humanos:

GL: Estamos intentando trabajar con otras partes de la sociedad civil con las que no solíamos tener muchos vínculos. El tema de la migración es divisivo y en torno de él no es fácil movilizar a la gente en una dirección progresista. Pero hay una capa de la sociedad civil que trabaja para promover los derechos humanos a la cual es posible apelar. El momento en que comenzamos a ser abiertamente atacados por el trabajo que realizamos con migrantes y refugiados fue también el momento en que más nos conectamos con la sociedad civil en tierra. Así, mientras que por un lado esos ataques marcaron el comienzo de una tendencia descendente, por otro lado, al desviar parte de nuestras energías de las operaciones de SAR y canalizarlas hacia la creación de conexiones, también resultaron productivos.

La construcción de una causa común se basó en el reconocimiento de que no solo la violación de los derechos humanos de los migrantes es

en sí misma una violación de los derechos humanos, sino que además los gobiernos no se detendrán tras despojar de sus derechos a los migrantes y refugiados, las personas más vulnerables. Continuarán reduciendo las libertades civiles de todos nosotros. Este tipo de discurso ha ayudado a establecer conexiones entre la sociedad civil en el mar y la sociedad civil orientada a los derechos humanos en tierra. Este ha sido el principal esfuerzo que ha realizado la nueva plataforma italiana Mediterranea, y es interesante que justo ahora, cuando parecía que ya no había esperanzas en Italia, ya que los puertos fueron cerrados, los barcos confiscados y las OSC puestas bajo investigación, esta plataforma naciera de la convergencia entre grupos de la sociedad civil progresistas y promotores de derechos.

La situación también es un desafío porque desplaza nuestro enfoque desde la labor humanitaria hacia la política, y no queremos politizar demasiado nuestro mensaje. Pero, en cualquier caso, se ha avanzado en la creación de conexiones y en la labor de incidencia, especialmente en las instituciones de la UE, y en particular en el Parlamento Europeo.

JP: La clave son las conexiones, la incidencia y las campañas. Es necesaria una contra-narrativa para combatir esta idea que corre el riesgo de convertirse en sentido común: que está bien enviar personas a un lugar donde hay una guerra civil. En respuesta a las protestas anti-inmigración, más de 200.000 personas se movilaron para exigir que Alemania acogiera a más migrantes. Este es el tipo de acción de la sociedad civil que necesitamos para que la gente tome conciencia de que los derechos humanos están en peligro y de que eso debería preocuparles.

Más allá de lo que hay que hacer de inmediato, que es armar un programa de rescate estatal, lo que se necesita a largo plazo es un recorrido legal para que las personas puedan buscar asilo en los países europeos sin arriesgarse a un peligroso cruce del Mediterráneo. Un visado humanitario o programas razonables

de reasentamiento que no dependan de la colaboración de los dictadores que gobiernan los países de donde las personas vienen huyendo serían posibles soluciones. Pero el problema es que, por el momento, nuestros gobiernos no ven ninguna razón para hacer esto. Es por eso que, mientras seguimos haciendo campaña para lograr un cambio político y abogando por los derechos de los migrantes y los refugiados, en el corto plazo tratamos de concentrarnos en hacer nuestro trabajo de SAR, que a su vez se enfrenta cada vez a más obstáculos, hasta casi detenerse.

GL: Necesitamos ayuda para poner más presión sobre los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones internacionales y con los estándares de derechos humanos. Necesitamos ayuda porque en este momento estamos en modo resistencia, ya que claramente no somos bienvenidos en muchos contextos en los que necesitamos estar presentes para hacer nuestro trabajo. Y es nuestro deber permanecer allí y continuar trabajando, o de lo contrario dentro de 30 años Europa mirará hacia atrás con horror y preguntará: “¿Cómo pudimos dejar que eso sucediera?”. Así que necesitamos ayuda para construir puentes más sólidos entre el trabajo en el terreno y la incidencia en instituciones internacionales, entre ellas la ONU. La sociedad civil internacional puede ayudar escuchando y amplificando el mensaje de los derechos humanos.

JP: Lo que pueden hacer en este momento no solamente las organizaciones internacionales y la sociedad civil, sino también todas las personas preocupadas por los derechos humanos, es ayudarnos a bordo, colaborar en tierra, venir cuando nos movilizamos, y donar si pueden – porque todas nuestras organizaciones se basan en el trabajo voluntario; hacen lo que los gobiernos deberían estar haciendo pero están financiadas exclusivamente a través de contribuciones voluntarias de las personas comunes y corrientes.

“

EN AGOSTO, UN
INFORME DE LA
SOCIEDAD CIVIL
DOCUMENTÓ LA
INTIMIDACIÓN Y EL
ACOSO AL QUE SE
ENFRENTAN LOS
TRABAJADORES
HUMANITARIOS
QUE AYUDAN A
MIGRANTES Y
REFUGIADOS.

”

FRANCIA: LAS HOSTILIDADES CONTINÚAN

Otro político de primera línea que atacó a la sociedad civil por hacer trabajo humanitario fue el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En junio, Macron **criticó** a la OSC alemana Mission Lifeline luego de que esta rescatara a 233 migrantes en el Mediterráneo. El barco había pasado cuatro días varado en el mar después de que se le negara el permiso para atracar en varios puertos. Aunque acogió a algunos de los migrantes, el presidente Macron acusó al barco de rescate de “hacer el juego a los contrabandistas” y de violar “todas las reglas” al acudir al rescate de los migrantes cuando la guardia costera libia ya estaba interviniendo.

Mientras apuntaba contra la sociedad civil, el presidente Macron también **criticó** al gobierno italiano por el endurecimiento de su comportamiento. Cuando al Aquarius se le prohibió atracar en los puertos italianos, Macron tildó a Matteo Salvini de “cínico e irresponsable”. Sin embargo, su gobierno no se ofreció a recibir el barco.

La hostilidad se extendió al suelo francés. En agosto, un **informe** de la sociedad civil documentó la **intimidación y el acoso** al que se enfrentan los trabajadores humanitarios que ayudan a migrantes y refugiados en Calais y Dunkerque, en la costa norte de Francia, desde donde los recién llegados intentan cruzar al Reino Unido, y donde a pesar de que los campamentos de refugiados fueron desmantelados, se estima que aún permanecen alrededor de 1500 personas sin hogar. Según el informe, a lo largo de más de ocho meses los trabajadores humanitarios sufrieron 645 incidentes, incluyendo vigilancia, repetidos controles de documentación, detenciones y registros, y violencia verbal y física por parte de las fuerzas de seguridad. También se les impidió dar alimento y agua a los refugiados. Además, las mujeres dedicadas a la ayuda de humanitaria sufrieron una cantidad desproporcionada de agresiones: a pesar de constituir apenas más de la mitad de la fuerza de trabajo, fueron sometidas al 87% de los cacheos.

La reciente hostilidad del estado se aprovecha de, y a su vez alimenta, una tendencia racista y xenófoba de larga data en la sociedad francesa, la cual tiene su reflejo en los niveles de apoyo que recibe el partido de extrema derecha *Rassemblement National* (ex Frente Nacional). **Jean-Marie Fardeau**, de **Vox Public**, describe el estado actual del debate francés sobre la diversidad y los valores fundamentales:

Varios políticos, incluido nuestro presidente, han criticado públicamente el trabajo de las OSC, y en particular el de las organizaciones que trabajan con migrantes en Calais o en el Mar Mediterráneo. Este tipo de crítica crea un lamentable clima de desconfianza hacia la sociedad civil.

Existe todo un debate acerca de si hay en Francia un racismo estructural sancionado por el estado. ¿Mantiene el estado, a través de sus políticas y opciones, una sociedad de múltiples velocidades en la cual las personas de origen extranjero son consideradas ciudadanos de segunda clase? Varias organizaciones se han constituido y movilizadas en torno de este tema y abogan por el reconocimiento de la pluralidad y el multiculturalismo de la sociedad francesa, y de las contribuciones específicas que las personas de ascendencia extranjera hacen a esta sociedad. Muchos de estos grupos, tales como Les Indivisibles y el Colectivo contra la Islamofobia en Francia, han ganado influencia. Han podido afirmar su diferencia y singularidad y exigir que la discriminación de la cual son víctimas sea reconocida como tal.

La brecha crece entre quienes continúan transmitiendo el mito de una República única e indivisible, como debería ser, y quienes buscan el reconocimiento del hecho de que muchos ciudadanos de la República realmente existente no son respetados a causa de sus orígenes. Estas comunidades están cada vez más decididas a defender sus derechos y su propia existencia dentro de la sociedad, en reacción frente a esta sociedad que los rechaza.

La sociedad civil francesa está evolucionando y proliferan nuevas formas de organización que exigen derechos para los grupos excluidos, y desarrollan una labor de incidencia para afirmar el valor de la solidaridad humanitaria, tal como lo explica Jean-Marie:

Las organizaciones más tradicionales de defensa de derechos están teniendo dificultades para conectarse con estas nuevas formas de organización, que provienen de y funcionan dentro de barrios de clase baja. Esas organizaciones se han institucionalizado y transmiten mensajes genéricos sobre derechos humanos y libertades fundamentales, lo cual por supuesto es necesario; sin embargo, esos mensajes están a menudo desconectados de las luchas cotidianas

de las personas que sufren discriminación. Ya no es suficiente con declarar que “el racismo es malo”; la lucha debe conectarse con la realidad concreta de las personas que viven en los barrios pobres. Nuestro desafío en Vox Public es ayudar a fortalecer los lazos y construir puentes entre las organizaciones de derechos humanos más institucionalizadas y tradicionales y estos nuevos actores de la sociedad civil que se han desarrollado a partir de las llamadas minorías visibles.

*La sociedad civil está participando en el debate para enfatizar la importancia de la solidaridad humanitaria como un valor fundamental en la acción cívica. En lo que fue una victoria para la sociedad civil, en julio el Tribunal Constitucional de Francia dictaminó que la fraternidad es un principio constitucional clave que podría ofrecer protección contra el procesamiento por ayudar a los migrantes y refugiados. El caso fue presentado después de que en 2017 el agricultor **Cédric Herrou** fuera declarado culpable y multado con 3000 euros (unos 3400 dólares) por ayudar a personas migrantes a cruzar de Italia a Francia. La ley impone multas de hasta 30.000 euros (aproximadamente 34.000 dólares) y penas de cárcel de hasta cinco años por tales delitos. El fallo trae esperanzas de que la sociedad civil pueda continuar proporcionando ayuda humanitaria bajo el principio de la fraternidad sin caer en infracciones legales.*

GRECIA Y MALTA: SOBRE LOS MISMOS PASOS

Los gobiernos de **Grecia** y **Malta** han adoptado una postura similar, negando a los migrantes sus derechos y atacando a la sociedad civil. En agosto, Nassos Karakitsos, director de campo de la OSC griega Centro Internacional de Respuesta de Emergencia, y dos de sus voluntarios fueron arrestados y detenidos bajo acusaciones de trata de personas, espionaje y lavado de dinero, y se enfrentan a la posibilidad de una sentencia de 20 años de cárcel por su trabajo para ayudar a migrantes y refugiados. En septiembre,



Tras ingresar a Bosnia y Herzegovina persiguiendo el sueño europeo, una creciente cantidad de refugiados quedó atascada en precarios campamentos en Sarajevo.

Crédito: Elman Omic/Anadolu Agency/Getty Images

el fundador de la organización también fue arrestado bajo la acusación de ayudar a inmigrantes a ingresar ilegalmente a Grecia. Los cuatro fueron **liberados** bajo fianza en diciembre, pero los cargos contra ellos no fueron retirados.

En julio, el gobierno maltés cerró sus puertos a los barcos de rescate y detuvo las operaciones de SAR en Malta, dejando varados a los barcos de SAR. La medida provocó **protestas** pacíficas, las cuales se coordinaron con protestas realizadas en varias ciudades alemanas. Los activistas se dieron cita frente a los tribunales de la capital, La Valeta, para reclamar al gobierno que permitiera a los barcos de SAR llevar a cabo su labor humanitaria. Las OSC que trabajan por los derechos de migrantes y refugiados también **informaron** que estaban experimentando incidentes cada vez más frecuentes, mayormente expresiones de odio, amenazas de muerte, acusaciones de ser traficantes de personas y ataques a sus fuentes de financiación.

BOSNIA Y HERZEGOVINA Y CROACIA: UNA NUEVA RUTA, UN NUEVO DESAFÍO

Bosnia y Herzegovina inicialmente no estaba en la “ruta de los Balcanes”, el recorrido principal de los migrantes que desembarcaban en Grecia e intentaban pasar a través de Europa Central y Oriental. Pero esto cambió en 2018, cuando la cantidad de personas que ingresó al país se **cuadruplicó**. El cambio demostró que asegurar las fronteras, como fue el caso de Croacia, Hungría y Serbia, no necesariamente detiene el movimiento de migrantes, sino que puede desplazarlos. Así, Bosnia y Herzegovina estaría recibiendo a los migrantes expulsados por la vecina Croacia.

Pomozi.Ba, una OSC que brinda apoyo a migrantes y refugiados, llamó la atención acerca del creciente número de llegadas y los **desafíos** a los que se enfrenta la sociedad civil nacional para responder ante la falta de apoyo del gobierno. Los recién llegados se vieron obligados a dormir a la intemperie cuando ya no hubo más sitio en los refugios provistos por las OSC y la ciudadanía. Pero en lugar de ocuparse del tema, los políticos acusaron a las OSC de acoger y ayudar a inmigrantes ilegales. Estas críticas no hicieron que

la sociedad civil dejara de mostrarse solidaria: ante la Cumbre UE-Balcenes Occidentales, que tuvo lugar en mayo, la sociedad civil bosnia emitió una **declaración** en la que pedía que se respetaran los derechos humanos de los migrantes y refugiados, así como de la sociedad civil que trabaja con ellos.

Del otro lado de la frontera, varias OSC **croatas** se **quejaban** de que el Ministerio del Interior interfería con su labor, consistente en brindar asistencia humanitaria y legal a migrantes y refugiados. Informaron que el estado estaba obstruyendo sus investigaciones sobre delitos cometidos contra refugiados, y que habían sido amenazados con la iniciación de procesos legales por ayudar a los refugiados a su llegada a Croacia. Las OSC reclamaron un mayor control civil de la policía y el cumplimiento de las obligaciones del estado para con los refugiados.

UN AMBIENTE HOSTIL: MIGRANTES Y SOCIEDAD CIVIL EN EL REINO UNIDO

En 2018 la política de “ambiente hostil” del **Reino Unido** para con los inmigrantes no autorizados suscitó crecientes controversias a causa del **escándalo Windrush**, provocado por la deportación forzosa al Caribe de unas 60 personas que habían residido legalmente en el Reino Unido durante décadas y por la denegación de derechos fundamentales en el Reino Unido a muchas más. Mientras que estas deportaciones forzadas llegaban a los titulares debido al trato atroz que estaban padeciendo estas personas que habían contribuido a la sociedad británica durante todas sus vidas, se llevaban a cabo otras deportaciones de manera más silenciosa.

Fue justamente para detener un vuelo en el cual 60 personas estaban siendo deportadas a Ghana, Nigeria y Sierra Leona que 15 activistas del grupo **End Deportations** se encadenaron a un avión en el aeropuerto de Stansted en marzo de 2017, impidiendo el despegue. El grupo, que se hizo conocido como “los 15 de Stansted”, fue acusado del delito poco frecuente de poner en riesgo la seguridad de un aeropuerto, tipificado en una ley que había sido aprobada en 1988, en respuesta al bombardeo terrorista de un vuelo sobre Escocia. En su juicio el 15 de diciembre, fueron declarados **culpables** después de que el juez ordenara al jurado ignorar las principales pruebas proporcionadas por los acusados.

El veredicto marcó un día sombrío para la acción de la sociedad civil en apoyo de los migrantes. Puso en evidencia que el estado era particularmente sensible a la revelación de los detalles de su política de “ambiente hostil”, que requiere que las personas sean deportadas en vuelos secretos antes de tener la oportunidad de apelar contra la decisión de deportación. Como consecuencia directa de la acción

“

EN 2018 LA POLÍTICA DE “AMBIENTE HOSTIL” DEL REINO UNIDO PARA CON LOS MIGRANTES NO AUTORIZADOS SUSCITÓ CRECIENTES CONTROVERSIAS.

”

de los 15 de Stansted, **11 de las personas** que iban a ser deportadas en el vuelo bloqueado lograron obtener el derecho legal de permanencia en el Reino Unido.

El veredicto de culpabilidad hizo pesar sobre el grupo la amenaza de la cadena perpetua. Aunque finalmente **no les fue aplicada**, anunciaron su intención de **apelar** sus sentencias condenatorias. El veredicto puso en evidencia que leyes supuestamente aprobadas para combatir el **terrorismo (véase sección 1)** pueden utilizarse para obstruir esferas de acción legítima; ya fuera que las acciones del grupo fueran juzgadas como correctas o desviadas, en ningún caso se trató de actos terroristas. De quedar en firme, el veredicto constituiría un **revés** mayúsculo para la tradición británica de acción directa no violenta, ya que aumentaría el riesgo de que otras acciones similares, incluidas las realizadas en apoyo de migrantes, sean juzgadas y condenadas conforme a las leyes antiterroristas.

BÉLGICA: POLARIZACIÓN EN TORNO DEL TRATO A LOS MIGRANTES

Los problemas vinculados con la inmigración también fermentaron en **Bélgica**. En junio, dos reporteros y tres técnicos del canal de televisión RTBF fueron **arrestados** arbitrariamente por negarse a dejar de grabar una protesta pacífica organizada por el grupo activista #NotInMyName (#NoEnMiNombre), y se les incautó el equipo de grabación. Los manifestantes habían bloqueado el acceso a un nuevo centro de detención en el municipio de Steenokkerzeel, en protesta por la detención de mujeres y niños. Posteriormente se informó que el gobierno estaba emprendiendo demandas contra los manifestantes para recuperar el coste de los daños que, según afirmó, fueron provocados durante la protesta. La irritación en relación con el centro de detención de Steenokkerzeel no desapareció. En agosto se realizó una nueva protesta, y ese mismo mes la policía de la capital, Bruselas, **arrestó** y detuvo brevemente a dos mujeres que organizaban una protesta en topless contra el centro. Las dos manifestantes sostenían una pancarta que decía: “Esto no es un escándalo, pero sí lo es encerrar niños”.

Sin embargo, la polarización en torno al trato a los migrantes se evidenció en una **protesta** realizada en diciembre bajo el lema “Marcha contra Marrakech”, en rechazo al apoyo del gobierno al Pacto Mundial sobre Migración de la ONU, adoptado en Marrakech, Marruecos, ese mismo mes (**véase sección 4**). La protesta, organizada por grupos de extrema derecha, obtuvo un apoyo significativo, ya que asistieron unas 5500 personas. Tras violentos enfrentamientos con la policía, se utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua y unas 90 personas fueron arrestadas. Una contra-protesta en apoyo del Pacto sobre Migración movilizó a unas 1000 personas, incluidos grupos progresistas de la sociedad civil. Como muestra del carácter divisivo del tema, el socio mayor de la coalición gobernante, el partido nacionalista de derecha Alianza Nueva Flandes, **renunció** al gobierno después de que el primer ministro respaldara el Pacto, tras lo cual el gobierno **colapsó** debido a que el primer ministro perdió un voto de confianza.

DINAMARCA: LAS MUJERES MUSULMANAS BAJO ATAQUE

La xenofobia que se moviliza contra migrantes y refugiados también se dirige a las minorías visibles. En mayo, el parlamento de **Dinamarca** aprobó con mayoría abrumadora una ley que **prohíbe** el uso en público del burka, el niqab y otras prendas que cubren la cabeza y el rostro. Se trata de una medida que afecta básicamente a las mujeres musulmanas, un grupo ya de por sí excluido, ya que las formas de vestir propias de otras religiones no se vieron afectadas. Según la nueva ley, las mujeres pueden ser multadas por llevar el rostro cubierto en público. Como lo muestra el ejemplo de las protestas contra el uso obligatorio del hiyab en Irán (**véase más abajo**), los temas del uso de prendas que cubren la cara y la cabeza, la identidad y el estatus de las mujeres, pueden ser complejos y matizados, y gran parte de esa complejidad está ausente del debate en Dinamarca. Dada la cantidad relativamente pequeña de danesas musulmanas que se cubren la cabeza y el rostro, los críticos interpretaron la ley como una concesión al **creciente** sentimiento anti-migrante en el país. El debate parlamentario tuvo un tono decididamente islamófobo; el ministro de Justicia argumentó que las

coberturas islámicas son “irrespetuosas” e “incompatibles con los valores daneses”, y el Partido Popular Danés, la fuerza populista de derecha que obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2015, criticó explícitamente lo que designó como “islamización de Dinamarca”.

La ley danesa formó parte de una ola de medidas similares recientemente introducidas a lo largo de Europa, en países como Austria, Bulgaria y Francia. Estas prohibiciones tienen un elemento en común con la insistencia de Irán en la obligación de las mujeres de usar el hiyab: ambas desestiman la capacidad de las mujeres para elegir voluntariamente si desean, y cómo desean, revelar este aspecto de su identidad.

En agosto, cientos de personas **protestaron** contra la medida. Mujeres cubiertas con burkas y velos se manifestaron junto a personas que llevaban coberturas improvisadas. Unos días más tarde se aplicó la **primera multa** a una mujer que llevaba un niqab en público.

MIGRANTES, REFUGIADOS Y MINORÍAS BAJO ATAQUE EN TODO EL MUNDO

También en otras partes de Europa los grupos de extrema derecha se movilizaron en contra de grupos excluidos. En **Ucrania**, el grupo nacionalista de extrema derecha C14 **atacó** un campamento de romaníes en abril, y hubo otros dos ataques en mayo. Esto despertó en la sociedad civil ucraniana la preocupación de que el odio y la violencia se estuvieran normalizando. **Georgia** también presenció acontecimientos preocupantes en febrero, cuando redes de extrema derecha **anunciaron** su intención de organizar una “patrulla popular” en la capital, Tbilisi, para ocuparse de los migrantes que cometen delitos. Los grupos participantes habían organizado una marcha anti-inmigración en 2017.

Estos desafíos no estuvieron limitados a Europa. En todo el mundo, gobiernos y sectores dominantes de la población se vuelven contra migrantes, refugiados minorías, y estos grupos excluidos se esfuerzan por organizarse para reclamar por sus derechos. La sociedad civil progresista y

defensora de derechos se solidariza con ellos, y a menudo es reprimida por hacerlo.

Los refugiados de la **RDC** se enfrentan a un entorno hostil y difícil en **Ruanda**. En febrero, alrededor de 2000 personas marcharon desde un campamento de refugiados para quejarse de un recorte en las raciones de alimentos de la Agencia de Refugiados de la ONU, la ACNUR. La respuesta de las fuerzas ruandesas fue abrir fuego contra ellas. Al menos dos personas resultaron heridas. Lo peor ocurrió dos días más tarde, cuando la policía **mató** a 11 manifestantes e hirió a más de 20, en su mayoría al desalojarlos violentamente de las oficinas de la ACNUR, que estaban ocupando. En mayo, varios refugiados congoleños fueron arrestados en otro campo tras **enfrentarse** con las fuerzas de seguridad. La violencia dejó un manifestante muerto. Los choques comenzaron cuando residentes del campamento supuestamente arrojaron piedras a funcionarios gubernamentales que estaban de visita; la policía respondió con gases lacrimógenos y munición real. Las tensiones aumentaron debido a la reducción del financiamiento humanitario, que a su vez provocó la reducción de las raciones alimentarias.

La **India** alberga a unos 40.000 refugiados **rohingya** de **Myanmar** (Birmania), parte de una población desplazada de aproximadamente un millón de personas que huyeron de su país para escapar de terribles violaciones de derechos humanos, y en particular de una oleada de violencia genocida durante 2017. La amenaza a la que se enfrentan continúa. En julio, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Yanghee Lee, **informó** que “el espacio democrático en Myanmar continúa deteriorándose considerablemente” y subrayó el uso de leyes represivas y detenciones de manifestantes. En agosto, una misión de investigación de la ONU encontró **evidencia** de crímenes graves contra personas rohingya y otros grupos, y observó que las voces críticas estaban siendo silenciadas en Myanmar. En septiembre, la Corte Penal Internacional dictaminó que tenía jurisdicción sobre la migración forzada de personas rohingya desde Myanmar. Pero a pesar



Activistas pro-refugiados cantan consignas en denuncia del racismo y dando la bienvenida a refugiados a Seúl, Corea del Sur.

Crédito Jean Chung/Getty Images

de estos claros indicios de los continuos peligros para los rohingya en Myanmar, el gobierno de la India parece decidido a obligarlos a regresar.

En octubre, siete personas rohingya fueron **deportadas** de regreso a Myanmar, a pesar de los riesgos que seguramente enfrentarían en un país que no los reconoce como ciudadanos, y en violación del principio internacional de no devolución, que establece que las personas no deben ser devueltas a lugares donde estén bajo amenaza. Las deportaciones formaron parte de un plan anunciado por el gobierno en 2017 para deportar a “ciudadanos extranjeros ilegales”, categoría que potencialmente incluye a las 40.000 personas rohingya en ese país. Las personas rohingya también han sido objeto de violencia y hostigamiento policial y han sido vilipendiadas como terroristas. Ya algunos han optado por huir de India hacia **Bangladesh**, lo cual bien podría ser el objetivo del hostigamiento. Como telón de fondo de esta represión hay un gobierno **nacionalista hindú** que **ataca** al grupo musulmán más vulnerable caracterizándolo como una amenaza para la seguridad nacional.

En **Corea del Sur**, la llegada de alrededor de 500 personas de Yemen a la isla de Jeju sacó lo peor de la gente y alimentó a los grupos anti-derechos, como lo relata la activista surcoreana **Gayoon Baek**:

La sociedad coreana no está muy abierta a otras etnias. A las personas que llegan del sudeste asiático para vivir en el país, les enseñamos a asimilar los hábitos coreanos, en lugar de nosotros aceptar una cultura diferente.

En este caso, en el curso de unos pocos días 800.000 personas firmaron un petitorio en contra de aceptar refugiados. En vez de declarar que aceptaría a los refugiados bajo el derecho internacional, la respuesta del gobierno fue decir que restringiría el proceso de selección de refugiados, verificaría quiénes eran verdaderos y quiénes eran falsos refugiados y expandiría su sistema de patrullas. Desde una perspectiva de derechos humanos esto es decepcionante.

El gobierno no ha demostrado capacidad para controlar el discurso de odio y evitar la organización de grupos religiosos de extrema derecha. Hay grupos evangélicos de extrema derecha que protestan contra propuestas para una ley anti-discriminatoria y que trabajan estrechamente con los medios de comunicación conservadores. Están muy organizados y ejercen una fuerte presión en contra de los derechos LGBTQI y los derechos de los refugiados. Las OSC de derechos humanos reciben incontables llamadas amenazadoras de estos grupos.

Defender los derechos de los tibetanos en **Nepal** puede constituir un peligro legal. En marzo se informó que Adak, un refugiado y activista tibetano residente en Nepal, había sido **detenido** durante 10 días, durante los cuales la policía lo amenazó con deportarlo, luego de publicar en Facebook una foto donde se lo veía posando con la bandera nacional tibetana. Fue puesto en libertad después de que la organización de derechos humanos nepalí HURON **intercediera** por él. Adak es miembro del Grupo de Voluntarios Tibetanos en Nepal, una comunidad de tibetanos que ha organizado protestas pacíficas contra las violaciones de derechos humanos perpetradas por China en el Tíbet. Se ha vuelto **más difícil** expresar opiniones pro tibetanas en Nepal, ya que el país está cultivando relaciones más cercanas con su poderoso vecino.

Mientras tanto, en la propia China, durante 2018 salió a la luz, una vez más, la represión sistemática del gobierno contra la minoría uigur. El pueblo uigur, una minoría musulmana ubicada en la región noroccidental china de Xinjiang, ha sido objeto de persecución durante largo tiempo. Pero la sesión de agosto del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial **reveló** la magnitud del problema. La co-relatora para China del Comité, Gay McDougall, destacó las graves violaciones de derechos humanos, tales como detenciones arbitrarias y prolongadas, que afectan a los uigures y a otras minorías túrquicas musulmanas, y afirmó que más de dos millones de personas habían sido detenidas en “centros de lucha contra el extremismo” y “campos de reeducación”

bajo pretexto de contrarrestar el extremismo religioso y promover la estabilidad social. También dijo que casi todas las formas de expresión religiosa, incluidos el uso de barba larga o velo completo y la posesión de determinados productos halal, han sido criminalizadas. Durante la sesión se proporcionaron **detalles adicionales** sobre el adoctrinamiento político forzado y la **renuncia** forzada a la religión, el castigo colectivo, la vigilancia masiva y el lavado de cerebro de los **niños**, todo lo cual sugiere la existencia de un programa de limpieza étnica en marcha en lo que equivalía a un vasto estado-prisión. No intimidado por la exposición, en octubre el gobierno manifestó su intención de continuar su campaña de detención forzada y adoctrinamiento mediante la **legalización** de “centros de formación profesional”.

El trato del gobierno chino a su minoría uigur guarda similitudes con su supresión sistemática del activismo y las expresiones identitarias en el Tíbet, donde el pretexto de una campaña contra el crimen organizado ahora se utiliza para reprimir el activismo y la defensa de derechos. La promoción del idioma y la cultura locales y la incidencia para proteger el medio ambiente local están ahora prohibidas en el Tíbet, y muchas formas de organizaciones tradicionales y comunitarias también han sido prohibidas en tanto que formas de crimen organizado. En mayo, el activista tibetano **Tashi Wangchuk** fue sentenciado a cinco años de cárcel bajo una ley de seguridad nacional por defender el idioma tibetano. El todopoderoso estado chino parece decidido a eliminar toda forma de identificación en torno de la cual las personas puedan organizarse de manera diferente al modelo de ciudadanos que se espera que sean.

El gobierno de China **rechazó** las críticas a sus abusos de los derechos humanos en el Tíbet y en Xinjiang que se presentaron durante la sesión de su Examen Periódico Universal en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, confiado en su poder económico global y desestimándolas por motivos políticos. El ejemplo de China mostró que cuando el espacio cívico está cerrado y **casi no existe** una sociedad civil independiente, los gobiernos quedan libres de seguir sus peores impulsos.

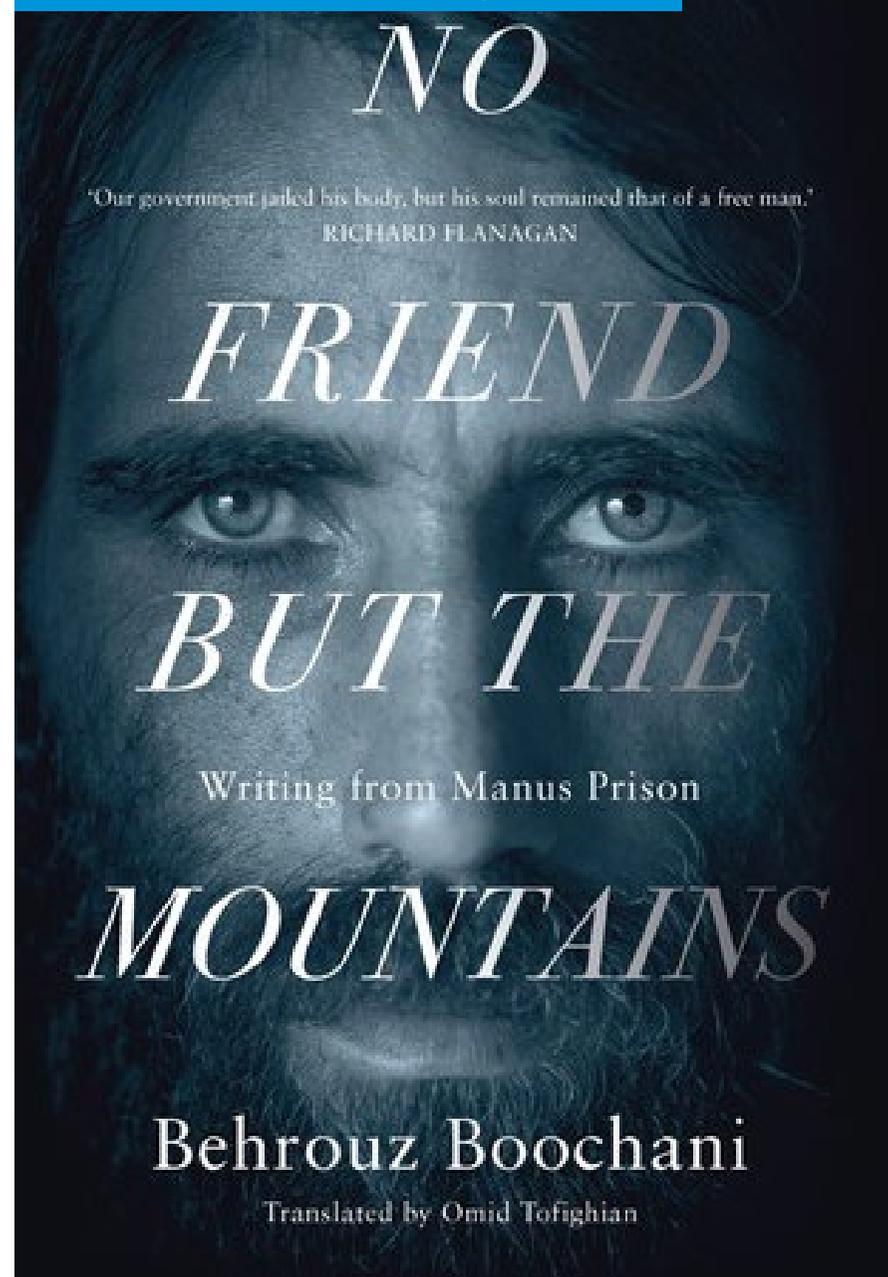
Al igual que los rohingya en Myanmar y los uigures en China, la comunidad **bidún** en **Kuwait** no es migrante, pero es tratada como tal e igualmente marginada. El pueblo bidún es una minoría árabe sin estado cuyos miembros no fueron reconocidos como ciudadanos cuando Kuwait se independizó, y posteriormente fueron clasificados como residentes ilegales a pesar de que muchos no tienen ninguna conexión significativa con ningún otro país fuera de Kuwait. Defender derechos en el marco de un espacio cívico represivo puede ser peligroso. En agosto, el abogado de derechos humanos **Abeer Al-Haddad** recibió varias amenazas luego de publicar un tweet relativo a su trabajo en curso en defensa de los derechos de la comunidad budún, en el cual expresó su intención de demandar al ministro del Aparato Central para Asuntos de Residentes Ilegales. Esta agencia gubernamental ha sido **criticada** por no ocuparse de la situación de la comunidad bidún, y las personas afectadas la han acusado de haber empeorado sus vidas.

LA SOCIEDAD CIVIL EN AUSTRALIA: DESAFIANDO LA “SOLUCIÓN DEL PACÍFICO”

Pocas respuestas a la migración han sido tan controvertidas como el uso por parte del gobierno de **Australia** de centros de detención de ultramar, ubicados en **Nauru** y en la isla Manus, **Papúa New Guinea**, para detener a quienes han ingresado ilegalmente al país. Originalmente conocido como parte de la “solución del Pacífico”, los centros de detención funcionaron de 2001 a 2008, y fueron reabiertos en 2013. Se estima que 1600 personas se encuentran detenidas indefinidamente; muchas han permanecido encerradas durante años. En su discurso de septiembre, Michelle Bachelet **condenó** el sistema offshore de Australia como “una afrenta a la protección de los derechos humanos”. Antes de eso, en julio, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria **describió** a la detención indefinida de refugiados y solicitantes de asilo como arbitraria e ilegal.

Las condiciones dentro de los centros de detención son un tema delicado en Nauru, donde la ayuda australiana que es entregada como parte del

‘Ni un amigo excepto las montañas’, el libro que el periodista kurdo Behrouz Boochani escribió durante su detención ilegal en la isla Manus.



paquete es importante para la economía de la nación isleña y el centro de detención es una de las pocas fuentes de empleo. En octubre, el gobierno de Nauru **ordenó** a MSF que abandonara inmediatamente la isla, acusando a la organización de hacer activismo político. MSF se había dedicado a proporcionar servicios de salud mental a refugiados y solicitantes de asilo. En respuesta, MSF solicitó la evacuación inmediata de todos los detenidos en el centro de Nauru y el fin de la política offshore. Poco después ese mismo mes, a un senador australiano, Nick McKim, le fue **negado** el permiso para visitar Nauru, aparentemente porque el gobierno australiano no apoyaba su visita.

La sensibilidad del gobierno de Nauru en relación con el trato brindado a los solicitantes de asilo en Australia también resultó evidente en julio, cuando Nauru fue sede del Foro Intergubernamental de las Islas del Pacífico. El gobierno **prohibió** el ingreso a Nauru a la Australian Broadcasting Corporation, acusándola de brindar información parcial y falsa; la emisora había informado críticamente sobre los centros de detención. En respuesta, la Galería de la Prensa Parlamentaria Australiana declaró que boicotearía el evento. La prohibición se produjo en un clima ya difícil para la libertad de expresión en Nauru, que **cobra** a los periodistas extranjeros una tarifa elevada y no reembolsable para solicitar la visa, lo cual dificulta la diseminación de información independiente sobre el centro de detención.

De manera similar, cuando en noviembre **fue sede** del foro regional Cooperación Económica Asia-Pacífico, Papúa Nueva Guinea trasladó a los refugiados y solicitantes de asilo enfermos que estaban recibiendo tratamiento médico en la capital, Port Moresby, de regreso a la isla Manus. La medida formó parte de una costosa limpieza de la capital antes de la reunión. La inferencia fue que los refugiados y solicitantes de asilo eran una vergüenza antiestética, inconsistente con la imagen que el gobierno deseaba proyectar, y que era necesario ponerlos fuera de la vista. Un hombre **intentó suicidarse** al enterarse de que sería devuelto a la isla Manus.

Al igual que en Nauru, en Papúa Nueva Guinea las autoridades son evidentemente sensibles a los abusos cometidos en los centros de detención que quedan expuestos ante la mirada internacional. En abril, el escritor iraní kurdo **Behrouz Boochani**, detenido en la isla Manus durante casi seis años, **reveló** que a los periodistas generalmente se les había prohibido acceder a los centros de detención alegando falsos motivos de seguridad nacional y que a los internos se les había negado durante más de tres años el acceso a teléfonos móviles, lo cual los obligaba a usar teléfonos de contrabando. Behrouz escribió un libro, *No Friend but the Mountains* ('Ni un amigo excepto las montañas'), sobre sus experiencias mientras estuvo detenido, componiéndolo de a un mensaje de texto por vez para superar las limitaciones de su capacidad para comunicarse. En enero de 2019 **ganó** el prestigioso Premio Victoriano de Literatura de Australia; su libro podía viajar, pero él no. Behrouz no fue el único detenido que corrió riesgos para llamar la atención del mundo sobre la injusticia de su situación. En agosto, el refugiado sudanés **Bashir Osman** realizó una protesta solitaria contra la falta de atención adecuada por parte de las empresas que dirigen el centro de detención.

En solidaridad con los detenidos que trabajan para llamar la atención sobre la injusticia del trato que reciben, la sociedad civil australiana ayudó, en 2018, a ejercer presión moral sobre su gobierno a través de varias protestas. En julio, con motivo del quinto aniversario de la reintroducción de la política, miles de personas **marcharon** en varias ciudades australianas para pedir la evacuación de los centros. En Melbourne cuatro mujeres fueron procesadas tras ocupar una oficina del Departamento de Asuntos Internos como parte de las protestas. En octubre, más de mil personas se reunieron en **Sydney**, y otras lo hicieron en Melbourne, para llevar a cabo otra **protesta** contra los centros. Esta protesta se produjo después de que 11 niños fueran evacuados del centro de detención de Nauru por motivos médicos, mientras se **informaba** que los niños detenidos estaban experimentando trauma psicológico y cometían actos de autolesión. En diciembre, un informe de MSF **describió** la situación en Nauru como una "crisis de salud mental". En



Cuando el puente internacional Simón Bolívar, que conecta Venezuela con Colombia, fue clausurado en febrero de 2019, los migrantes venezolanos continuaron cruzando a través de las aguas bajas del río Táchira.

Crédito: Joe Raedle/Getty Images

junio se informó que un solicitante de asilo iraní, **Fariborz Karami**, se había suicidado en el centro de Nauru. Se trató de la decimosegunda **muerte** en un centro de detención desde que estos fueran reabiertos.

La presión aumentó, y hacia fines de 2018 la mayoría de los niños detenidos habían sido **evacuados** a Australia. El gobierno pareció haber revertido silenciosamente su política de combatir las órdenes de evacuación en los tribunales. Sin embargo, en relación con numerosos adultos que permanecen en el limbo, se **iniciaron** demandas colectivas en las cuales abogados de derechos humanos alegaron torturas, crímenes de lesa humanidad y daño intencional.

EL ÉXODO VENEZOLANO: UN DESAFÍO REGIONAL

La crisis política de **Venezuela** (*véase sección 3*) también fue una crisis humanitaria, y ésta se convirtió en una crisis migratoria. Según la **Organización Internacional para las Migraciones**, desde 2014 2,3 millones de venezolanos – el 7% de la población del país – han huido del que solía ser uno de los países más ricos de América Latina.

Las exportaciones de petróleo representan el 96% de los ingresos de Venezuela. En 1998 la empresa petrolera estatal PDVSA tenía 40.000 empleados y producía 3,4 millones de barriles por día; para 2013, con el triple de trabajadores, la compañía producía solamente **2,7 millones de barriles por día**, cifra que volvió a reducirse a **1,5 millones en 2018**. Al igual que ocurrió en otros países incluidos en este informe (*véase sección 1*), la economía de Venezuela estaba mal preparada para hacer frente a una caída global en los precios del petróleo. La caída del precio del petróleo, junto con toda una serie de problemas adicionales, dio lugar a una crisis económica que comenzó en 2013 – el año en que murió el presidente Hugo Chávez, reemplazado entonces por Nicolás Maduro.

La inflación rápidamente se salió de control. Según el Fondo Monetario Internacional, la tasa de inflación para 2017 fue del 2600%, y para 2018

se esperaba la increíble tasa de un millón por ciento. La **hiperinflación** tuvo efectos dramáticos sobre el poder de compra. Según los últimos datos oficiales publicados, la tasa de pobreza, que alcanzaba el **34% en 2013**, llegó al **87% en 2018**. La **escasez aguda** de productos básicos, incluidos alimentos, productos de higiene, medicamentos e insumos médicos, provocó una **advertencia** por parte de los relatores especiales de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación y el derecho a la salud, y sobre la pobreza y los derechos humanos. La escasez de medicamentos esenciales supuso un aumento de la **tasa de mortalidad** entre personas con enfermedades crónicas. Un **boletín** de 2017 publicado por el Ministerio de Salud advirtió sobre un aumento del 30% en la mortalidad infantil y un aumento del 65% en la mortalidad materna. La **malaria** volvió a ser endémica.

Como lo describe **Beatriz Borges**, del **Centro de Justicia y Paz**, pese a las advertencias de la sociedad civil la crisis humanitaria se vio exacerbada por la reticencia de un gobierno asediado a buscar ayuda internacional:

*Como lo expresamos en un **informe** presentado en julio al Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de la ONU, desde el año 2015 la sociedad civil venezolana ha realizado un esfuerzo sostenido por alertar, con base en evidencias, sobre la emergencia humanitaria compleja de gran escala, severidad y urgencia que atraviesa Venezuela. Esta emergencia se ha originado en las políticas gubernamentales que han desmantelado el estado de derecho y el orden democrático; destruido las capacidades económicas e institucionales del país, privando a millones de venezolanos de bienes y servicios esenciales; y utilizado la coerción y la violencia estatal contra quienes cuestionaban o se oponían a esas políticas.*

A costa de extensos y profundos sufrimientos y daños a la población venezolana, el gobierno ha ignorado los ofrecimientos y criminalizado la cooperación y la asistencia humanitaria internacional, pese a los reclamos de las personas afectadas, las OSC, la Asamblea

Nacional, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, los comités de los órganos de tratados internacionales y los relatores especiales del sistema de protección universal de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, el Mercosur y países de varios continentes.

A partir de 2013, Venezuela se hundió en una espiral descendente de huelgas, protestas y represión. Todas las principales organizaciones **regionales** e **internacionales** de derechos humanos y las OSC internacionales están de acuerdo en que Venezuela está atravesando una crisis de derechos humanos en toda regla, posiblemente la peor de su historia. Para escapar del hambre, la **violencia** social y política y la represión estatal, los venezolanos comenzaron a **emigrar** en grandes cantidades. Colombia, el principal destino, recibió 870.000 venezolanos, seguido de Perú (354.421), Estados Unidos (290.224), España (208.333), Chile (105.756), Argentina (95.000), Panamá (75.990), Brasil (50.000), Italia (49.831) y Ecuador (39.519). Dada la incapacidad del gobierno venezolano para emitir pasaportes, los tiempos de espera aumentaron y el **mercado negro** se disparó. Según la **estimación** del ACNUR, el 60% de los venezolanos en el extranjero carecía de estatus legal y documentación adecuada.

Los venezolanos que emigraron no lo hicieron a la ligera, ya que enfrentaron el escarnio público de las autoridades de su país. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente **afirmó** que las personas migraban en busca de estatus y porque estaba “de moda”, mientras que el presidente Maduro les **dijo** que dejaran de limpiar baños y regresaran a Venezuela. La vicepresidenta Delcy Rodríguez arrojó dudas sobre el alcance de la crisis y **advirtió** que el número de migrantes estaba siendo inflado para justificar una intervención internacional liderada por los Estados Unidos. El ministro de Comunicaciones **desestimó** la crisis migratoria y humanitaria como “noticia falsa”.

La migración masiva creó presión en otros países. Colombia, que primero estableció una política de “brazos abiertos”, experimentó una división interna

en torno a la inmigración, ya que muchos expresaron **preocupación** por su impacto sobre el empleo. En respuesta, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia **instó** a la comunidad internacional a adoptar un enfoque colectivo para hacer frente a la crisis, incluso mediante el establecimiento de un fondo multilateral. Se registraron **disturbios anti-inmigrantes y ataques violentos** en Brasil, que en octubre había elegido presidente al populista de derecha Jair Bolsonaro (**véase sección 3**). Las autoridades de **Ecuador** y **Perú** comenzaron a exigir pasaportes e identificaciones a los venezolanos que ingresaban a sus países, a pesar de que la mayoría de la gente carecía de ellos.

Como lo señaló la CIDH, los migrantes venezolanos se enfrentan a discriminación, amenazas a sus vidas e integridad personal, violencia sexual y de género, abuso, explotación, incluida la posibilidad de convertirse en víctimas de trata y desaparición de personas, y obstáculos para obtener protección internacional. Tienen acceso limitado a asistencia humanitaria, vivienda, salud, alimentación y educación.

Pero la sociedad civil de los países a los que están migrando los venezolanos está tratando de tener un impacto positivo sobre las vidas de los migrantes. Hablamos sobre esto con **Alicia Pantoja**, de **Manos Veneguayas**, una OSC liderada por venezolanos en **Uruguay** que brinda apoyo a migrantes venezolanos. Ante todo, Alicia deja claro que muchos no han tenido más remedio que huir:

La situación en Venezuela es crítica: literalmente, la gente se está muriendo de hambre. Ha aumentado la desnutrición; se ven cada vez más casos de niños que no son más que piel y huesos. Mueren adultos mayores; mueren niños en los hospitales, por simples infecciones completamente evitables, simplemente porque los hospitales están contaminados. Veo un futuro muy duro, ya que es difícil que esa generación que se está criando ahora en Venezuela tenga fuerzas para sacar el país adelante.

Los venezolanos no están emigrando en busca de mejores

oportunidades; están emigrando para salvar sus vidas. Desde 2014 para acá, la calidad de vida en Venezuela ha desmejorado hasta niveles inimaginables. Para quienes tenemos a nuestra familia allá, esto es muy duro. Cuando estás en la noche en tu casa y suena el teléfono se te para el corazón. Siempre temes recibir una llamada en la que te digan que fulano se murió o que a fulano lo mataron.

Más que lograr que otros países se abran para que siga llegando una migración venezolana masiva, habría que hacer algo para cambiar la situación que hace que semejante cantidad de gente abandone Venezuela. Pero entretanto, buscamos ayudar a los venezolanos que llegan a Uruguay.

Alicia continúa describiendo el crucial apoyo emocional y material que su organización brinda a quienes llegan a Uruguay:

Inicialmente nuestra idea era dar contención emocional. Estaba llegando gente que no sabía cosas tales como que este país es frío en invierno y caluroso en verano, no tenía idea de lo que es vivir en un país de cuatro estaciones. Muchos llegaban sin nada, así que hemos hecho colectas, por ejemplo, de ropa de abrigo.

La idea inicial era acompañar a los recién llegados en la adaptación a Uruguay, para que sintieran que no estaban solos en el proceso migratorio. Como la principal urgencia para los que llegan es conseguir un empleo, primero creamos un banco de trabajo, al que llamamos Clasificados Veneguayos. Ahora tenemos una base de centenares de currículums que facilitamos a posibles empleadores. Y si bien mucha gente solicita empleadas de servicio doméstico, nosotros tratamos de que las personas se inserten dentro de sus profesiones. Aunque lo más importante es que al menos uno de los integrantes de la familia tenga ingresos. Todos los trabajos dignifican. Nosotros damos charlas para que los recién llegados conozcan sus derechos respecto a la salud y el trabajo, y los ayudamos a armar

el currículum o a prepararse para una entrevista de trabajo. También los apoyamos para que puedan obtener su documentación.

Hemos hecho un censo para relevar las necesidades de los venezolanos que están llegando a Uruguay. Para los que están llegando ahora, a la búsqueda de trabajo se suma el problema de la vivienda. La desesperación en aumento está haciendo que migren grupos familiares completos, lo que vuelve más difícil el proceso. Antes venía primero el jefe de familia, generalmente un hombre solo que llegaba a una residencia, trabajaba y al cabo de tres o cuatro meses podía conseguir una garantía para alquilar un monoambiente, traer a la esposa y después trabajar los dos y conseguir algo más grande. Pero ahora están llegando familias de cuatro o cinco personas, y lo que les cobran las residencias y pensiones las dejan fuera de su alcance. Legalmente, la garantía para alquilar solo se consigue luego de estar empleado un mínimo de tres meses. Caso contrario, se necesita traer mucho dinero, y en el caso de los venezolanos que están emigrando, si digo que el 1% trae algún respaldo económico, ya estoy exagerando. Los refugios están a reventar porque, además, no solo están llegando venezolanos, sino también dominicanos y cubanos.

Sabemos que con los inmigrantes es común que la reputación de todos quede en entredicho por las acciones de unos pocos. Cuando un venezolano mete la pata, luego resulta que todos los venezolanos son incumplidos o no tienen palabra. Así que para ayudar a la gente a ubicarse en un empleo somos muy cuidadosos. Cuando llegan y nos dicen “estoy desesperado, quiero trabajar en lo que sea”, les pedimos que piensen cuál es su límite, porque se necesita un compromiso, no pueden estar en un empleo dos semanas y luego irse.

Por supuesto que hay gente que piensa que el venezolano le viene a quitar oportunidades al uruguayo. Y obviamente no es cierto: simplemente hay un abanico de ofertas y hay quien encaja y quien no. Si bien hay muchos profesionales venezolanos trabajando como conductores de Uber, meseros, vendedores y cadetes, también hay profesionales empleados dentro de su área: enfermeros, fisioterapeutas, ingenieros, incluso algunos arquitectos que han podido revalidar sus títulos. La migración de profesionales venezolanos ha sido muy importante para Uruguay, ya que el país está accediendo a un personal muy bien preparado en cuya formación no ha tenido que invertir nada.

Finalmente, Alicia enfatiza que espera que llegue el día en que ella misma y al menos algunos de los que se han ido de Venezuela puedan regresar:

“

LA DESESPERACIÓN EN AUMENTO ESTÁ HACIENDO QUE MIGREN GRUPOS FAMILIARES COMPLETOS, LO QUE VUELVE MÁS DIFÍCIL EL PROCESO.

”



Los integrantes de la caravana migrante atravesaron México a pie, luego de cruzar desde Guatemala en octubre.

Crédito: John Moore/Getty Images

Hay algunos que consideran que su vida ahora está aquí y han venido para quedarse, pero un alto porcentaje tiene la visión de que está aquí para aprender porque el plan es volver para reconstruir nuestro país. Yo misma tengo ganas de volver, y creo que la mayoría de la gente piensa que esto es algo temporario, que nuestro país va a salir adelante y nos va a necesitar. Entretanto, lo mejor que podemos hacer es tratar de dejar una honda huella en este país que nos está recibiendo para que el día mañana puedan decir que Venezuela hizo su aporte.

LA FRONTERA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: SOCIEDAD DIVIDIDA, ACTIVISTAS BAJO ATAQUE

El éxodo venezolano no fue el único episodio de migración registrado durante 2018 en la región. Muchas personas **huyeron** de la violencia letal ejercida por el estado de **Nicaragua** contra manifestantes (**véase sección 1**), como resultado de lo cual **Costa Rica** recibió unas 30.000 solicitudes de asilo.

La caravana de migrantes que partió desde **Honduras** y **marchó** en dirección norte, hacia los **Estados Unidos** a finales de 2018 tampoco fue la primera de este tipo – de hecho había habido una más pequeña a principios de 2018 – pero por el momento en que ocurrió, coincidió con un polarizado y febril debate sobre la inmigración en los Estados Unidos. Alrededor de 500 personas procedentes de **El Salvador**, **Guatemala** y **Nicaragua**, además de Honduras, partieron en octubre con la intención declarada de caminar hasta los Estados Unidos para escapar de la represión, la violencia y la pobreza. En Estados Unidos, los integrantes de la caravana fueron rápidamente demonizados por los partidarios del presidente Trump, quienes los caracterizaron como criminales e izquierdistas y como una fuerza invasora, en un intento de usar el tema para sumar apoyos para las elecciones de noviembre. El gobierno de Trump prometió responder con la fuerza a todo intento de ingreso a los Estados Unidos y envió **tropas** a su frontera con **México**. También **amenazó** con retirar la ayuda a los estados vecinos que permitieran el paso de la caravana.

Cuando la caravana llegó a Guatemala en octubre, uno de sus líderes, el periodista y activista **Bartolo Fuentes**, fue arrestado y deportado a Honduras. La medida fue condenada por la sociedad civil como respuesta a la presión del gobierno estadounidense y como reacción al trabajo de Bartolo, que informaba sobre la caravana y los abusos de derechos humanos experimentados por sus participantes. La CIDH expresó **preocupación** por las reiteradas violaciones de derechos humanos padecidas por los miembros de la caravana y pidió su protección. Pero cuando la caravana intentó cruzar a México en masa en vez de esperar un procesamiento individual, fue recibida por la policía antidisturbios y dispersada con gases lacrimógenos. Más tarde, después de que el grupo hubo ingresado en México,

el activista estadounidense **Irineo Mujica**, que había estado ayudando con la provisión de ayuda humanitaria, fue arrestado. A pesar de las amenazas y violaciones, los números de migrantes aumentaron a medida que la caravana avanzaba, y hacia finales de noviembre varios miles de personas estaban acampadas en la frontera entre México y Estados Unidos. Cuando muchas de ellas, incluidas familias con niños pequeños, intentaron entrar en los Estados Unidos, fueron dispersadas con gases lacrimógenos.

El telón de fondo fue, sin duda, el contexto político en el cual el presidente Trump y sus partidarios hicieron de la migración a través de la frontera México-Estados Unidos un problema central, demonizando a los inmigrantes ilegales tratándoles como criminales violentos y colocando en primer plano la promesa de campaña, aún incumplida, de construir un muro fronterizo.

La retórica afectó también a los que ya estaban en los Estados Unidos. Bajo la administración de Obama se constituyó un movimiento de derechos civiles integrado por personas que de niñas habían sido llevadas ilegalmente desde México a los Estados Unidos por sus padres, y que habían crecido en los Estados Unidos sin conocer otra cosa. El grupo se hizo conocido como el movimiento de los **Dreamers**, en referencia al proyecto de Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros (**DREAM**, por sus siglas en inglés), una propuesta que otorgaría a más de un millón de jóvenes la oportunidad de solicitar la residencia legal permanente y posiblemente la de tramitar luego la ciudadanía estadounidense. El proyecto fue presentado por primera vez en 2001, pero nunca fue aprobado por un Congreso dividido en torno del tema.

Cuando el proyecto de ley fracasó nuevamente en 2012, el presidente Obama instituyó por decreto una solución menos ambiciosa, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia (**DACA**, por sus siglas en inglés). Este decreto permitió a muchos jóvenes inmigrantes en situación irregular solicitar una “acción diferida”, es decir, el compromiso del gobierno federal de no iniciar un proceso de deportación en su contra durante dos años. Las personas que tuvieron éxito con su solicitud recibieron permiso

para trabajar y estudiar. Como resultado de ello, miles de jóvenes tuvieron por primera vez la oportunidad de trabajar legalmente. Las investigaciones sobre sus efectos **indicaron** que los beneficiarios del DACA experimentaron un aumento en sus salarios y una mayor movilidad social. A pesar de la creciente importancia de la migración como tema político, las encuestas también mostraron que una abrumadora mayoría de los ciudadanos estadounidenses – el 87% – estaba **de acuerdo** con proteger a los “soñadores”.

Sin embargo, en septiembre de 2017 el gobierno de Trump implementó una promesa anti-inmigración que había hecho durante la campaña, ordenando el cese del procesamiento de nuevas solicitudes. Como las protecciones previstas por DACA eran temporales, esto implicó que todas las protecciones expirarían antes de 2020. Los Dreamers se pusieron en acción y se reunieron en Washington DC para presionar al Congreso. En marzo, en la fecha propuesta para la finalización del programa, se manifestaron en la capital y en otras ciudades de los Estados Unidos. Para entonces, los jueces habían dictaminado, en dos fallos emitidos en los primeros meses de 2018, que el proceso de renovación debía **continuar**; en abril, un nuevo **fallo judicial** subrayó que también se deberían aceptar nuevas solicitudes. El tema se convirtió en una especie de partido de fútbol político, cuando el presidente Trump intentó condicionar la continuación del programa a una votación positiva para financiar el muro prometido; a finales de diciembre, el tema de la financiación del muro llegó a un punto muerto y provocó el cierre del gobierno federal más prolongado en la historia de los Estados Unidos, que se extendió durante gran parte de enero de 2019. Los Soñadores continuaron **organizándose** para lograr que, en un contexto político frenético, la cuestión de su futuro permaneciera en la agenda política.

Otra acción de la administración Trump que generó división durante 2018 fue la política de “**tolerancia cero**”. Esta política, lanzada en abril, reemplazó los procesos civiles de deportación con procesos penales contra quienes fueran encontrados cruzando ilegalmente la frontera mexicana, lo cual dio como resultado la separación de niños de sus padres. En efecto, cuando los

adultos detenidos eran sometidos a un proceso penal, quedaban detenidos en la cárcel, mientras que sus hijos eran reubicados en instalaciones del gobierno – algunas de ellas, sitios improvisados en bases militares. Sorprendentemente, quedó en evidencia que esta **práctica** había estado ocurriendo desde mucho antes del anuncio de la política de “tolerancia cero”; una vez establecida esta nueva política, sin embargo, la cantidad de separaciones había aumentado y el fenómeno había salido a la luz. Lo que resultó aún más perturbador fue que la política pareció tener una intención **disuasoria**: se suponía que las imágenes de las separaciones familiares mantendrían alejados a otros adultos que intentaban cruzar la frontera con sus hijos.

La política de separación familiar fue suspendida en junio, en respuesta a la furiosa reacción del público, alimentada por videos que mostraban niños en jaulas y reclamando en llanto por sus padres. Aunque fue de corta duración, la política separó de sus padres a por lo menos 3000 niños; según algunas fuentes, es posible que el número **superara** los 5000 contando desde el inicio del gobierno de Trump. No se había hecho ningún plan para **reunir** a las familias que habían sido destrozadas. Aunque la política fue un **fracaso** en todos los frentes, en noviembre se **anunció** una nueva medida divisiva y de línea dura: las personas que cruzaran ilegalmente la frontera serían consideradas inelegibles para obtener asilo. La prohibición, que efectivamente abrió las puertas a las deportaciones **sumarias**, fue inmediatamente **bloqueada** por una decisión judicial, que determinó que el presidente Trump no tenía autoridad para anular las leyes migratorias vigentes.

Las protestas públicas tuvieron un rol a la hora de ejercer la presión que obligó a revertir la política de “tolerancia cero”. Alrededor de 15.000 personas **marcharon** en Los Ángeles el 1º de Mayo para reclamar por los derechos de los migrantes junto con los derechos de los trabajadores, y cientos **protestaron** contra las separaciones familiares durante el Día Nacional de Acción celebrado en junio. A fines de junio se llevaron a cabo alrededor de 700 **protestas** en ciudades de los Estados Unidos, incluidas

las ciudades fronterizas, bajo la consigna “Las familias deben estar unidas”. En agosto, unos 2000 trabajadores sindicalizados **manifestaron** contra la política migratoria en Filadelfia. Las protestas continuaron durante todo el año. En diciembre, bajo el lema “**El amor no sabe de fronteras**”, se llevó a cabo una serie de mítines de una semana de duración en apoyo de los migrantes; en un **evento** al que asistieron unas 400 personas en San Diego, cerca de la frontera, fueron arrestadas por lo menos 32 personas.

En junio, un movimiento espontáneo conocido como **Ocupar ICE** (la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas) hizo su primera aparición pública frente a la oficina de ICE en Portland, Oregón. La protesta comenzó con algunas personas que exigían que la agencia se fuera de la ciudad y creció rápidamente en el transcurso de una semana, durante la cual la gente acampó fuera de la oficina. Esto obligó a cerrar el edificio, hasta que el Departamento de Seguridad Nacional intervino para despejar la zona. La ocupación de Portland terminó con ocho manifestantes **arrestados**. Poco después, ocupaciones similares se instalaron en otras ciudades, tales como Filadelfia, San Diego y San Francisco. Cuando una ocupación era desalojada, una nueva aparecía en otra ciudad, bajo la inspiración viral de los reportes de otras ocupaciones, de modo que las protestas frente a las oficinas de ICE **continuaron**. “**Abolición de ICE**” se convirtió en un grito de batalla que pronto sería **adoptado** por algunos candidatos demócratas en las elecciones de noviembre.

Esta oposición provocó a su vez una reacción violenta de las autoridades, que embistieron contra los defensores de los derechos de los migrantes sobre la base de su estatus migratorio. Ravi Ragbir, líder de la **New Sanctuary Coalition** (Coalición del Nuevo Santuario), una red de grupos religiosos que abogan por los derechos de los migrantes, fue uno de los críticos **atacados**. En enero, Ravi quedó **detenido** tras un chequeo de rutina de ICE. A pesar de que reside legalmente en Estados Unidos desde 1994 y está casado con una ciudadana estadounidense, corre el riesgo de ser deportado a **Trinidad y Tobago** con la excusa de una antigua **condena**. Ravi está convencido de que está siendo perseguido por sus duras críticas a las políticas migratorias



En junio, un grupo de activistas protestó frente a las oficinas de ICE en Portland, Oregon.

Crédito: Diego G. Díaz/Icon Sportswire vía Getty Images

de la actual administración. En el momento de la redacción de este informe, continúa **apelando** contra su deportación.

Otros activistas han sido sometidos a medidas similares. En enero, el activista **Jean Montrevil** fue deportado a **Haití** después de más de tres décadas viviendo en los Estados Unidos. En marzo, tras un chequeo rutinario, ICE **detuvo** a Alejandra Pablos, una conocida activista de Arizona. Alejandra, que fue traída a los Estados Unidos desde México cuando era un bebé, se identifica como una “soñadora” y **piensa** que también fue atacada por su activismo. Ya había sido detenida en enero, en una protesta pacífica contra las redadas y el exceso de vigilancia de ICE, y nuevamente en marzo, cuando permaneció detenida durante 43 días antes de ser liberada bajo una fianza de 8000 dólares. Su activismo tuvo para ella un costo material: mientras estuvo detenida **perdió** su trabajo.

Lo que estos casos tuvieron en común fue que los activistas fueron doblemente castigados sobre la base de condenas penales anteriores, imponiéndoles un segundo castigo bajo la forma de deportación repentina. En marzo, la activista Daniela Vargas también se convirtió en objetivo; fue **detenida** tras una conferencia de prensa sobre los derechos de los migrantes en la cual **expresó** su temor a la deportación. El caso atrajo atención nacional porque su permiso DACA había **expirado** pero su solicitud de renovación se encontraba bajo revisión.

El apoyo humanitario a los migrantes también fue criminalizado. En septiembre se informó que activistas el grupo humanitario religioso No More Deaths (‘no más muertes’) que trabajaban cerca de la frontera en Arizona estaban siendo hostigados y arrestados por dejar agua en el desierto para ayudar a las personas que cruzan desde México. El acoso aumentó luego de que el grupo publicara un **informe** que alegaba que la patrulla fronteriza de los Estados Unidos estaba destruyendo intencionalmente los envases con agua. El día en que se publicó el informe, un miembro del grupo fue **arrestado** y acusado de “albergar a extranjeros ilegales” y por lo menos otros siete fueron acusados en los días siguientes. A través de **mensajes**

filtrados se supo que el grupo había sido atacado por sus críticas públicas a las políticas y agencias migratorias. Como resultado de la represión contra la respuesta humanitaria, escasearán los recursos que podrían **salvar las vidas** de quienes realizan el peligroso cruce a través del desierto.

En el mismo discurso en el cual criticó la acción de Italia contra las operaciones de SAR y el enfoque migratorio de Australia, Michelle Bachelet también **condenó** la política de separaciones familiares del gobierno de Trump, junto con la violación por parte del estado del principio de no devolución, las limitaciones al derecho de apelación que privan del debido proceso a las personas deportadas, y la falta de reparación para las familias migrantes separadas por el estado. Muchos actores de la sociedad civil que alzaron la voz, protestaron y brindaron ayuda humanitaria durante 2018 habrán recibido con agrado sus palabras. Sin embargo, en un contexto en el cual los poderosos se ensañan con las personas con menos poder para obtener ventajas políticas, la sociedad civil aún se debe el desafío, en Estados Unidos y más allá, de montar una resistencia efectiva ante un mundo de muros cada vez más implacables.

DESAFIANDO AL PATRIARCADO: LA LUCHA IMPARABLE POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

La indignación y la determinación de lograr un cambio sistémico, que en 2017 impulsó a los movimientos **#MeToo** y **#TimesUp**, no ha desaparecido. En todos los países, los problemas de acoso sexual y discriminación, así como los más amplios desequilibrios de poder subyacentes, han permanecido en gran medida inalterados, y la demanda y la presión en dirección de un cambio estructural se han mantenido. Un año después de que se conocieran

las acusaciones que provocaron la caída del magnate de Hollywood Harvey Weinstein y revelaron los abusos perpetrados por una larga serie de hombres poderosos en un país tras otro, una **investigación** reveló que el hashtag **#MeToo** había sido utilizado más de 19 millones de veces, con un promedio de 55.319 usos diarios. La resonancia global de los problemas planteados se evidenció en el hecho de que casi un tercio de esos tweets no estaban escritos en inglés. Si bien los críticos inicialmente intentaron presentar al movimiento como liderado por mujeres relativamente privilegiadas empleadas en la industria del entretenimiento en el norte global, la realidad contradujo esta descripción. En país tras país, y en todo el sur global, muchas mujeres valientemente dieron un paso adelante, ofrecieron su testimonio y se constituyeron en sujetos partícipes de una creciente ola de cambio.

Como lo sugieren los siguientes ejemplos, el movimiento se asoció a una variedad de causas en diferentes contextos, conectando luchas contra la desigualdad económica, la exclusión política y los derechos sobre el propio cuerpo. Las respuestas a menudo fueron interseccionales: personas que experimentan **formas de exclusión superpuestas** – tales como las mujeres indígenas, las mujeres pobres y las jóvenes – se colocaron en primer plano y dejaron en evidencia las múltiples dinámicas estructurales que resultan en la negación de sus derechos. Aunque en algunos casos fueron iniciados por mujeres de alto perfil y con acceso a los medios de comunicación que tomaron la iniciativa para contar sus historias, estos movimientos obtuvieron su fuerza de la suma de las voces de muchas personas que siguieron el ejemplo al sentirse empoderadas para alzar su voz.

Algo que muchas veces se pasó por alto fue el impacto del movimiento sobre el discurso y la forma en que el movimiento desafió y cambió el modo en que muchos hombres hablan y piensan acerca de sus roles y conductas. Expresiones que antes eran desconocidas para muchas personas – tales como cultura de la violación, mansplaining y masculinidad tóxica – son ahora de uso y comprensión más corriente. Al mismo tiempo, por supuesto, ha habido una fuerte reacción de los grupos anti-derechos, cuya confianza en sí mismos continuó aumentando.

COREA DEL SUR: #METOO TOMA IMPULSO

Durante 2018 continuó el impulso de protesta de 2017 en **Corea del Sur**, encarnado en la **Revolución a la luz de las velas**. Además de manifestarse a favor del cambio político y de los derechos laborales (*véase sección 3*), la ciudadanía se concentró en exigir los derechos de las mujeres. En enero, la fiscal Seo Ji-hyun reveló que había sido acosada sexualmente por un alto funcionario del Ministerio de Justicia, generando la chispa que encendió la indignación del #MeToo coreano.

Ranhee Song, de **Línea Directa para Mujeres de Corea**, describe la movilización de las mujeres de Corea del Sur:

El detonante fue el hecho de que la Sra. Seo es una fiscal y salió en televisión hablando sobre su caso. En Corea se ha tendido a culpabilizar a las víctimas, y por eso generalmente las víctimas no se exponen en público. Después de la entrevista con la Sra. Seo, muchas personas en Corea comenzaron a unirse a la campaña del #MeToo. A pesar de ser una fiscal, la Sra. Seo todavía no había podido hablar sobre el acoso sexual que había sufrido. Esto enojó a muchas personas que se dieron cuenta de lo difícil que es hablar sobre el acoso sexual. Hubo algunos casos de alto perfil relacionados con figuras políticas y de la industria del entretenimiento, pero también innumerables mujeres comunes y corrientes compartieron sus historias. De esa manera, el movimiento #MeToo mostró un panorama muy claro de la realidad del acoso sexual en Corea.

En Línea Directa de Mujeres de Corea recopilamos una lista de delincuentes sexuales conocidos. En el transcurso de un mes, la lista ya contenía 139 nombres. Queríamos mostrar cuán amplio y generalizado es el problema.

Las demandas del movimiento #MeToo son simples: castigo de los delincuentes, fortalecimiento de las garantías de los derechos humanos de quienes padecen acoso, y cambios en la actitud del gobierno hacia el acoso sexual. Si bien su objetivo principal es el gobierno, también cuestiona nuestra cultura como sociedad.

Como suele suceder, el movimiento se amplió rápidamente desde su foco inicial en el acoso sexual para abarcar temas más amplios de denegación de derechos humanos a las mujeres:

En el camino, el movimiento #MeToo se ha ampliado y ha comenzado a tocar muchos otros temas: la discriminación de género en el lugar de trabajo, el acoso anti-feminista, el delito de espionaje con cámaras ocultas, la discriminación de género en las investigaciones y dentro del sistema judicial, y muchos más. En Corea la brecha salarial es inmensa y el techo de cristal



Ciudadanos surcoreanos reclamaron el fin del acoso sexual en las protestas #MeToo de 2018.

Crédito: Seung-il Ryu/NurPhoto vía Getty Images

es demasiado difícil de romper, por lo cual el número de mujeres en puestos clave de poder en el lugar de trabajo sigue siendo insignificante. Y dentro del sistema legal, las víctimas a menudo deben demostrar cuán fuertemente resistieron la agresión sexual; caso contrario son culpabilizadas en vez de apoyadas. Se necesitan cambios muy profundos.

En marzo se realizaron movilizaciones para el **Día Internacional de la Mujer** y las protestas continuaron a lo largo de 2018. Como lo indica Ranhee, uno de los puntos críticos fue el uso de cámaras ocultas para tomar fotografías ilícitas y luego compartirlas en sitios web pornográficos. En mayo, por lo menos **12.000** mujeres protestaron por las investigaciones policiales sesgadas de las denuncias de delitos cometidos con cámaras ocultas contra mujeres. Señalaron que las víctimas masculinas de delitos cometidos con cámaras ocultas reciben una respuesta policial mucho mejor que las mujeres, pese a que la mayoría de las víctimas son mujeres. Las **estadísticas** indican que solo el 3% de los hombres acusados de delitos con cámaras ocultas son arrestados. Esta discrepancia simboliza la discriminación más amplia que las mujeres experimentan en cada faceta de sus vidas.

Las protestas aumentaron de escala; en agosto unas **70.000** personas, muchas de ellas mujeres que llevaban las camisetas rojas que identifican al movimiento, además de máscaras y gafas de sol para simbolizar su oposición a la filmación ilegal, salieron a las calles de Seúl, la capital. La escala del enfado en torno del tema también se evidenció en el hecho de que más de **200.000** personas apoyaron una petición en el sitio web de la presidencia para exigir mayores castigos para los delincuentes y la prohibición de la venta de cámaras espía. El mensaje tuvo su impacto: en junio, el presidente Moon Jae-in **reclamó** castigos más severos para los autores de delitos con cámaras espía y una mayor protección para las víctimas, y en septiembre el gobierno de la ciudad de Seúl anunció planes para aumentar las inspecciones de baños para detectar cámaras ocultas. Las protestas continuaron, y la quinta movilización, realizada en octubre, reunió a unas **60.000** personas vestidas con impermeables y paraguas rojos. En diciembre, el movimiento contra las

cámaras espía recibió un espaldarazo cuando la BBC reconoció a **Park Sooyuen**, una de las líderes de la protesta, como una de las 100 mujeres más influyentes del año.

En otra protesta en agosto, **cientos** de mujeres se manifestaron frente al edificio de un tribunal para rechazar el veredicto de no culpabilidad que favoreció a un ex político de alto rango que había sido acusado de abusar repetidamente de su secretaria. Los grupos de defensa de los derechos de las mujeres declararon que el veredicto mostraba lo difícil que es desafiar la impunidad por abusos sexuales cometidos por hombres poderosos. En noviembre también los estudiantes encabezaron una **protesta**, “School Me Too”, contra el acoso sexual y el maltrato cometido por maestros.

Finalmente, el año 2018 también presencié una tendencia creciente en las redes sociales consistente en desafiar los preconceptos sociales y la publicidad convencional sobre las mujeres y la belleza, que tomó la forma del movimiento “**escapar del corsé**”. Como parte de este movimiento, muchas mujeres publicaron en las redes sociales imágenes de sí mismas sacándose cosméticos y productos para la piel. Un video en el cual lo hacía la celebridad de YouTube Lina Bae se volvió viral y atrajo más de cinco millones de visitas, pero también le atrajo amenazas de muerte, lo cual resultó revelador del desafío que siguen enfrentando las mujeres surcoreanas.

Otro blanco del activismo fue la reforma de las leyes de Corea del Sur sobre difamación, criticadas por favorecer a personas poderosas mediante la amenaza de sanciones severas que disuaden a las mujeres de hablar. La sociedad civil también presentó una propuesta para establecer una nueva agencia de investigación que garantice el control de funcionarios poderosos que de otra manera podrían cometer abusos con impunidad. Lo que esto sugiere, tal como lo relata Ranhee, es que la sociedad civil está liderando la respuesta y tomando medidas prácticas para desafiar la desigualdad:

En primer lugar, formamos Acción Ciudadana con el movimiento #MeToo, una red de organizaciones civiles y feministas, además de individuos. Casi 340 organizaciones se unieron al grupo.

Organizamos protestas reclamando el fin del acoso sexual y la discriminación de género. Desarrollamos programas de discusión con la ciudadanía y tenemos planes para expandir el movimiento #MeToo. Además del movimiento Acción Ciudadana con el movimiento #MeToo, muchos otros grupos, grandes y pequeños, realizaron numerosas manifestaciones, programas de discusión y conferencias.

Creo que el logro indiscutible de #MeToo es que las mujeres han despertado a la realidad de la vida de las mujeres en Corea. Muchas mujeres ahora dicen: “no podemos volver al período anterior a #MeToo”. Se han abierto muchas posibilidades para lograr un cambio. El movimiento #MeToo nos muestra que nosotros, la sociedad coreana, tenemos mucho trabajo que hacer. #MeToo es un movimiento feminista, y el feminismo perfecciona la democracia.

Las mujeres de Corea del Sur saben que tienen el poder para lograr un cambio. Es improbable que el impulso decaiga.

CHILE: LOS ESTUDIANTES RECLAMAN UN CAMBIO

Al igual que Corea del Sur, Chile es un país con una fuerte tradición de protesta, donde las **protestas de estudiantes** han tenido prácticamente una presencia anual desde las protestas masivas que movilizaron a millones de estudiantes en **2011**. En 2018, las protestas estudiantiles se **centraron** en el acoso sexual y la discriminación de género en las universidades chilenas. Las protestas estallaron en abril en la Universidad Austral y se extendieron a más de 25 instituciones. Uno de los profesores de Derecho más prominentes de Chile fue acusado públicamente de acoso y suspendido; sin embargo, enojados por la debilidad de las normas sobre acoso sexual, los estudiantes ocuparon la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Al igual que en Corea del Sur, el movimiento amplió su foco inicial en el acoso sexual para llegar a abarcar temas tales como la falta de mujeres en puestos de autoridad de las universidades y en la bibliografía asignada, y el lenguaje excluyente utilizado en las aulas.

Las protestas estudiantiles fueron parte de una respuesta más amplia, inspirada en el movimiento **#NiUnaMenos**. Este se había iniciado en 2015 en Argentina, extendiéndose rápidamente por América Latina en protesta por los escandalosamente altos niveles de violencia de género y la impunidad generalizada por la violencia. La ola de feminismo se extendió por todo Chile. En junio, activistas chilenas por los derechos de las mujeres realizaron una **vigilia** frente a la Casa de Gobierno en la capital, Santiago, para exigir acciones contra la violencia de género. La protesta fue convocada en reacción al asesinato de cinco mujeres en 36 horas y ante el comentario de un fiscal que describió a uno de esos asesinatos

“

#METOO ES UN
MOVIMIENTO
FEMINISTA, Y
EL FEMINISMO
PERFECCIONA LA
DEMOCRACIA.

”

como un “crimen pasional”. A principios de ese mes, las organizaciones estudiantiles habían encabezado una protesta en la que miles de personas salieron a las calles de varias ciudades. Estas protestas fueron en su mayoría pacíficas, al margen de algunos choques en Santiago. Pero si Chile tiene una sólida tradición de protesta, esta se ve lamentablemente **igualada** por la excesiva respuesta estatal ante las protestas. Así, por ejemplo, una **protesta** de estudiantes contra la reforma educativa en el mes de marzo se enfrentó a la violencia de la policía antidisturbios y terminó con 17 arrestos.

En respuesta a estas demandas, el presidente Sebastián Piñera – que también ocupaba el cargo cuando tuvieron lugar las protestas de 2011 – acordó enmendar la Constitución para dejar en claro el deber del estado de promover la igualdad de derechos y prometió nombrar a más mujeres en cargos jerárquicos. Sin lugar a dudas la sociedad civil seguirá de cerca la implementación de estos compromisos.

INDIA Y CAMERÚN: #METOO

El movimiento #MeToo en **India** se aceleró en septiembre, cuando la actriz **Tanushree Dutta** reveló que había sido acosada sexualmente en un set de filmación. Para miles de mujeres, este fue el desencadenante que las llevó a las redes sociales para compartir sus historias de abusos cometidos por hombres poderosos de los medios, la industria del entretenimiento y la política. El movimiento tuvo un fuerte impacto el mes siguiente, cuando el Ministro de Estado para Asuntos Externos, **M J Akbar**, se vio obligado a renunciar ante numerosas denuncias de acoso sexual en su contra, vinculadas con su antiguo cargo como editor de un periódico; inicialmente, el funcionario había **tratado** de desestimar estas acusaciones aduciendo que tenían motivaciones políticas.

La respuesta en la India provino de manera desproporcionada de las mujeres de grupos minoritarios, y en particular de las mujeres dalit, lo cual puso en evidencia el modo en que las formas de exclusión que se superponen vuelven a las mujeres más vulnerables y se combinan para desempoderarlas. El movimiento conectó con el creciente cuestionamiento de los derechos de

los dalit por parte del gobierno nacionalista hindú y sus partidarios: a lo largo del año varios activistas por los derechos de los dalit **detenidos** por participar en protestas antigubernamentales, incluidas dos defensoras de los derechos humanos de las mujeres dalit, Durga Jha y Varinita. Sinduria, **arrestadas** en julio por participar en una protesta contra el primer ministro Narendra Modi. Ambas quedaron detenidas por más tiempo que sus pares masculinos arrestados al mismo tiempo.

En noviembre estalló la **controversia** cuando durante una visita a la India el CEO de Twitter, Jack Dorsey, levantó un cartel que decía “Abajo el patriarcado brahmánico”. El cartel había sido diseñado dos años atrás por un activista y artista dalit basado en los Estados Unidos, Thenmozhi Soundararajan, que ahora se encontraba en el ojo de una tormenta mediática bajo acusaciones de discurso de odio contra la casta de los brahmanes, la más alta. Los acalorados intercambios que se sucedieron demostraron lo difícil que puede ser iniciar un debate razonado sobre las intersecciones entre casta y exclusión de género en la India, así como la consiguiente necesidad de construir respuestas interseccionales que habiliten a las mujeres dalit para liderar.

Al igual que en la India, el acoso sexual en los medios de comunicación fue una preocupación central en **Camerún**. En agosto la galardonada periodista **Comfort Mussa** lanzó la campaña #StopSexualHarassment237, y rápidamente reclutó a mujeres periodistas para luchar contra el sexismo en las salas de prensa de los medios. La campaña utilizó las redes sociales para ofrecer a las mujeres un espacio seguro donde compartir sus historias, y luego comenzó a establecer conexiones con formadores de periodistas y administradores de medios para definir y crear conciencia sobre lo que constituye el acoso sexual laboral en los medios.

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS: MUJERES EN MARCHA

La inauguración del presidente Trump en enero de 2017 provocó marchas masivas de mujeres en Estados Unidos, Canadá y más allá. En su primer aniversario en 2018, los activistas **canadienses** mantuvieron ese espíritu

desprecio hacia las activistas, incluidas algunas que habían compartido sus historias de abuso sexual. En una nota más positiva, una **intervención** de sobrevivientes de agresión sexual persuadió al senador republicano Jeff Flake de cambiar su posición y apoyar nuevas investigaciones de Kavanaugh. El presidente Trump, en cambio, procedió a **afirmar** absurdamente y sin prueba alguna que los manifestantes eran “profesionales pagados” financiados por la figura más odiada de la extrema derecha, George Soros; como se señala en otra parte de este informe (**véase sección 3**), se trató de fue una táctica usual de los líderes políticos de derecha para difamar activistas durante 2018.

A pesar de las protestas, en la votación crucial para confirmar a Kavanaugh en el puesto, la mayoría de los senadores votó según líneas partidarias, lo cual resultó en una ajustada decisión a favor. Las activistas ahora estarán preocupadas por la influencia de los puntos de vista conservadores de Kavanaugh sobre el aborto en las futuras decisiones de la Corte Suprema, mientras que el duro trato que Ford recibió de las fuerzas conservadoras y los medios de comunicación podría disuadir a otras mujeres de presentarse como denunciantes y desafiar el poder del establishment.

En un contexto políticamente polarizado, los acontecimientos en torno a la nominación de Brett Kavanaugh reafirmaron el poder del patriarcado. Demostraron que los hombres poderosos – incluido el propio presidente, quien por supuesto ha enfrentado numerosas acusaciones de conducta sexual inapropiada – pueden optar por ignorar las voces de las mujeres cuando chocan con sus intereses políticos. Evidenciaron la creciente confianza de la reacción masculina de derecha contra #MeToo y #TimesUp, que busca presentar a los hombres como **víctimas** del movimiento. Notablemente, según las encuestas la opinión sobre Brett Kavanaugh se dividía a lo largo de líneas de género: mientras que la mayoría de las mujeres – 55 contra 37% – se oponía a su confirmación, la mayoría de los hombres – 49 contra 40% – la apoyaban. Claramente se trata de divisiones rígidas, y queda mucho trabajo por hacer. En una nota más positiva, las integrantes de los movimientos #MeToo y #TimesUp sintieron que su causa ganó un nuevo **impulso** en las

elecciones de noviembre, cuando **varias activistas** progresistas de diversos orígenes fueron elegidas al Congreso por primera vez. También sintieron que se habían logrado establecer una conexión con muchas sobrevivientes de abuso sexual, abriendo un espacio para que contaran sus historias.

EL RECLAMO POR LOS DERECHOS DE LAS MUJERES ALREDEDOR DEL MUNDO

Las arriba mencionadas fueron solo algunas de las muchas movilizaciones realizadas en 2018 en reclamo por los derechos de las mujeres. En marzo se estimó que cinco millones de personas participaron en la primera “**huelga feminista**” de **España**, en protesta contra la discriminación sexual, la violencia doméstica y la brecha salarial de género. Áreas clave de Barcelona fueron temporariamente paralizadas por piquetes, y muchas de las políticas más conocidas de España expresaron públicamente su apoyo a la huelga.

Sudáfrica también presenció protestas encabezadas por mujeres, bajo el lema **#TotalShutDown** (**#CierreTotal**) en agosto. Miles de personas marcharon en varias ciudades contra la violencia de género. Las protestas se extendieron a la vecina **Lesoto**. Sin embargo, después de la marcha, las organizadoras sudafricanas de la protesta se enfrentaron a cargos de violencia y de intimidación al presidente por organizar una protesta frente a la sede del gobierno.

Las mujeres de **Vanuatu** están cuestionando la exclusión que sufren en los sitios de poder. Actualmente, los 52 escaños del parlamento de Vanuatu son ocupados por hombres. Para comenzar a cuestionar esta situación, en julio el Consejo Nacional de Mujeres de Vanuatu **fundó** un nuevo partido, el Partido Demócrata Leleon Vanua, para presentar candidatas en las próximas elecciones, programadas para 2020. Su objetivo es obtener una representación parlamentaria femenina del 50%.

Incluso en el contexto extremadamente restringido de **Egipto**, las mujeres han creado su propia versión del #MeToo, “**Ana Kaman**”, y poco a poco algunas mujeres se están empezando a sentir capaces de

compartir sus experiencias de acoso sexual, en un contexto donde el acoso está institucionalizado y denunciar los abusos a la policía tiene más probabilidades de crear problemas que de resolverlos. Pero las activistas que intentan liderar el movimiento se arriesgan a pagar un precio muy alto. En septiembre, la actriz **Amal Fathy** recibió una sentencia de dos años de cárcel por “difundir noticias falsas”; Amal había subido a Facebook un video en el cual detallaba su experiencia de acoso sexual y se quejaba de que el gobierno no garantizara los derechos de las mujeres. No fue la única: la ciudadana libanesa Mona el-Mazbouh fue sentenciada a ocho años de cárcel por publicar un video similar en el mes de julio; posteriormente le fue reducida la pena y fue deportada. Por su parte **Mozn Hassan**, fundadora y directora ejecutiva de **Nazra for Feminist Studies**, fue sometida a una larga campaña de hostigamiento judicial por la presunta recepción de financiamiento extranjero.

DESCORRIENDO EL VELO: LAS MUJERES IRANÍES SE PONEN DE PIE

En **Irán**, otro país altamente represivo, las mujeres valientemente se pusieron de pie para **protestar** contra el uso del hiyab. En Irán todas las mujeres deben cubrirse la cabeza cada vez que salen de sus hogares, y si no lo hacen corren el riesgo de ser castigadas. El hecho de que el uso del hiyab sea una obligación impuesta más que una opción de las mujeres constituye un símbolo de la continuada represión que han padecido las mujeres desde la Revolución Islámica de 1979, en una sociedad que las trata como ciudadanas de segunda clase y sistemáticamente les niega los derechos que reconoce a los hombres. En un gesto de protesta que comenzó a fines de 2017 y continuó en 2018, las mujeres comenzaron a quitarse los pañuelos de la cabeza. Pese a que no recibieron cobertura en los medios estatales de Irán, el mundo conoció las protestas contra el hiyab gracias a su difusión en las redes sociales.

Jasmin Ramsey, del **Centro para los Derechos Humanos en Irán**, describe la protesta:

Varias mujeres, al menos 30, salieron a las calles, se quitaron sus hiyabs en público y los agitaron con un palo o con las manos. También lo hicieron algunos hombres, para apoyar a estas mujeres. Esto se convirtió en el comienzo de lo que parecía ser un nuevo movimiento –pequeño, por supuesto–, en el cual las mujeres realizaban actos de desobediencia civil contra la ley que establece el hiyab obligatorio en el país, llegando a caminar por la calle sin el hiyab, y a publicar en las redes sociales fotos de sí mismas haciéndolo. La gran mayoría de estas mujeres no ha mostrado ningún deseo de que el hiyab sea ilegal; lo que están diciendo, en cambio, es que debería ser una elección. En términos generales, se trató de protestas contra el hiyab obligatorio.

*Este movimiento específico fue iniciado por **Masih Alinejad**, una activista iraní exiliada en los Estados Unidos. Hace unos años, Masih comenzó una **campaña en las redes sociales**, #MyStealthyFreedom (#MiLibertadClandestina), para alentar a las mujeres en Irán a caminar libremente sin la cabeza cubierta y enviar fotos de sí mismas haciéndolo. A fines de diciembre de 2017, la foto de una mujer, **Vida Movahed**, agitando su hiyab blanco de pie sobre un cajón en una calle concurrida de la capital, Teherán, se hizo viral en las redes sociales. Ella y otras manifestantes se hicieron conocidas como “las chicas de la calle Revolución”. Vida hizo esto un día antes de que estallaran protestas masivas en varias ciudades en todo Irán en torno de una variedad de temas. Parece que después de que esa foto **se hiciera viral**, varias siguieron su ejemplo. Sucedió a lo largo de varias semanas y meses.*

Sin embargo, no está claro si las mujeres que sacudieron sus hiyabs en público durante los primeros meses de 2018 formaron parte de la campaña de Masih. Algunas dijeron que lo hicieron de forma independiente, simplemente porque querían dejar en claro algo en lo que siempre habían creído.

“
 LAS MUJERES
 EN IRÁN HAN
 LUCHADO POR SUS
 DERECHOS DESDE
 LA REVOLUCIÓN
 ISLÁMICA.
 ”

No se trató de un evento aislado. Jasmin ubica esta protesta más reciente en continuidad con una tradición de varias décadas, durante las cuales las mujeres han luchado como han podido contra este símbolo de la represión de sus derechos:

Las mujeres en Irán han luchado por sus derechos desde la Revolución Islámica. Poco después de que se implementara el hiyab obligatorio, muchas salieron a las calles para decir que no lo apoyaban. Algunas marcharon brazo en brazo con su cabello fluyendo libremente, exigiendo que el hiyab fuera opcional. Pero de todos modos el hiyab fue impuesto con gran fuerza, hasta que el costo de la resistencia llegó a ser demasiado alto.

Pero las mujeres en Irán no se han echado atrás. Durante las últimas cuatro décadas, han desafiado esta ley de varias maneras, y sobre todo de manera indirecta. Al comienzo de la revolución, las mujeres tenían que observar el hiyab estrictamente, mostrando poco más que la piel de la cara y las manos. Pero a medida que pasaron los años, mientras algunas mujeres devotas seguían observando estrictamente el hiyab, muchas otras comenzaron a correrlo más y más hacia atrás, por lo que hoy, si caminas por las calles de Teherán, puedes ver una gran cantidad de cabello al frente e incluso un poco en la espalda. Las mujeres ahora también llevan más ropa ajustada y muestran un poco más de piel. Las mujeres visten el hiyab muy a la moda y tratan de integrarlo en su sentido del estilo; siguen probando los límites. Es muy interesante observar las formas en que el hiyab ha sido desafiado y reformulado de manera creativa por las mujeres iraníes a lo largo de los años.

Sohrab Razzaghi, del **Instituto de Activistas Voluntarios**, ubica las protestas contra el hiyab en el contexto más amplio de un activismo emergente liderado por mujeres y jóvenes:

*Un reciente proceso de relevancia en la sociedad civil iraní ha sido el surgimiento de una nueva generación de activistas de la sociedad civil en terrenos tales como los derechos de las mujeres y los jóvenes, la solidaridad comunitaria y el medio ambiente. Aunque su número no es grande, esta nueva generación se ha comprometido a expandir la sociedad civil y a desafiar las políticas gubernamentales en los asuntos que les interesan. Lanzaron una serie de iniciativas cívicas creativas, tanto en como fuera de internet, tales como **Yo soy el lago Urmia**, que movilizó grandes esfuerzos para crear conciencia sobre la degradación ambiental y presionar para que se tomen medidas para evitar que se seque el lago Urmia, ubicado en el noroeste de Irán. Otra iniciativa, **Muro de Bondad**, creó espacios en los muros de los vecindarios donde los ciudadanos podían colgar la ropa que no utilizaran para que la tomaran los necesitados. La*

Campaña para Cambiar la Cara Masculina del Parlamento, por su parte, llamó la atención sobre la escasez de mujeres legisladoras e instó a elegir a más mujeres para el parlamento.

El coraje cívico y la audacia son dos características importantes de esta nueva generación de activistas que se ha metido con éxito con los mitos de poder del pasado. Las protestas sociales han aumentado constantemente en los últimos años, y en particular desde la toma de posesión del presidente Hassan Rouhani en 2013. Su efecto acumulativo está cambiando el panorama de la sociedad civil iraní.

Pero, como era de esperar, dadas las tensiones que expusieron, las protestas experimentaron reacciones violentas, tanto de las fuerzas estatales como de grupos conservadores dentro de la propia sociedad. En un acontecimiento particularmente siniestro, en julio la hermana de Masih Alinejad, **Mina Alinejad**, fue llevada a la televisión estatal para denunciar el activismo de su hermana; más tarde declaró que había sido forzada a hacerlo. Jasmin describe otras facetas de la reacción:

*Las mujeres manifestantes que participaron en actos pacíficos de desobediencia civil se enfrentaron a la línea dura del gobierno. Las fuerzas de seguridad suelen estar integradas por conservadores de línea dura. Por lo tanto, no es sorprendente que las manifestantes fueran hostigadas por agentes de seguridad y que algunas fueran arrestadas. Al menos tres fueron **procesadas** y recibieron **penas de prisión** en suspenso.*

*La prominente abogada de derechos humanos **Nasrin Sotoudeh** fue arrestada y encarcelada poco después de representar a algunas de estas mujeres. Cuando ella estaba defendiendo a una de las manifestantes arrestadas, un fiscal presentó una denuncia en su contra. Fue acusada de muchas otras cosas enfrenta la perspectiva de varios años de prisión.*

*El esposo de Nasrin, **Reza Khandan**, y su colega activista **Farhad***

Meysami, también fueron sentenciados a seis años de prisión. Entre las supuestas pruebas utilizadas en su contra se encontraron unas insignias que decían “Me opongo al hiyab obligatorio”, que los agentes de seguridad habían confiscado al allanar sus casas. Estos hombres que apoyaron a las mujeres que luchaban por sus derechos ahora enfrentan seis años de prisión cada uno, y se les ha prohibido salir del país y conectarse a Internet.

*En las redes sociales se reportaron casos de hombres y mujeres que **reprendieron públicamente** a mujeres que no llevaban el hiyab. También hubo una gran cantidad de reacciones violentas de parte de los medios de comunicación conservadores, que publicaron artículos donde acusaban a las manifestantes de estar manipuladas por poderes externos. Pero estos no son medios independientes; están vinculados con las agencias de seguridad.*

Los funcionarios de la línea dura del gobierno, tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, acusaron a las mujeres de protestar contra la ley del hiyab no porque lo hubieran decidido sino porque estaban siendo engañadas y manipuladas por otros. Estas personas se negaron a reconocer a las mujeres como personas independientes con mentes propias.

*Por otro lado, el estado no es homogéneo y otros sectores tienen posiciones más moderadas. Es claro que, a largo plazo, frente a problemas de derechos humanos tan evidentes, el estado no sabe realmente cómo reaccionar y confía en los antiguos métodos de represión para lo que percibe como un problema en rápido crecimiento. No tiene ninguna solución nueva para estos nuevos problemas. Estudios recientes encargados por el gobierno muestran que al menos **la mitad** de la población iraní se opone al hiyab obligatorio. Un grupo parlamentario realizó **otro estudio** que ofreció diferentes alternativas para lidiar con el creciente deseo de que el hiyab sea opcional, incluida la posibilidad de relajar los*



Las mujeres iraníes se arriesgaron a ser enviadas a prisión por desafiar públicamente la ley que ordena el uso del hiyab.

Crédito: Twitter, #MyStealthyFreedom

controles. Esto indica que el gobierno es consciente de que una parte importante y creciente de la población no aprueba esta política, y podría estar contemplando otras opciones.

Dada la existencia de diferentes corrientes al interior de la sociedad iraní y de cierto potencial para la reforma, Jasmin concluye que es importante que el mundo exterior no intente dirigir la lucha, sino que se limite a amplificar las voces que proponen el cambio:

Es importante comprender que en Irán el movimiento de mujeres es independiente y ha existido durante décadas. Las mujeres que lo lideran dentro de Irán y asumen todos los riesgos afirman que es el propio pueblo iraní el que debe lograr el cambio. Las activistas iraníes no necesitan mi guía ni la tuya. Lo que necesitan es que sus voces y acciones sean amplificadas, y que los abusos de derechos humanos que se cometen contra ellas sean documentados y rechazados. Es necesario contar con una cobertura matizada que resalte no solo lo malo sino también las cosas buenas que están sucediendo en Irán, para que la gente tenga una buena comprensión del país y sus problemas y sea capaz de discutirlos de manera constructiva e inteligente.

La conciencia y la incidencia constructiva son claves. Cuando interactúan con funcionarios iraníes, los funcionarios públicos, empresarios o celebridades, incluidos los homólogos de Irán en otros países y en organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la UE, deberían plantear temas de derechos humanos que están siendo cuestionados por activistas y personas en las calles. Deberían preguntar: ¿por qué las mujeres son arrestadas por quitarse sus hiyabs? ¿Por qué hay mujeres presas políticas, y por qué se les niega el derecho a ver a sus familias para castigarlas por participar en una protesta pacífica por sus derechos básicos en prisión?

También es importante que se habilite y empodere al pueblo de Irán para involucrarse, comunicarse y experimentar el mundo fuera de las

*fronteras de su país de la misma manera en que usted y yo podemos hacerlo. El gobierno no permite la **libertad en Internet**, por lo que otros países no deberían implementar mecanismos que impidan a los iraníes acceder a herramientas y servicios que les permitan eludir la censura en línea. Las autoridades iraníes no quieren que los activistas y otros en la mira del estado viajen fuera del país – y, en algunos casos, incluso fuera de sus provincias – y hablen sobre sus problemas, por lo que otros gobiernos **no deberían ayudar a estos actores estatales** haciendo lo mismo y prohibiendo a los iraníes la entrada a sus países. Lo más importante es que no se impida a los iraníes acceder a bienes humanitarios y medicamentos básicos debido al restablecimiento de las sanciones. Toda la comunidad internacional debe unirse para garantizar que **estos canales permanezcan abiertos**.*

Cuando la ciudadanía iraní sale a las calles y protesta, o cuando las personas protestan individualmente agitando un hiyab o exigiendo mediante un tweet o una publicación de Facebook que el gobierno revise una política, asumen importantes riesgos que pueden cambiarles la vida. Muchas personas han sido encarceladas durante años por hacer estas cosas. Es nuestra responsabilidad, en tanto que personas que damos estos derechos por descontados, escuchar, aprender y amplificar sus voces. Ellos están abriendo el camino para que nosotros podamos seguirlo.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: UN MOMENTO CLAVE

En varios de los casos descritos, la celebración del **Día Internacional de la Mujer** el 8 de marzo proporcionó a las mujeres una oportunidad para salir a las calles a exigir sus derechos. El día constituyó un hito en todo el mundo. En **Bangladesh** un grupo de mujeres **rohingya** se organizó bajo la denominación **Shanti Mohila** ('mujeres de paz') y el 8 de marzo realizó una manifestación de protesta contra el trato injusto que sufre su gente. Con pancartas y cánticos, más de 250 personas marcharon por el campamento de

refugiados de Kutupalong-Balukhali, convertido en su hogar involuntario. La iniciativa se produjo después de que un grupo de alrededor de 400 mujeres rohingya se reuniera en los asentamientos de refugiados para formular una lista de demandas, entre ellas las de que su identidad rohingya, denegada en **Myanmar**, fuera reconocida, su libertad religiosa respetada y sus tierras en Myanmar restituidas.

En el Día Internacional de la Mujer en **Nepal** hubo una **marcha** de mujeres por las calles de la capital, Katmandú. Las manifestantes llevaban camisetas con la inscripción #FuriaContraLaViolación en protesta ante el número creciente de actos de violación. Bajo el lema **Un Billón de Pie**, las activistas de **Mongolia** tejieron cientos de gorros rojos con orejas de gato y los usaron en una **protesta** contra la violencia de género. Una encuesta de 2017 había revelado que el 31% de las mujeres de Mongolia había sufrido violencia sexual o física por parte de su pareja, pero casi ninguna lo había denunciado, ni siquiera en casos de agresiones graves. Una coalición de OSC está ejerciendo presión para que las leyes laborales de Mongolia adopten una línea más dura en materia de acoso sexual.

En **Serbia**, nueve organizaciones trabajaron juntas para organizar una **protesta** por el Día Internacional de la Mujer en la capital, Belgrado, para exigir el fin de la violencia de género y la protección de los derechos reproductivos y laborales de las mujeres. Bajo el lema "Muerte al fascismo – Libertad para las mujeres", la protesta llamó la atención sobre los ataques anti-derechos procedentes de grupos patriarcales, conservadores y de extrema derecha envalentonados por sus recientes avances. Más tarde, en septiembre, más de mil madres, mujeres embarazadas y miembros de sus familias se reunieron en Belgrado, mientras otras protestas similares se llevaban a cabo en otras partes de Serbia, como parte de la iniciativa "Las madres mandan", en **protesta** contra los cambios introducidos a la Ley de apoyo financiero a las familias con hijos. Sin embargo, el gobierno contraatacó a los manifestantes y el ministro de trabajo los acusó de estar "sesgados políticamente".

LA REACCIÓN CONTRA EL ACTIVISMO DE LAS MUJERES

Varios de los casos anteriores demuestran la hostilidad social y estatal que experimentan las mujeres cuando reclaman sus derechos. Lamentablemente hubo muchos otros ejemplos similares, muchos de ellos en torno del Día Internacional de la Mujer. El movimiento KazFem de **Kazajistán** se vio **obligado** a suspender la marcha programada cuando en la víspera, una de las organizadoras, Verónica Fonova, recibió en su casa una visita de la policía, que la amenazó con represalias. La policía reveló que había estado vigilando su actividad en las redes sociales.

En la represiva **Turquía**, se autorizó la realización de varias protestas por el Día Internacional de la Mujer, pero a otras se les **negó** el permiso por razones de seguridad. Mientras que la protesta en la ciudad más grande de Turquía, Estambul, fue de carácter pacífico, en Ankara, la capital del país, se hizo uso de fuerza excesiva y gases lacrimógenos, con un saldo de 15 personas detenidas. Las protestas se centraron en temas tales como la violencia doméstica, la desigualdad y los derechos del pueblo kurdo.

Durante más de dos décadas, las Madres del Sábado, un grupo de mujeres kurdas, han organizado sentadas silenciosas y vigiliadas comunales para protestar contra las desapariciones forzadas y los asesinatos políticos perpetrados en Turquía durante los años ochenta y noventa. Aun cuando en los últimos años la represión estatal aumentó, esta vigilia pacífica de media hora, cuyos participantes cada sábado sostienen fotografías de los seres queridos que han perdido, es una de las pocas protestas que siguieron siendo autorizadas a proceder en la plaza central de Taksim en Estambul. Su **700ª** edición debía celebrarse el 25 de agosto, pero la policía **lanzó** una brutal represión, utilizando gases lacrimógenos y balas de plástico para frustrarla. Alrededor de 100 personas fueron arrestadas, incluida una mujer de 82 años que en 1995 se había encontrado entre las primeras en protestar. En respuesta, los organizadores **presentaron** una denuncia penal por maltratos y violaciones injustificadas de su derecho de reunión. En lo



En marzo miles de personas marcharon por la famosa calle Istiklal de Estambul durante una manifestación por el Día Internacional de la Mujer.

Crédito: Chris McGrath/Getty Images

sucesivo las vigias fueron **prohibidas** por las autoridades, que afirmaron que estaban infiltradas por grupos terroristas; sin embargo, las Madres del Sábado desafiando las amenazas y **continuaron** reuniéndose en otro lugar.

El gobierno de **Arabia Saudita** atrajo la atención internacional en junio, cuando por primera vez permitió a las mujeres **conducir**. Sin embargo, su reputación volvió a irse a pique en octubre, tras el brutal asesinato del periodista **Jamal Khashoggi** en su consulado en Estambul. Pero incluso antes de este ataque notable, las defensoras de derechos humanos conocían de primera mano la potencia de la represión estatal de las voces desafiantes del poder del establishment.

Más de una docena de defensoras de derechos humanos, algunas de las cuales son también las activistas de más **alto perfil** en el país, fueron **detenidas** en el marco de un **pico de represión** durante 2018. Entre las detenidas hubo varias **defensoras** del derecho de las mujeres a conducir, quienes fueron encerradas incluso antes de tener la oportunidad de experimentar esa libertad que tanto les había costado. Una vez hecha esta concesión, las autoridades evidentemente temieron que las mujeres la utilizaran como plataforma para reclamar más de entre los derechos fundamentales que les siguen siendo negados, incluido el fin del odiado sistema de tutela que subordina a las mujeres a su esposo u otro pariente masculino. Las detenciones pusieron en evidencia que desafiar simultáneamente el poder estatal y el arraigado patriarcado de Arabia Saudita es particularmente arriesgado para las defensoras de derechos humanos. Los medios de comunicación estatales calificaron a las mujeres detenidas como traidoras y las acusaron de ser agentes de potencias extranjeras; según se informó, durante su detención las mujeres fueron sometidas a **malos tratos**, torturas y acoso sexual incluidos.

Como lo demostró el asesinato de Jamal Khashoggi, ni siquiera vivir fuera de Arabia Saudita supone estar a salvo de la represión estatal. Manal al-Sharif, una activista por los derechos de las mujeres exiliada en Australia, **informó** haber recibido llamadas telefónicas de las fuerzas de seguridad sauditas

advirtiéndole que cesara su activismo, además de las rutinarias amenazas de muerte en internet.

En el contexto de un espacio cívico cerrado, en el cual no está **permitido** el funcionamiento de OSC nacionales independientes en condiciones de defender los derechos de las mujeres detenidas, la sociedad civil internacional se unió en su apoyo. En octubre, más de 170 OSC **exigieron** a la ONU que suspendiera la membresía de Arabia Saudita en su Consejo de Derechos Humanos. En solidaridad con ellas, una **protesta** de mujeres al volante tuvo lugar en agosto frente a la embajada de Arabia Saudita en el Reino Unido.

IRLANDA: EXITOSA CAMPAÑA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR EL ABORTO LEGAL

Durante 2018 la lucha por el derecho al aborto estuvo en las portadas de varios países, y dio como resultado algunos avances notables que no se produjeron por accidente, sino como resultado de campañas laboriosas y sostenidas de la sociedad civil, las cuales a menudo se prolongaron durante años.

Este fue el caso de **Irlanda**, donde en mayo se celebró un histórico referéndum en el cual la ciudadanía votó a favor de legalizar el aborto. En todo el país, los votantes acudieron masivamente a las urnas para derribar **rotundamente** – por 66 contra 34% – la Octava Enmienda de la Constitución de 1983, que prohibía el aborto. Como resultado de esta prohibición, las mujeres irlandesas estaban obligadas a recurrir a medidas riesgosas e ilegales o a viajar al Reino Unido para abortar. En una inversión simbólica de esos viajes, miles de ciudadanos irlandeses que viven en el extranjero **regresaron** al país para emitir su voto, y muchos compartieron sus viajes en las redes sociales con el hashtag #HomeToVote (#ACasaParaVotar).

En una sociedad largamente considerada conservadora y fuertemente influenciada por la Iglesia Católica, la votación y el margen decisivo marcaron uno de los cambios sociales profundos logrados en referendos recientes

(véase sección 3). El impulso se montó sobre un avance clave logrado en 2015 como resultado de una **campaña** de la sociedad civil, cuando Irlanda se convirtió en el primer país del mundo en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo por **voto popular**.

Muchos analistas parecieron sorprendidos por la decisiva victoria de la campaña por el Sí. Para quienes habían hecho el trabajo duro, la votación fue el reflejo del cambio logrado a través de años de esfuerzos. **Ivana Bacik**, **senadora** y activista por el derecho al aborto, describe la composición y alcances del voto afirmativo:

Los comentaristas se apresuraron a caracterizar el voto por el Sí como joven y urbano, pero tanto hombres como mujeres, habitantes tanto urbanos como rurales y de todas las franjas etarias con excepción de los mayores de 65 años, votaron a favor de la derogación. Este respaldo rotundo en todos los grupos demográficos transmite una gran seguridad de que los irlandeses están listos para el cambio. Una encuesta de boca de urna encontró que el argumento dominante para los votantes fue el derecho de la mujer a elegir. Esto dice mucho acerca del respeto por la salud de las mujeres en la sociedad irlandesa. La misma encuesta encontró que el 24% de quienes votaron por el Sí había cambiado de opinión en los últimos cinco años.

A lo largo de los años, la opinión pública se había desplazado en dirección de la derogación de la prohibición, preparando el terreno para el aborto legal en Irlanda. Este cambio también fue influenciado por una serie de casos de derecho internacional en los cuales se concluyó que el estado irlandés había violado los derechos humanos de las mujeres al obligarlas a llevar a término sus embarazos incluso en casos en que se sabía que sus bebés no nacerían vivos. La experiencia positiva de 2015 con el referéndum sobre el matrimonio igualitario mostró que los irlandeses eran capaces de una gran compasión y demostró lo exitosa que puede resultar una campaña de la sociedad civil en favor del cambio social.

Ivana continúa relatando cómo resonaron los mensajes clave de la campaña:

El mensaje principal del Sí fue que a veces un asunto privado necesita apoyo público, y esto realmente resonó entre los votantes. Un número de valientes individuos y parejas contaron sus propias experiencias de haber tenido que viajar para terminar un embarazo, y esto también golpeó fuerte. El mensaje de la campaña por el Sí fue muy claro: las mujeres irlandesas se hacen miles de abortos cada año, ya sea viajando al Reino Unido o tomando píldoras abortivas no reguladas en Irlanda. El voto revocatorio nos permite abordar esta realidad y tratar a las mujeres con la compasión y el cuidado que requieren en un momento de crisis. La campaña también involucró con éxito a los votantes masculinos.

Linda Kavanagh, de la **Campaña por el Derecho al Aborto**, describe los años de campaña que condujeron a la votación:

*Mi organización, Campaña por el Derecho al Aborto, nació en 2012. Comenzamos a trabajar en reacción a dos incidentes importantes en torno del derecho al aborto que tuvieron lugar en Irlanda en 2012. En el verano de ese año, Youth Defence (Defensa de la Juventud), una organización anti-aborto muy militante, empapeló Dublín con carteles publicitarios que decían que el aborto lastimaba a las mujeres, estigmatizaban a las mujeres que habían tenido abortos y decían muchas cosas que no eran ciertas. Las protestas realizadas en respuesta a esta campaña fueron las manifestaciones por el derecho a elegir más masivas en mucho tiempo. También nos organizamos en internet, en Facebook y Twitter, y esto facilitó la divulgación de información, por lo que las protestas fueron bastante grandes. La primera **Marcha por el Derecho a Elegir**, realizada en septiembre de 2012, reunió a un par de miles de personas. Fue la más grande en alrededor de una década.*

*Un mes después murió **Savita Halappanavar**. Savita estaba embarazada y murió porque se le negó un aborto. Le habían dicho*

que tendría un aborto espontáneo y que existía riesgo de infección, pero según la ley los médicos no estaban autorizados a intervenir hasta que su vida corriera riesgo inminente. Este caso fue un auténtico llamado de atención y nos expuso al escrutinio global. Poco después, en enero de 2013, la Campaña por el Derecho al Aborto comenzó a trabajar.

La muerte de Savita fue un punto de inflexión: muchos jóvenes comenzaron su recorrido en ese momento. Desde entonces las Marchas por el Derecho a Elegir se fueron haciendo más grandes cada año, y en algún momento nos dimos cuenta de que teníamos que convocar a un referéndum para revocar la Octava Enmienda y presionar por un cambio político. Todo este tiempo habíamos estado agitando las aguas, marchando por las calles y haciéndonos más grandes y más fuertes.

A principios de 2016, una encuesta encargada por Amnistía Internacional mostró que el cambio tenía un apoyo abrumador, con diferencias en la opinión de las personas en función de las diferentes causales de aborto legal, tales como incesto, violación, riesgo para la salud de la mujer y anomalía fetal. Poco menos del 40% estaba a favor de permitir que las mujeres accedieran al aborto por su sola voluntad, mientras que alrededor del 40% estaba a favor de permitirlo solo en circunstancias muy restrictivas. En un comienzo, estimamos que llegaríamos a un máximo de 45% de apoyos.

Así que comenzamos con una base fuerte y sólida de algo más de 40%, y sabíamos que nuestros oponentes tenían un apoyo sólido de entre 10 y 20%. Había mucha gente – en torno del 40% – que tenía dudas y estaba insegura de qué posición adoptar. Estas eran las personas que podían inclinar la balanza, así que teníamos que hablar con ellas. La idea corriente es que las personas que no están seguras se apegarán al statu quo porque es lo que conocen. Pero nosotras sabíamos que cuando las personas conocen los hechos,

cuando entienden las pruebas, tienden a llegar a una posición más favorable al derecho a elegir. Vimos esto una y otra vez y entonces supimos que solo era cuestión de ayudar a que la gente tuviera estas conversaciones.

En cierto momento necesitamos empezar a hablar con los políticos para asegurarnos de que comprendieran que ya no podían barrer el problema bajo la alfombra. Así que decidimos convertir al aborto en un tema central de la agenda de las elecciones generales de 2016, un tema clave sobre el cual a los políticos se les preguntara cada vez que llamaran a nuestras puertas para pedir nuestros votos. Y le dimos a la gente el lenguaje para hablar del tema con sus representantes. Sabíamos que si los políticos se encontraban con el problema una y otra vez al recorrer sus distritos, prestarían atención. Organizamos sesiones de capacitación sobre participación cívica para entregar a la gente información sobre el funcionamiento de los referendos, lo que la ley dice sobre el tema, lo que podíamos hacer y cuál era nuestra posición con respecto al aborto legal, seguro y gratuito. ¡Y funcionó! Tuvimos éxito y logramos forzar el tema en la agenda.

Linda también señala la importancia tanto de las redes sociales como de las campañas de base, que llegaron mucho más allá de la capital:

Una conclusión clave es que es vital usar las redes sociales para crear un espacio donde las personas puedan tener una discusión matizada sobre estos temas. Con los medios tradicionales teníamos las manos atadas, porque cuando tratan temas controvertidos los medios están obligados a proporcionar una “cobertura equilibrada”. Cualquier emisora que reciba fondos estatales debe asignar el mismo tiempo de aire a cada parte. Incluso si alguien estuviera contando su propia historia y dijera que había necesitado un aborto y tuvo que viajar al Reino Unido, contando exactamente lo que le había sucedido, alguien tendría que ser convocado para “equilibrar” su intervención. Esta regla fue interpretada de manera muy amplia,

“
 UNA GRAN
 CONCLUSIÓN DE
 TODO ESTO ES QUE
 LA GENTE TIENE
 PODER. POR LO
 GENERAL NO SIENTE
 QUE LO TIENE,
 PERO LO QUE HACE
 REALMENTE CUENTA.
 ”

por lo que se aplicó no solamente durante la campaña para el referéndum, sino también durante los años que la precedieron. Fue muy sofocante.

Tuvimos que eludir a los medios de comunicación tradicionales para llegar a la gente. Afortunadamente vivimos en la era de las redes sociales, pusimos mucho esfuerzo en ellas y le dimos a la gente el lenguaje y los matices para hablar sobre estas cosas. Estábamos acostumbrados a escuchar discusiones sobre la moralidad del aborto donde la cosa estaba bien o mal: no había un término medio para quienes no se sentían tan cómodos con el aborto pero pensaban que el statu quo estaba mal, y no había espacio para hablar de ello.

Hubo mucho debate sobre la web oscura, bots, trolls y posibles interferencias en la campaña, pero hubo cientos de cuentas de Twitter y perfiles de Facebook a favor del derecho a elegir abiertos por cientos de personas a favor de este derecho, y contamos con las herramientas para proteger ese espacio que habíamos creado y en el cual estaban teniendo lugar estas discusiones. Por ejemplo, un grupo de voluntarios creó Repeal Shield, una lista pública de bots y cuentas de trolls. Cuando un usuario denunciaba una cuenta a través de un mensaje a @repeal_shield, un voluntario investigaba y si la cuenta resultaba ser un bot o un troll, era agregada a la lista. Así la gente pudo mantener una conversación sin interferencias.

Una gran conclusión de todo esto es que la gente tiene poder. Por lo general no siente que lo tiene, pero lo que hace realmente cuenta. Que alguien haga clic en “me gusta” en tu página porque realmente le agrada significa mucho más que una publicidad pagada. Por supuesto, el activismo es mucho más que hacer clic en “me gusta” en una publicación de Facebook, pero todo suma.

Siempre se nos dice que somos una cámara de resonancia, que solo hablamos con quienes piensan lo mismo que nosotros, pero resultó que no era cierto en lo más mínimo. Tuvimos el 66% de los votos. Eso no es una cámara de resonancia; es la realidad.

La otra cosa de la cual nos dimos cuenta es que no podíamos simplemente hacer una campaña centrada en Dublín, sino que teníamos que cubrir el territorio nacional. Así que trabajamos muy duro para establecer grupos regionales en todos los condados de Irlanda. Cuando llegó el referéndum, en cada condado había un grupo por el derecho a elegir. Y esos grupos pasaron a formar grupos de rastrillaje que organizaron sus propios eventos y dialogaron con sus políticos.

Le dimos a la gente el lenguaje y la comprensión del proceso político, y eso no ocurrió en las

redes sociales; sucedió en el terreno. Hablamos con la gente y ellos llevaron el tema a la calle. Teníamos reuniones mensuales para que la gente aprendiera sobre la organización y cómo podrían unirse a ella, y algunas veces recibíamos a alguien que presentaba una perspectiva diferente, por ejemplo un migrante o alguien de Direct Provision, una institución horrible para solicitantes de asilo. También desarrollamos actividades de capacitación para grupos marginados sobre el aborto en un contexto reproductivo más amplio.

Vendimos camisetas y sweaters por el derecho a elegir, con lo cual le dimos a la gente visibilidad. Así, los partidarios del derecho a elegir se hicieron visibles. Cuando los veías, sabías que estaban de tu lado, y te sentías apoyada en esa decisión que tal vez alguna vez tomaste y nunca le contaste a nadie.

Otros grupos se dedicaron al cabildeo. Probablemente ahora nosotros también lo haremos, pero en ese momento la campaña en el territorio era nuestra principal preocupación. También hicimos actividades de incidencia a nivel tanto nacional como internacional, incluidas presentaciones ante diversos organismos de las Naciones Unidas. Y mantuvimos vínculos con grupos irlandeses en otros países, porque la diáspora irlandesa está muy enfocada en este tema. También establecimos conexiones con otras organizaciones que no tenían un mandato directo en relación con el derecho a elegir pero que podían apoyar la derogación, tales como los grupos de defensa de los derechos de los migrantes o los grupos de personas con discapacidad.

Más allá de las organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, obtuvimos el apoyo de organizaciones internacionales de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, lo cual significó mucho porque todos saben quiénes son, así como de algunas organizaciones de derechos de los migrantes. Una gran cantidad de organizaciones benéficas en Irlanda tienen una monja o un

sacerdote en su junta directiva, por lo cual difícilmente tomarían partido en este asunto. Pero mucho lo hicieron, y recibimos mucho apoyo. Más de un centenar de organizaciones acabaron uniéndose.

Un aspecto particularmente interesante de la votación en Irlanda fue el papel desempeñado por la Asamblea de Ciudadanos, una institución de democracia deliberativa, tal como lo explica Ivana:

La Asamblea de Ciudadanos es un cuerpo compuesto por un presidente y 99 ciudadanos seleccionados al azar como una muestra transversal del electorado irlandés, establecido para considerar algunos de los temas más importantes para el futuro de Irlanda. Sus conclusiones constituyen la base de los informes y recomendaciones que se presentan a las Casas de la Oireachtas (la legislatura irlandesa) para su posterior debate por parte de nuestros representantes electos.

Desde octubre de 2016, la Asamblea se ha reunido regularmente. Es un ejercicio en democracia deliberativa, como lo fue la Convención Constituyente celebrada en 2013, que entre otros temas votó de manera abrumadora a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. El proceso tiene dos grandes fortalezas: primero, la selección aleatoria de sus participantes, que garantiza que éstos sean representativos de la sociedad irlandesa; y segundo, el uso de testigos expertos, tales como abogados y médicos, que garantiza que los participantes deliberen sobre la base de la evidencia que les es presentada. El proceso ha demostrado lo mucho que los ciudadanos se motivan con los hechos y están dispuestos a aprender. En un tema tan delicado como el aborto, la ciudadanía se benefició enormemente no solo de la Asamblea de Ciudadanos, sino también del proceso subsiguiente de deliberación en el Comité Conjunto de la Oireachtas sobre la Octava Enmienda.

En abril de 2017 la Asamblea de Ciudadanos votó – con una mayoría de 64% – a favor de recomendar la legalización de la interrupción



Los partidarios del Sí celebraron cuando se confirmó su victoria decisiva en el referéndum para modificar la legislación sobre el aborto en Irlanda.

Crédito: Charles McQuillan/Getty Images

del embarazo sin restricciones. A fines de 2017 el Comité Conjunto de la Oireachtas sobre la Octava Enmienda recibió apoyo político transversal para convocar a un referéndum y legislar sobre la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. El mandato para el cambio derivado de estos procesos públicos y parlamentarios mostró la existencia de una gran disposición a aceptar la realidad del aborto en una Irlanda moderna.

La Octava Enmienda había sido introducida en 1983 a través de un referéndum, como resultado de la presión exitosas de los activistas llamados “pro-vida”. Por lo tanto, la única forma de eliminar la enmienda era a través de otro referéndum. El éxito de la campaña mostró lo importante que es diseñar una campaña que realmente interactúe con la ciudadanía. Dadas la importancia de la Constitución y la soberanía del pueblo, Irlanda tiene un largo historial de referendos, y esto contribuyó al amplio compromiso público y al interés en los temas en debate. Mientras que el referéndum por Brexit, celebrado en el Reino Unido en 2016, podría resultar en una desconfianza hacia los referendos, la experiencia de Irlanda muestra la importancia de llevar a cabo un proceso abierto y transparente conducente a la votación, dando a los votantes la oportunidad de involucrarse plenamente en las implicancias de la votación.

La sociedad civil progresista de Irlanda no descansará, ya que es el momento de garantizar que ahora se promulguen e implementen buenas leyes. Linda delinea los siguientes pasos a seguir:

Nuestro trabajo es mantener la presión para asegurarnos de que la legislación incluya el lenguaje correcto y que atienda a las personas que continúan viajando o tomando píldoras. La Campaña por el Derecho al Aborto tiene un mandato amplio – alcanzar el aborto libre, seguro y legal – pero también tiene un mandato a más largo plazo consistente en la des estigmatización del aborto. Hemos dado grandes pasos en esa dirección porque hemos tenido esta

conversación nacional y ya no es posible ignorar el problema, pero aún nos queda un largo camino por recorrer.

Debemos asegurarnos de que nuestra legislación sea lo suficientemente buena y garantice el acceso efectivo. Desde el principio, en parte la prohibición del aborto fue también una prohibición de la provisión de información sobre el aborto y, sobre todo, sobre cómo obtener uno. Básicamente, te libraban a tu suerte para que fueras y te las arreglaras en el Reino Unido, y había centros para embarazadas que daban consejos terribles y retrasaban intencionalmente a las mujeres que deseaban un aborto. Es por eso que buena parte del trabajo que nos espera consistirá en asegurarnos de que los médicos realmente cuiden a sus pacientes.

Finalmente, Ivana detalla lo que debería suceder a continuación para seguir haciendo efectivos los derechos de las mujeres en una Irlanda en proceso de cambio:

*Lo próximo por hacer es garantizar que se promulgue la legislación propuesta para habilitar la interrupción del embarazo y que junto con ella se introduzca la anticoncepción gratuita. Fuera del área de los derechos reproductivos, el próximo paso en la reforma de nuestra Constitución será enmendar el Artículo 41.2, que asigna a las mujeres al hogar, para que en cambio se respete el rol del proveedor de cuidados, sea hombre o mujer. En la actualidad, las mujeres mayores padecen una reducción en sus pensiones a causa de los ingresos perdidos como resultado de la restricción del empleo de mujeres casadas, que recién fue levantada en 1973. Por su parte, recién ahora está comenzando a haber reparación y justicia para las mujeres mayores y vulnerables que fueron encerradas en los **Asilos de las Magdalenas**, en funcionamiento hasta principios de la década de 1990 (**véase abajo**); es importante que este grupo de mujeres obtenga el respeto que merece. Hay muchas otras reformas necesarias en relación con las mujeres migrantes e itinerantes, que*

*sufren una doble discriminación. La brecha salarial de género es otra área que actualmente está siendo abordada, después de que presenté un **proyecto de ley** que obliga a la presentación de informes sobre la brecha salarial en las empresas. El Consejo Nacional de Mujeres, que desempeñó un papel fundamental en la campaña Juntos por el Sí, también tiene un rol clave que desempeñar en el avance de estas reformas.*

ARGENTINA: UN PASO ADELANTE EN LA LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO

Algo nuevo sucedió también en **Argentina** en 2018: por primera vez los legisladores nacionales votaron un proyecto para liberalizar las estrictas leyes argentinas sobre el aborto. En junio, la Cámara de Diputados, la cámara baja del Congreso, aprobó una propuesta para eliminar la prohibición del aborto en la mayoría de las circunstancias; sin embargo, en agosto la cámara alta, el Senado, votó en contra de la iniciativa. Pero muchos actores de la sociedad civil que durante mucho tiempo habían hecho campaña por la legalización no percibieron la votación en contra como una derrota definitiva. En cambio, entendieron que el debate había avanzado y que el tema había quedado firmemente instalado en la agenda, lo cual tornaría inevitables la reapertura del debate y el eventual cambio legal. En ese sentido, la campaña por la reforma de la legislación sobre el aborto en Argentina puso en evidencia el rol crucial que desempeña la sociedad civil en la configuración del discurso y la transformación de las actitudes públicas.

La campaña por la legalización del aborto, encabezada por la amplia Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que reunió a más de 500 OSC, había comenzado en 2005, pero en 2018 recibió nueva inspiración e impulso del movimiento #NiUnaMenos, cuando las activistas **conectaron** la acción contra la violencia de género con la negación y la cultura del silencio en torno de los derechos reproductivos de las mujeres. **Eduarne Cárdenas**, del **Centro de Estudios Legales y Sociales**, relata cómo se organizó la sociedad civil:

Fue la séptima vez que se presentó una iniciativa de estas características y se trató de un proyecto promovido y redactado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Antes de 2018, los proyectos no habían avanzado ni siquiera en las comisiones que deben dar dictamen para que se trate en el recinto. La Argentina tiene ya una tradición de feminismo muy movilizad y, desde 2015, con mucha presencia en las calles y una demanda clara de aborto legal. El 2018 empezó con una novedad: en su discurso de apertura de las sesiones legislativas, el presidente de la Nación hizo mención al tema, con lo cual, gracias a la presión de la agenda feminista, habilitó el debate parlamentario. Fue algo absolutamente inédito.

El proceso estuvo liderado por el movimiento de mujeres. Todos los otros movimientos y organizaciones nos integramos detrás de ese liderazgo. En Diputados la estrategia fue exitosa porque fue multipartidaria y diversa, la participación de los movimientos fue fuerte y la influencia de la calle se hizo sentir. En el Senado, la cámara más conservadora, hizo falta más trabajo. Allí nos fallaron las alianzas, que no lograron replicar la transversalidad que hubo en Diputados.

Una serie de grupos, incluidos sindicatos, grupos religiosos y estudiantes, se **movilizaron** en protestas pacíficas antes de la votación, con miles de personas llevando pañuelos verdes, el símbolo del movimiento. Varios grupos de estudiantes organizaron ocupaciones de sus colegios en apoyo de la legalización. Miles aguardaron fuera del Congreso en agosto, mientras el Senado debatía y votaba la iniciativa. Las noticias de los resultados negativos de la votación en el Senado provocaron más protestas, en su mayoría pacíficas, aunque hubo algunos **arrestos**. Algunos trabajadores de los medios se quejaron de que se les había impedido asistir al debate. Después de la votación, a modo de protesta simbólica para impugnar su postura sobre el tema en un país donde la mayoría de la población se identifica como católica, varios miles de personas iniciaron procedimientos

formales para **abandonar** la Iglesia Católica; se dijo que el Papa Francisco, oriundo de Argentina, había intervenido instando a los senadores contrarios al aborto a ejercer presión sobre sus colegas.

Las manifestaciones fueron ampliamente toleradas, pese a que la **violencia** estatal y la **criminalización** y represión de las protestas últimamente se han incrementado en Argentina. Edurne subraya la importancia de la movilización masiva que desafió estos riesgos y la forma en que se complementó con la incidencia y la presentación de evidencia en el Congreso:

*Estuvimos presentes en las calles, no solamente en las vigiliás durante las sesiones de votación, sino también en la organización, dando apoyo y coordinando con el movimiento de mujeres, las otras organizaciones de la Campaña por el Aborto Legal, las estudiantes secundarias, profesionales de la salud y otros actores movilizad. Esta articulación y la presencia sostenida del movimiento en las calles fueron lo que marcó la diferencia durante 2018. Finalmente, nos **manifestamos** enérgicamente por la libertad de expresión y el derecho de manifestación, ya que a lo largo de este proceso se produjeron diversos actos de violencia contra activistas por la legalización por parte de grupos movilizad en contra.*

Como lo sugiere este último comentario, los grupos conservadores y anti-derechos resultaron ser oponentes formidables para el movimiento de reforma. La campaña contra el derecho al aborto argumentó que la agenda reformista era imperialista, emanaba del norte global y era parte de una imposición de la llamada “ideología de género”. Edurne describe el desafío que plantean estos grupos y explica que la sociedad civil progresista y promotora de derechos, en Argentina y en toda América Latina, debe enfrentar estos desafíos:

La derrota en el Senado dejó en evidencia que tenemos que trabajar más para entender y contrarrestar el discurso de posverdad nuestros adversarios. Estamos viendo una avanzada conservadora que pone en riesgo la institucionalidad democrática.

El proceso tuvo un subproducto negativo: al poner en la agenda un tema divisivo, al volverse la movilización tan masiva y adquirir tal centralidad en la escena política, generó una fuerte reacción de los sectores más conservadores. Estos sectores se organizaron y también ganaron una visibilidad que antes no tenían.

Con la emergencia de estos actores conservadores, el debate por el derecho al aborto puso en discusión algunas cosas que creíamos que eran consensos básicos intocables. Algunos sectores comenzaron a decir en voz alta cosas que hace pocos años no estaban bien vistas. Así, por ejemplo, la campaña “Con mis hijos no te metas”, contra la ley de educación sexual integral, puso en cuestión el rol del Estado en la educación.

Los grupos anti-derechos han crecido y se organizan bajo un paraguas en común contra lo que llaman “ideología de género”. Este debate fue para ellos una oportunidad para organizarse como nunca antes. Ahora son más: antes eran solamente grupos vinculados con la Iglesia católica, y ahora hay también numerosos grupos de iglesias evangélicas, bien organizados y bien financiados, así como otros grupos no necesariamente religiosos. Su presencia nos demanda atención porque sus objetivos van contra los derechos de buena parte de la población, ya que buscan limitar el acceso a derechos de la infancia, las mujeres y las personas LGBTQI. Están aterrizando en toda América Latina y su presencia nos plantea interrogantes sobre sus alianzas y fines. ¿Cómo y cuándo llegaron a la Argentina? ¿Cuáles son sus demandas, hasta dónde están dispuestos a llegar?

El debate por la legalización del aborto fue una punta de lanza para pensar otras cuestiones. El sistema de causales para el aborto legal existe en Argentina desde 1921. El paso de un sistema de causales a un sistema de plazos requiere de una simple decisión legislativa de modificación del Código Penal. ¿Por qué tanto revuelo entonces? Porque este debate pone en primer plano otras discusiones: cuál creemos que deba ser el rol de las mujeres y las personas gestantes, cuál debe ser el rol del Estado, hasta dónde y en qué cosas se mete... y ahí es donde saltan las contradicciones de los sectores conservadores, que quieren que el Estado se meta hasta en tu cama para penalizar, pero que a la hora de educar o de vacunar mejor no se meta.

*No podemos quedarnos a la defensiva. Tenemos que ir a la ofensiva e instalar la cuestión de la laicidad y plantear el rol del Estado. Y debemos hacerlo en un contexto subregional regresivo. **Brasil**, nuestro gran vecino y principal socio, acaba de elegir un presidente que está alineado con la agenda de su poderosa bancada evangélica y que acaba de designar como ministra de*



Las mujeres tomaron las calles para reclamar aborto legal, seguro y gratuito en Argentina.

Crédito: Agustín Marcarian/Getty Images

Derechos Humanos a una pastora evangélica que dice que la mujer nace para ser madre.

El movimiento progresista necesita pensar una estrategia para enfrentarlos. La fortaleza del movimiento de derechos humanos es el uso de la creatividad y de la estrategia de la razón. El movimiento anti-derechos nos está haciendo perder el tiempo discutiendo cosas que creíamos que estaban saldadas. Para colmo no es ni siquiera una discusión honesta, ya que las afirmaciones que hacen e incluso los datos que utilizan no resisten el menor chequeo. Lo que resulta de esto no es un debate, es decir, un auténtico intercambio de argumentos y razones. Pero así y todo no tenemos otra alternativa que responder. De modo que cuando “debatimos”, en realidad no debatimos con ellos ni para tratar de convencerlos a ellos, sino que lo hacemos ante una audiencia, para convencer a esa audiencia.

Para esta tarea, las redes sociales son clave, aunque también son un arma de doble filo. De hecho, fue en este debate donde pudimos ver de primera mano el funcionamiento de las noticias falsas, sobre todo cuando las recogen actores de peso fuera de las redes y las llevan a otros terrenos. Pasó, por ejemplo, que datos totalmente falsos tomados de las redes fueron citados por legisladores en el debate parlamentario. En ese terreno tenemos mucho por hacer.

Aun así, concluye Edurne, se ha ganado terreno, y ante la inminencia de una elección presidencial, parece seguro que el tema permanecerá en la agenda. La sociedad civil mantendrá la presión para asegurar que así sea:

Sin duda, ganamos en masividad y presencia en el espacio público, tanto en la calle como en la opinión. En 2018 se discutió sobre el aborto como nunca antes, se quebraron silencios y tabúes. La postal de desilusión de la noche en que el Senado votó en contra de la iniciativa es una imagen muy parcial del proceso. En nuestro balance, la lista de lo que ganamos es mucho más larga que la lista de lo que perdimos. Entre lo perdido está por supuesto esta

oportunidad -pero solo esta, la de 2018, porque realmente creo que el cambio es inevitable y es solo una cuestión de tiempo. No sé si será en 2019, pero en algún momento va a ocurrir. Y lo que sí creo que tiene que pasar en 2019 es que, tratándose de un año electoral, todos los temas que se pusieron sobre la mesa durante este proceso sean parte de la agenda de la campaña presidencial.

EL SALVADOR: INDIGNANTE DENEGACIÓN DE DERECHOS

Tal como lo sugiere el ejemplo de Argentina, las mujeres que necesitan un aborto suelen encontrar grandes desafíos en América Latina. Uno de los casos que en 2018 provocó mayor indignación fue el de **Imelda Cortez**, que llamó la atención del mundo sobre la legislación draconiana sobre el aborto que rige en El Salvador, uno de los cuatro países que prohíben el aborto completamente y en todas las circunstancias. Desde la aprobación de esta ley, en 1998, más de 25 mujeres han sido encarceladas, a menudo en circunstancias cuestionables y con sentencias de décadas.

La historia de Imelda Cortez ejemplificó de manera especialmente terrible la forma en que las leyes más estrictas penalizan a las mujeres vulnerables. Violada repetidamente desde muy joven por su padrastro, Cortez quedó embarazada pero no se percató de ello. Cuando dio a luz prematuramente, y pese a que su bebé sobrevivió, fue acusada de intento de aborto. Mientras que el padre fue detenido, Imelda fue tratada no como una víctima de abuso sexual merecedora de la compasión estatal, sino como una criminal. En abril de 2017 fue acusada de intento de asesinato y detenida, enfrentándose a la perspectiva de una posible **sentencia de 20 años**.

Tras un juicio llevado a cabo en un contexto de protesta e indignación mundial, en el mes de diciembre Imelda fue declarada inocente y **liberada**, para alegría de los cientos de simpatizantes que se habían reunido fuera de la sala del tribunal. Nadie podrá devolver a Imelda los meses en que languideció en la cárcel temiendo por su futuro; sin embargo, sus simpatizantes esperan que el inesperado veredicto, seguramente influenciado por los altos niveles

de atención internacional que por una vez se centraron en el país y en el tema, pueda sentar un precedente para que las mujeres en circunstancias desesperadas no enfrenten largas condenas de prisión. El esfuerzo nacional e internacional de la sociedad civil llamó la atención sobre el terrible impacto de la ley y obtuvo cierto éxito: Imelda fue la sexta mujer liberada en 2018.

Pero otras 24 mujeres permanecen en la cárcel. **Alba Lorena Rodríguez**, por ejemplo, recibió una condena de 30 años después de sufrir un aborto espontáneo en 2009. Además de ofrecer a Imelda el apoyo que hasta ahora se le ha negado, es necesario enfocar la atención en quienes continúan en prisión. Al mismo tiempo, la sociedad civil continuará abogando por la reforma legal e intentará influir sobre la cultura social y política más amplia que hace posible que las mujeres de El Salvador puedan ser despojadas de sus derechos. La dura ley salvadoreña sobre el aborto penaliza a las mujeres que ya de por sí tienen menos acceso a sus derechos: las que están en prisión provienen de manera desproporcionada de entornos rurales y pobres, porque tienen menos acceso a atención médica que las mujeres más ricas, lo cual las deja en una posición más vulnerable a la criminalización cuando sufren abortos espontáneos o complicaciones en un parto. Las mujeres de bajos ingresos a menudo tienen un acceso limitado a representación legal o una comprensión insuficiente del proceso judicial, lo cual vuelve más probable que sean condenadas a partir de pruebas médicas endebles. Mientras tanto, las mujeres más ricas pueden salir del país para abortar.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto continúa trabajando para liberar a las mujeres encarceladas, pero sus intentos de modificar la ley hasta ahora han encontrado una feroz resistencia. La sociedad civil también se queja de que su capacidad para organizar protestas durante el juicio de Imelda estuvo **restringida** ya que el juez ordenó a la policía que asegurara el perímetro alrededor del edificio de los tribunales.

Sin embargo, una **encuesta** de 2018 mostró que más de la mitad de la ciudadanía salvadoreña apoya la despenalización en las circunstancias más extremas, por ejemplo cuando la vida de la mujer embarazada está en peligro o el feto no es viable. Los activistas por la despenalización consideran que tienen una oportunidad y que las actitudes de la ciudadanía están cambiando; sin embargo, dos propuestas de reforma siguen estancadas en la etapa de comisiones en la Asamblea Legislativa y nunca han sido sometidas a votación. Luego del triunfo de un partido de derecha, ARENA, en las elecciones legislativas de 2018, y con la Iglesia Católica movilizada para sostener la actual ley draconiana, la sociedad civil de El Salvador tiene aún mucho trabajo por delante.

“

LOS ACTIVISTAS
POR LA
DESPENALIZACIÓN
CONSIDERAN
QUE TIENEN UNA
OPORTUNIDAD Y
QUE LAS ACTITUDES
DE LA CIUDADANÍA
ESTÁN CAMBIANDO.

”

MOVILIZACIONES POR EL DERECHO AL ABORTO ALREDEDOR DEL MUNDO

La campaña de los grupos defensores de los derechos de las mujeres y otros actores de la sociedad civil logró **revocar** una prohibición de proveer abortos impuesta a la organización Marie Stopes en **Kenia**. La prohibición se **impuso** en noviembre luego de que la OSC fuera acusada de promover el aborto mediante anuncios de radio. El aborto es ilegal en Kenia a menos que exista un grave peligro para la mujer embarazada; se estima que siete mujeres mueren cada día a causa de abortos ilegales. La prohibición había obligado a las clínicas a rechazar a las mujeres, exponiéndolas al riesgo de buscar abortos inseguros en otros sitios. La campaña para revertir la prohibición incluyó una extensa actividad en las redes sociales y el inicio de **acciones legales** por parte del Centro de Derechos Reproductivos. La prohibición fue levantada en diciembre.

En 2018 la **República Dominicana** fue sede de movilizaciones en apoyo de la despenalización del aborto. El Día Internacional de la Mujer estuvo marcado por una **protesta** por el aborto legal y contra la violencia de género, y en julio miles de personas se **manifestaron** reclamando la despenalización del aborto en las circunstancias más extremas, tales como cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, cuando constituye una amenaza para la vida de la mujer embarazada, o si el feto padece anomalías graves. Durante años el Congreso ha debatido propuestas para cambiar la ley de modo de permitir el aborto en tales casos, pero al igual que en Argentina y El Salvador, hasta el momento no ha habido cambios. La protesta de julio fue organizada por la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, que reúne a más de 100 OSC y muestra cabalmente la amplitud de la campaña de la sociedad civil en favor del cambio. Pero las dimensiones de la oposición a la que hacía frente se hizo evidente en noviembre, cuando **miles de personas** asistieron a la manifestación “Un Paso por mi Familia”, convocada por la Iglesia Católica.

El tema del derecho al aborto sigue siendo controvertido también en **Polonia**, donde el gobierno ha amenazado repetidamente con endurecer aún más las

leyes sobre el aborto. Las protestas masivas en **2016** obligaron al gobierno a retirar su apoyo a una propuesta para criminalizar más estrictamente el aborto, en un país que ya cuenta con una de las leyes más restrictivas de Europa. Ante la intención manifiesta de prohibir el aborto también cuando el feto padece anomalías congénitas, miles de personas participaron en nuevas **protestas** en marzo. Más de 200 OSC **se unieron** para pedir a los legisladores que bloqueen el cambio propuesto y respeten los derechos de las mujeres. Parece evidente que los sectores conservadores no cejarán en su intento de endurecer aún más la legislación; la sociedad civil progresista y promotora de derechos de Polonia tendrá que mantenerse vigilante para ofrecer una resistencia sin pausa.

DERECHOS DE LAS MUJERES: LOS ABUSOS EN LA SOCIEDAD CIVIL BAJO LA LUPA

En todos los casos mencionados, es la sociedad civil – incluidos los movimientos sociales, la sociedad civil organizada y, en momentos particularmente poderosos, los ciudadanos que se unen en protesta – la que trabaja para obtener y defender los derechos de las mujeres, y en particular de las más marginadas, y de otras personas vulnerables y grupos excluidos. De ahí que sea particularmente perturbador cuando personas que trabajan en la sociedad civil traicionan la confianza que el público deposita en ellas y provocan daños a las personas por quienes se supone deben trabajar.

En junio, el gobierno de **Haití prohibió** a Oxfam GB operar en el país después de que se denunciara que integrantes de su personal habían mantenido conductas sexuales inapropiadas, incluidos actos de acoso, explotación e intimidación sexuales, tras el devastador terremoto de 2010; en febrero Oxfam GB había visto suspendidas sus operaciones. La organización fue acusada de encubrir una investigación de 2011 que resultó en los despidos por mala conducta de su director de país y de varios miembros de su personal. Dado que la información no se difundió, las personas despedidas quedaron en libertad de buscar empleo en otras organizaciones de

asistencia, en las cuales podrían continuar sus comportamientos abusivos. Oxfam GB también fue acusada de no proporcionar a la **Comisión de Caridad**, la agencia regulatoria del Reino Unido, toda la información sobre el escándalo, y hubo denuncias de **abusos similares** en Chad.

Esto tuvo impactos materiales sobre Oxfam GB. En febrero, el ministro de desarrollo internacional del Reino Unido **amenazó** con cortar su financiamiento a menos que compartiera toda la información y cooperara con el gobierno haitiano. En junio, la organización **advirtió** a su personal que necesitaba con urgencia hacer un ahorro de 16 millones de libras (unos 20,6 millones de dólares), eliminando puestos de trabajo y recortando sus programas y países prioritarios para contrarrestar la reducción de su apoyo financiero. La pérdida de la confianza pública resultó en una abrupta caída en las donaciones: Oxfam GB **informó** que en el mes del escándalo perdió 7000 donantes regulares. Al mismo tiempo, la organización acordó **suspender** la búsqueda de contribuciones entre algunos de sus principales donantes. El director ejecutivo de Oxfam GB, Mark Goldring, anunció que **dejaría el cargo** a fines de 2018, y Oxfam estableció una **comisión** independiente de expertas en derechos de las mujeres para revisar su cultura y prácticas de trabajo.

Evidentemente Oxfam no es la única gran OSC internacional con secretos inconfesables. Denuncias y acusaciones de conducta sexual inapropiada pesaron sobre otras OSC internacionales involucradas en Haití y en otros sitios, incluidas MSF y **Save the Children**. La atención se dirigió hacia adentro, centrándose en el acoso y el abuso cometido por miembros del personal dentro de las propias OSC, así como hacia afuera, atendiendo a la forma en que las OSC tratamos a las y los ciudadanos y comunidades con quienes trabajamos.

Lo que preocupó a muchos actores de la sociedad civil fue que la respuesta inicial pareció consistir en priorizar la gestión de la reputación y el resultado financiero, en lugar de escuchar a los sobrevivientes de los abusos y atender a sus necesidades. Pero toda misión orientada a cambiar el mundo para

mejor tiene que ser vivida y actuada con el ejemplo; no es posible que los fines de nuestra misión en tanto que sociedad civil justifiquen cualquier medio a través de los cuales hagamos nuestro trabajo.

Por ser la organización más expuesta por las malas acciones de su personal, Oxfam estuvo en lo cierto al tomar la iniciativa de revisar su cultura y sistemas; sin embargo, todos nosotros debemos hacerlo. La sociedad civil debe hacer frente a preguntas inquietantes sobre el modo en que las culturas de nuestras oficinas centrales influyen sobre y permiten el comportamiento abusivo en el terreno, y sobre cómo las prácticas de hostigamiento hacia el personal se reproducen en las comunidades. Debemos revisar y mejorar nuestros sistemas de control y denuncia de irregularidades y ser más **responsables**, transparentes y honestos en relación con nuestras fallas.

En la sociedad civil deberíamos hacer todo esto no solamente porque es lo correcto, sino también porque si no tomamos la iniciativa de responder, se aplicarán desde arriba medidas que afectarán al espacio de la sociedad civil en su conjunto. Sin confianza pública en la sociedad civil, uno de nuestros activos esenciales, será mucho más fácil restringir a la sociedad civil. El gobierno de Haití, por ejemplo, anunció tras el escándalo su intención de redactar una ley para someter a las OSC que operan en el país a una mayor supervisión estatal, lo cual podría amenazar el espacio cívico. Quienes se oponían al compromiso del Reino Unido de entregar el 0,7% de su PIB en ayuda oficial al desarrollo (AOD) también consiguieron munición adicional para **atacar** dicha política.

Nuestra respuesta como sociedad civil no debe ser defensiva. En cambio, es hora de que reexaminemos nuestro modo de percibir a las personas con quienes trabajamos y el nivel de autonomía que les ayudamos a tener y desarrollar, y enfrentarnos al interrogante fundamental de si estamos imitando y perpetuando el patriarcado y las culturas y estructuras de poder existentes en la sociedad, en vez de desafiarlos y desbaratarlos.

RECLAMANDO IGUALDAD: LA SOCIEDAD CIVIL Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTQI

2018 fue otro año en que la sociedad civil hizo una diferencia en materia de derechos LGBTQI, exigiendo la despenalización en los más de 70 países donde las relaciones homosexuales siguen estando criminalizadas, promoviendo el matrimonio igualitario más allá de los 25 países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal y desafiando en todo el mundo el estatus de las personas LGBTQI como ciudadanos de segunda clase. El año arrojó grandes éxitos, especialmente en la India, donde, gracias a las acciones legales iniciadas por la sociedad civil, se descriminalizaron las relaciones sexuales homosexuales. Pero también presenció importantes contratiempos, como ocurrió en Tanzania, donde un estado cada vez más represivo emprendió una vengativa caza de brujas contra las personas LGBTQI.

INDIA: UN GRAN AVANCE

La Corte Suprema de la **India** dio un gran paso adelante en septiembre, cuando despenalizó las relaciones homosexuales al anular una ley arcaica que establecía para tales casos multas y penas de cárcel de hasta 10 años. **Esta legislación de la era colonial** estaba incorporada en la Sección 377 del Código Penal de la India sobre “delitos antinaturales”.

Al leer el veredicto, el presidente de la Corte, Dipak Misra **afirmó** que “la moralidad constitucional no puede ser martirizada en el altar de la moralidad social” y que “la moralidad social no puede ser usada para violar los derechos fundamentales de siquiera un solo individuo”. Ser gay, **dijo** el juez Misra, es una “variación” y no una “aberración”.



Los activistas LGBTQI de la India desafiaron con éxito la prohibición de la era colonial que pesaba sobre las relaciones homosexuales.

Crédito: Debajyoti Chakraborty/NurPhoto vía Getty Images

El fallo se produjo como resultado de décadas de **luchas** de la sociedad civil lideradas por la **Fundación Naz**, una OSC de defensa de los derechos LGBTQI, y **Colectivo de Abogados**, una organización legal que se ocupa de temas de derechos civiles y sexuales. **Anand Grover**, del Colectivo de Abogados, reflexionó acerca de la significación veredicto para la comunidad LGBTQI de la India:

Cuando la Corte Suprema despenalizó el sexo consensual en privado entre adultos, significó mucho para numerosas personas en la India. Se supone que la sección 377 se aplica tanto a heterosexuales como a homosexuales, y tanto a mujeres como a hombres homosexuales, pero lo cierto es que se ha usado principalmente como una herramienta en manos de la policía para hostigar, extorsionar y chantajear a los hombres homosexuales. Ha impedido que los gays buscaran protección legal contra la violencia, por temor a acabar siendo penalizados por sodomía. La criminalización dio lugar al estigma y al prejuicio, que a su vez perpetuó una cultura de silencio en torno a la homosexualidad y resultó en rechazo en el hogar y discriminación en el lugar de trabajo y en los espacios públicos.

La decisión de la Corte Suprema levantó una carga tan pesada que soportaban tantas personas, que la hemos llamado la segunda independencia de la India – la independencia de todos aquellos grupos que aún seguían siendo criminalizados por una ley británica. La sección 377 fue impuesta en 1861, bajo el dominio colonial. Antes de que llegaran los británicos, las prácticas sexuales no eran criminalizadas en la India.

Como resultado inmediato del cambio legal, las personas ahora pueden ejercitar abiertamente su sexualidad. Las personas que se casaron en el extranjero ahora están organizando recepciones para celebrar sus matrimonios. Esto era inaudito en la India antes de septiembre. Es bastante nuevo que las personas declaren

voluntariamente que son gays y sean vistos como una parte normalizada de la sociedad. Espero que nos convirtamos en una sociedad más pluralista, al menos en términos de sexualidad.

La lucha por este derecho fundamental fue larga y difícil, demandó muchos años de dedicación de la sociedad civil y requirió una combinación de acción legal astuta y campañas públicas, tal como lo relata Anand:

Esta fue una gran victoria que a la sociedad civil le costó mucho alcanzar. El proceso fue iniciado por el Colectivo de Abogados en 2001 – o incluso antes, porque todo comenzó con el VIH. Empezamos a abogar por los derechos de las personas con VIH a fines de la década de 1980, y perdimos muchas veces, pero obtuvimos nuestra mayor victoria en 1997, cuando el Tribunal Superior de Bombay falló en contra de la discriminación laboral en el sector público en función del estatus de VIH.

Después de que ganamos el caso del VIH, muchos hombres homosexuales comenzaron a llegar a nuestra oficina en Mumbai en busca de asesoramiento legal. Y fue entonces cuando me di cuenta de que el problema central para ellos era la Sección 377. Era el mayor impedimento para la expresión plena de la sexualidad y la personalidad de las personas LGBTQI.

Primero decidimos impugnar la Sección 377 en 1999 o 2000, pero no pudimos presentar una petición porque ningún homosexual estaba listo para exponerse. La homosexualidad estaba tan estigmatizada que nadie quería dar la cara. Mientras tanto, alguien más presentó una petición en Delhi, la cual fue desestimada. Después de eso tuvimos que cuestionar la constitucionalidad de la Sección 377 en el Tribunal Superior de Delhi. La Fundación Naz también había llegado a la misma conclusión: la Sección 377 era uno de los mayores obstáculos para el acceso a los servicios de salud por parte de los hombres homosexuales, que intentaban mantenerse bajo el radar por temor a ser procesados.

“

EL PROCESO TOMÓ
AÑOS, DE MODO
QUE TAMBIÉN DIO
TIEMPO PARA QUE
LOS CAMBIOS SE
REFLEJARAN EN LA
MENTALIDAD DE LAS
PERSONAS.

”

Ante el Tribunal Superior de Delhi argumentamos que la Sección 377 dificultaba la labor de la Fundación Naz de brindar asesoramiento sobre salud sexual a hombres homosexuales. También cuestionamos la Sección 377 porque violaba los derechos a la igualdad, la no discriminación y la libertad de expresión, la vida y la libertad personal, incluidos los derechos a la privacidad, la dignidad y la salud.

En 2009, el Tribunal Superior de Delhi declaró que la Sección 377 era inconstitucional y por consiguiente despenalizó las relaciones consensuales y privadas entre personas adultas del mismo sexo. Sin embargo, también fueron presentadas ante la Corte Suprema 15 peticiones especiales (SLP) contra la decisión del Tribunal Superior de Delhi, principalmente en nombre de grupos religiosos, y el gobierno no apeló. Entre otras intervenciones en apoyo de la sentencia, el Colectivo de Abogados presentó en nombre de la Fundación Naz una declaración jurada exhaustiva contra las SLP. En 2013, el Tribunal Supremo anuló la sentencia del Tribunal Superior de Delhi con el argumento de que enmendar o derogar la Sección 377 estaba en manos del parlamento y no del poder judicial. La remediales. Entretanto se presentaron otras peticiones, y en septiembre el Tribunal Supremo finalmente revisó su sentencia de 2013 y concluyó que la Sección 377 era efectivamente inconstitucional. Básicamente lo que dijo fue “ay, cometimos un error, lo sentimos mucho”.

Como lo sugiere el relato, los grupos conservadores se opusieron ferozmente a la despenalización. A pesar de la derogación de la prohibición, el líder de uno de esos grupos, All India Hindu Mahasabha, **afirmó** que “estamos otorgando credibilidad y legitimidad a personas con enfermedades mentales”. Pero, según Anand, se ha producido un giro crucial en las actitudes de la ciudadanía:

De 2001 a 2018 desarrollamos una gran cantidad de acciones de incidencia a través de los medios de comunicación, y con el tiempo el público comenzó a comprender los problemas, por lo que ahora casi no hay reacción contraria. El proceso tomó años, de modo que también dio tiempo para que los cambios se reflejaran en la mentalidad de las personas.

Creo que los grupos anti-derechos son débiles en este tema específico, porque todos los principales grupos religiosos acabaron tomando partido contra la criminalización. Eventualmente veremos una reacción violenta cuando se plantee la cuestión del matrimonio igualitario, pero no en torno a la despenalización de las relaciones homosexuales. E incluso el matrimonio gay eventualmente será reconocido, porque es el lógico paso siguiente.

Si bien es un avance importante, la despenalización no es el final del camino para los activistas LGBTQI de la India, que subrayan que el cambio legal debe ir acompañado de cambios sociales, por ejemplo para garantizar la igualdad de acceso al empleo, la atención médica y la educación. Anand describe las próximas etapas de la lucha y es optimista respecto de las perspectivas de ulteriores cambios:

Ahora debemos pasar a la siguiente etapa en términos de igualdad entre las personas LGBTQI y el resto de la población. Esto incluye la igualdad y la no discriminación en el sector privado y en relación con el empleo, educación, los servicios de salud, etc. Además, las leyes sobre agresión sexual y la violación deben ser neutrales con respecto al género. Esto también se aplica al matrimonio: debe ser definido como una relación entre dos personas, de modo que la definición debe ser neutral respecto del género. Lo mismo ocurre con la herencia y demás.

La lección es bastante simple: debes darte cuenta de que cuando la justicia está de tu lado, debes seguir luchando y finalmente ganarás. Eso es lo que sucedió aquí: sabíamos que esta ley, impuesta arbitrariamente por los británicos, era injusta. Nos enfrentamos a muchos desafíos y la lucha fue larga, pero finalmente salimos airoso.

AVANCES EN MATERIA DE DERECHOS LGBTQI ALREDEDOR DEL MUNDO

India no fue el único país donde la sociedad civil acudió a los tribunales para lograr avances en los derechos LGBTQI. En agosto, la Corte Suprema de **Costa Rica** dictaminó la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo en el país. La Corte dio al gobierno un plazo 18 meses para aprobar una ley que permitiera el matrimonio igualitario; la sociedad civil instó al gobierno a cumplir rápidamente, y para alentarlos **pidió** a la Corte que publicara su decisión en su totalidad, ya que no lo había hecho. Antes del fallo judicial, la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, celebradas en abril, representó una suerte de prueba decisiva del estado

de las actitudes de la sociedad, ya que los dos candidatos habían adoptado posturas totalmente opuestas en torno del tema, y el candidato favorable al matrimonio igualitario **derrotó** al que se oponía a los derechos de las personas LGBTQI.

También en América Central se observaron progresos. En **Belice**, en el mes de marzo la Iglesia Católica **retiró** una apelación ante la Corte Suprema contra una sentencia que había anulado la prohibición constitucional que pesaba sobre las relaciones homosexuales. Este fue otro caso presentado y ganado por la **sociedad civil**.

En julio, la sociedad civil LGBTQI obtuvo una nueva **victoria** en **Portugal**, donde se aprobó una nueva Ley sobre Identidad de Género y Características Sexuales que reconoció el derecho legal al cambio de nombre y sexo. Incluso en **Kenia**, donde la homofobia es promovida desde la cúspide, el presidente Uhuru Kenyatta ha **definido** la denegación de derechos a la población LGBTQI como un tema cultural más que un problema de derechos humanos, - y donde refugiados LGBTQI fueron **atacados** físicamente en diciembre, se logró una pequeña **victoria** en septiembre, cuando el Tribunal Superior suspendió temporalmente la prohibición de proyectar la película “Rafiki”, una historia de amor lesbica ambientada en Nairobi. La película había sido prohibida en abril, antes de su proyección en el Festival de Cine de Cannes.

El éxito de la sociedad civil en su lucha contra leyes anacrónicas en la India ha inspirado al activismo de **Singapur**, donde el movimiento **Ready 4 Repeal** (Listos para la Revocación) está haciendo campaña para derogar la sección del código penal de la era colonial que criminaliza el sexo entre hombres. En septiembre, la campaña presentó al gobierno una petición de derogación respaldada por **44.650 firmas**, y un debate realizado en el ayuntamiento ese mismo mes convocó a 800 personas. El **argumento legal** que se está utilizando afirma que la ley es incompatible con las garantías constitucionales de libertad. Si bien las disposiciones penales de la ley actualmente no se aplican, su vigencia contribuye a fomentar un clima de discriminación, e incluso crea dificultades para que las parejas de personas

“

COMO LO MOSTRÓ EL EJEMPLO DE LA INDIA, LOS AVANCES PUEDEN SER EL RESULTADO DE BATALLAS JUDICIALES TRABAJOSAMENTE GANADAS A LO LARGO DE MUCHO TIEMPO, A COSTA DE GRANDES ESFUERZOS SOSTENIDOS DURANTE AÑOS Y GRACIAS AL USO INTENSIVO DE RECURSOS, PERICIA LEGAL Y COLABORACIÓN.

”

del mismo sexo accedan a viviendas públicas. Miles de personas también participaron en la décima edición de los eventos del **orgullo gay** en Singapur, organizados por la OSC LGBTQI líder **Pink Dot SG** en el mes de julio.

Durante 2018 se llevaron a cabo en **Montenegro consultas públicas** sobre un proyecto de ley para reconocer a las uniones de personas del mismo sexo. Aunque fue criticado por los grupos LGBTQI por no otorgar a las parejas del mismo sexo los mismos derechos que a las parejas heterosexuales, la mayoría de las organizaciones consideró que el proyecto de ley constituía un paso positivo en la dirección correcta. Durante el sexto desfile anual del Orgullo en el país, que se desarrolló pacíficamente en noviembre, los participantes **pidieron** al gobierno que adoptara la ley. Los grupos religiosos conservadores continuaron exigiendo que la propuesta fuera retirada.

En contraste, un revés se produjo en **Taiwán**, donde en un referéndum celebrado en noviembre los votantes **rechazaron** una propuesta de legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo. También fue rechazada una propuesta para apoyar una educación inclusiva de las personas LGBTQI en las escuelas. Los votantes **apoyaron** en cambio la propuesta de un procedimiento distinto al matrimonio para reconocer las uniones entre personas del mismo sexo. El referéndum, que solo tuvo carácter consultivo, fue convocado como resultado de una iniciativa de grupos religiosos conservadores, por supuesto que contrarios al matrimonio entre personas del mismo sexo. La votación se produjo después de que en 2017 el Tribunal Constitucional de Taiwán dictaminara que la ley de matrimonio vigente en el país discrimina a las parejas del mismo sexo. El tribunal otorgó a la legislatura dos años para enmendar las leyes existentes o aprobar una nueva legislación que otorgue a las parejas LGBTQI los mismos derechos que a las parejas heterosexuales. En febrero de 2019, la respuesta del gobierno ante una opinión pública que el referéndum reveló dividida consistió en **proponer** una ley que no alcanza a garantizar la igualdad plena; la ley propuesta extendería a las uniones entre personas del mismo sexo protecciones legales similares a las que amparan a los matrimonios heterosexuales, pero continuaría definiendo al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. La propuesta no agradó ni a los grupos conservadores ni a las organizaciones LGBTQI, y estas últimas señalaron que la ley propuesta seguiría privando a las personas LGBTQI de igualdad de derechos. La campaña para hacer de Taiwán el primer país asiático en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo sigue su curso.

Como lo mostró el ejemplo de la India, los avances pueden ser el resultado de batallas judiciales trabajosamente ganadas a lo largo de mucho tiempo, a costa de grandes esfuerzos sostenidos durante años y gracias al uso intensivo de recursos, pericia legal y colaboración. En todo el mundo, la sociedad

civil continúa enfrentando a fuerzas conservadoras altamente organizadas y una ignorancia y prejuicios profundamente arraigados. Para responder a ellos, la sociedad civil debe ganar batallas no solamente en los tribunales, sino también en los corazones y las mentes de sus conciudadanos.

En **Cuba**, por ejemplo, los activistas LGBTQI se han encontrado con la dura oposición de grupos religiosos conservadores que movilizan el prejuicio popular. Como parte del proceso de desarrollo de la nueva constitución de Cuba en 2018, se propuso que la constitución describiera al matrimonio como la unión de dos personas, eliminando toda referencia a hombres y mujeres. Pero la propuesta, apoyada por activistas de derechos LGBTQI, fue fuertemente rechazada por grupos evangélicos. En tanto que **miles de personas** se manifestaron en mayo por la capital, La Habana, en apoyo de los derechos LGBTQI en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, el mes siguiente cinco grupos evangélicos **publicaron** una declaración expresando su oposición a la propuesta. En un país donde los hombres homosexuales todavía recuerdan haber sido enviados a campos de trabajo, los grupos evangélicos dieron muestra públicamente de una profunda homofobia. Los medios estatales informaron que la mayoría de los ciudadanos que comentaron la propuesta se opusieron a ella, y para diciembre la propuesta había sido silenciosamente **abandonada** en favor de un lenguaje neutral que al menos deja abierta la posibilidad de un cambio futuro.

RUMANIA: DERROTA DE UNA MANIOBRA DE DISTRACCIÓN

El **referéndum** realizado en **Rumania** en octubre, con el objetivo de restablecer la prohibición constitucional del matrimonio entre personas del mismo sexo, fue rechazado por actores de la sociedad civil como un intento de distracción y apaciguamiento de la constante indignación pública que ha salido a responder a los repetidos intentos del gobierno de debilitar los castigos para los funcionarios corruptos (**véase sección 1**). Convocado a raíz de la iniciativa de un grupo conservador, Coalición para la Familia,

y apoyado por el gobierno, el referéndum parecía dirigido a galvanizar el apoyo conservador detrás del gobierno, en un contexto donde no ha habido ninguna evolución seria en dirección del matrimonio entre personas del mismo sexo. En ese sentido, sugirió que el partido gobernante veía a la comunidad LGBTQI de Rumania como poco más que un conveniente chivo expiatorio en un país que ya era considerado uno de los más inhospitalarios estados miembros de la UE para los derechos LGBTQI.

La constitución actualmente define al matrimonio como una relación entre dos personas, con una terminología neutral en términos de género; la propuesta pretendía que fuera definido como posible únicamente entre un hombre y una mujer. Sin embargo, y pese a que el gobierno hizo todo lo posible para asegurar su éxito, permitiendo un período de votación de dos días en lugar de uno y reduciendo el umbral de participación requerido del 50 al 30%, la medida fue **derrotada** por un boicot organizado: apenas alrededor del 20% de los ciudadanos habilitados concurren a las urnas, de modo que, aunque los que votaron lo hicieron en forma abrumadora en favor del cambio, la participación fue demasiado baja para que la medida se aprobara.

Los grupos religiosos conservadores también participaron activamente en la vecina **Moldavia**: en mayo, una asociación religiosa **organizó protestas** contra la educación sexual y la promoción de relaciones entre personas del mismo sexo.

LETONIA: PREJUICIO Y ORGULLO

También en **Letonia** la sociedad civil ha buscado consagrar los derechos de las personas LGBTQI frente a actitudes sociales negativas y a una Iglesia Católica que tiene influencia sobre muchos políticos. Desde 2015, las escuelas han recibido el mandato de promover los “valores familiares” y el matrimonio, lo cual en Letonia significa exclusivamente el matrimonio entre un hombre y una mujer. La influencia de las fuerzas conservadoras, cada vez más confiadas en sí mismas en Letonia como en gran parte de Europa, supuso que los intentos de extender derechos escasearan durante 2018,



En septiembre, los participantes de la Marcha del Orgullo en Belgrado, Serbia, reclamaron nuevas leyes sobre relaciones entre personas del mismo sexo e identidad de género.

Crédito: Bojan Cvetahović

como lo relata **Kaspars Zālītis**, de **Mozaika**, la única asociación de derechos LGBTQI de Letonia:

En marzo el parlamento desestimó rápidamente un proyecto de ley de cohabitación que habría otorgado derechos básicos a las parejas no casadas, incluidas las de personas del mismo sexo. Lo hizo con el argumento de que las parejas podían acceder a estos derechos casándose, pese a que la Constitución de Letonia prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. La iniciativa se había iniciado tres años atrás a través de una petición en línea que reunió 10.000 firmas, razón por la cual el parlamento se vio obligado a considerarla.

*La Iglesia Católica tiene mucha influencia y está tomando la iniciativa en la lucha contra la comunidad LGBTQI y contra los derechos de las mujeres. Ha habido mucho desacuerdo sobre la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, el **Convenio de Estambul**. Los líderes de la iglesia y muchos funcionarios públicos se oponen a la ratificación del convenio porque una de sus cláusulas de no discriminación se refiere a la orientación sexual y la identidad de género. El arzobispo católico está liderando la oposición al convenio y ha reunido un apoyo considerable entre los partidos políticos y los parlamentarios. Se las arregló para convencerlos de que la ratificación es parte de la agenda secreta de los denominados “generistas”, una expresión originada en **Rusia**, país de fuerte influencia cultural en Letonia. Los funcionarios eclesiásticos, los activistas y políticos de derecha y los grupos anti- LGBTQI y anti-aborto declaran que el convenio es contrario a los valores tradicionales de Letonia y que apunta a la sobre-sexualización y a la conversión de los niños. Estos argumentos están ganando terreno entre la ciudadanía.*

Esta retórica no es dominio exclusivo de la Iglesia Católica: la Iglesia Luterana, que es la iglesia protestante más grande de Letonia, también está liderando la lucha contra nosotros y el Convenio de

Estambul. Además, están surgiendo nuevas organizaciones religiosas con vínculos directos con grupos evangélicos de los Estados Unidos. Algunos de sus líderes han recibido capacitación en los Estados Unidos y son muy buenos para influir sobre las personas.

Aunque los líderes y organizaciones religiosas no tienen un rol directo e institucionalizado en la formulación de políticas, en la práctica tienen mucha influencia. No es raro que el arzobispo católico se reúna con el principal partido de la coalición gobernante o que el líder del partido diga que ha “consultado” con la Iglesia católica y ha decidido votar de una u otra forma. Es posible observar la relación directa porque todo esto ocurre en público. Nosotros, por el contrario, no tenemos acceso a los principales políticos porque ellos no están dispuestos a arriesgar su reputación al reunirse con nosotros en público. A lo sumo, podemos esperar tener cada tanto alguna reunión privada.

Vemos que la derecha religiosa está en ascenso en toda Europa. Las organizaciones religiosas y los partidos de derecha están cada vez más organizados y coordinados para luchar contra la igualdad de género y los derechos de las personas LGBTQI a nivel europeo, y están recibiendo un enorme flujo de recursos de los Estados Unidos. Tienen muchos más recursos que nosotros, y su mensaje también encaja mejor con la homofobia latente en la sociedad letona, que cada vez es más explícita. Y después de la votación de Brexit y la victoria de Trump, están envalentonados.

Las respuestas de la sociedad civil a estas presiones han consistido en monitorear e informar sobre el discurso de odio en las redes sociales, tratar de refutar los mitos con hechos y montar argumentos en favor de los derechos LGBTQI basados en el compromiso más amplio con los derechos humanos. Para contrarrestar la reacción, la sociedad civil también lleva el mensaje a las calles a través de los eventos Orgullo en Letonia y Orgullo Báltico, tal como lo relata Kaspars:

*Orgullo en Letonia es el evento LGBTQI más visible del país. Llama la atención social y de los medios hacia nuestra causa, pero también atrae una gran cantidad de expresiones de odio y saca a la superficie actitudes negativas hacia la comunidad LGBTQI. Orgullo en Letonia creció a partir de 70 participantes que se enfrentaron a 3000 contramanifestantes en 2005, a 5000 participantes en EuroPride 2015, celebrado en la capital, Riga, y 8000 en el Orgullo Báltico de 2018. Entretanto, fue **prohibido** por el Ayuntamiento de Riga en tres oportunidades.*

Mozaika solicitó permiso para celebrar el Orgullo Báltico en febrero. Las leyes letonas establecen que las solicitudes deben presentarse no más de cuatro meses con anterioridad al evento, y que, si hay más de una solicitud para un evento el mismo día, se dará prioridad al primer solicitante. El representante de Mozaika llegó al Ayuntamiento de Riga una hora antes de la apertura para asegurarse de que Orgullo Báltico fuera el primer evento inscripto, y solo unos segundos después de que ingresara en el edificio arribó un representante de la organización anti-derechos Antiglobalistas para presentar una solicitud para otro evento que tendría lugar exactamente en el mismo momento y lugar, pero bajo el nombre “Promoción de la pedofilia, zoofilia, necrofilia y otras perversiones”. Ellos querían dejar sentado que, si “los homosexuales” pueden promover sus “perversiones”, a cualquiera debería permitirle promover cualquier otra perversión que se le pudiera ocurrir.

Desde que se supo a fines de 2017 que Riga sería la sede del Orgullo Báltico, Mozaika y el Orgullo Báltico se convirtieron en blancos. El líder de la unidad de Riga del Partido Verde de Letonia inició una campaña personal contra los denominados “generistas”. Insistió en que el Orgullo Báltico debía prohibirse y armó una página de Facebook para “inspirar” a los activistas por los “valores tradicionales”. A partir de enero, los organizadores del Orgullo Báltico recibieron más de cien ataques, advertencias o amenazas personales. Nos insultaron y nos

llamaron perversos y enfermos en nuestras páginas de Facebook todos los días. Se lanzaron campañas de odio para transmitir la idea de que el Orgullo es un “festival de sexo”. Se hicieron innumerables publicaciones que mostraban el arco iris junto con armas para crear temor entre los posibles participantes y la comunidad LGBTQI y disuadirlos de asistir. Los Antiglobalistas, Tautas tiesību kustība (Movimiento por los Derechos Nacionales) y activistas inspirados por políticos de derecha publicaron constantemente declaraciones para alentar a otros a atacar al Orgullo Báltico. A veces llegaron a proporcionar detalles sobre nuestras actividades, lo cual nos obligó a limitarlas a participantes registrados para garantizar la seguridad. También tuvimos que tomar medidas de seguridad sin precedentes para los eventos del Orgullo.

Afortunadamente pudimos encontrar puntos en común y trabajar estrechamente con la policía. Mientras que los contra-manifestantes atacan y humillan a la policía, nosotros la tratamos con respeto. Ningún funcionario público ni oficial de policía que nos apoye lo diría públicamente, pero a puertas cerradas hemos podido trabajar juntos.

*Al final, el Orgullo Báltico fue un gran éxito. Lo hubiéramos considerado exitoso si hubieran asistido 2000 personas, pero asistieron **más de 8000**. No hubo incidentes importantes, aunque en algún momento alguien arrojó huevos y bombas de humo a los participantes.*

ORGULLO Y PROTESTA

El Orgullo Báltico fue uno de los muchos eventos de orgullo celebrados con éxito en todo el mundo en 2018. El primer **Desfile del Orgullo** de Swazilandia se desarrolló pacíficamente en junio, **Timor-Leste** celebró su segundo **evento** de este tipo en julio, y en agosto se celebró pacíficamente un **festival del orgullo** en Mongolia. El octavo **desfile del orgullo** de **Serbia**, realizado en septiembre, exigió nuevas leyes sobre las uniones entre personas del mismo sexo y la identidad de género, y contó con la participación de la Primera Ministra Ana Brnabić, la primera declaradamente gay de Serbia.

La gente también salió a las calles de **Georgia** en mayo para **reclamar** por los derechos de las personas LGBTQI en el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, a pesar de las amenazas y la realización de una contra-protesta encabezada por la Iglesia Ortodoxa de Georgia. Otra manifestación se realizó en mayo en protesta contra el uso de violencia por parte de la policía en redadas en clubes nocturnos.

En muchos lugares, las demandas por los derechos de las personas transgénero quedaron en primer plano. En **Uruguay** la **Marcha anual de la Diversidad**, desarrollada en septiembre, movilizó a miles de personas en apoyo de un proyecto de ley integral para las personas trans. Una **protesta** por los derechos de personas transgénero también se llevó a cabo en **Corea del Sur** en noviembre.

Como parte de la evidente ola de activismo LGBTQI que recorrió Asia en 2018, en julio miles de personas protestaron frente a las oficinas del partido gobernante de **Japón**, el Partido Demócrata Liberal, exigiendo la renuncia de uno de sus parlamentarios, Mio Sugita, quien había criticado al matrimonio entre personas del mismo sexo y calificado a las parejas del mismo sexo de “no productivas”. El matrimonio entre personas del mismo sexo aun no es legal en Japón, aunque algunos gobiernos locales reconocen las uniones formales entre personas del mismo sexo. Más adelante, en octubre, el gobierno metropolitano de Tokio **aprobó** un proyecto de ley que prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, un avance positivo mientras la ciudad se prepara para recibir los Juegos Olímpicos de 2020.

REVESES EN LAS LUCHAS POR LOS DERECHOS LGBTQI

Si bien en muchos países los eventos del orgullo se desarrollaron sin incidentes, no fue así en todas partes. **Hadi Damien**, organizador de la Semana del Orgullo Gay en el **Libano**, se encontró entre quienes experimentaron restricciones. Durante la semana de los eventos fue detenido bajo acusaciones de libertinaje e indecencia pública y recién

recuperó la libertad cuando accedió a cancelar el resto del programa.

En **Turquía**, las personas LGBTQI previsiblemente se convirtieron en blancos de la represión estatal del espacio cívico en curso, ejercida por un partido gobernante que moviliza a una base de apoyo conservadora. Durante cuatro años la **Marcha del Orgullo** de Estambul había sido prohibida por motivos de “orden público”, y quienes intentaron reunirse en julio fueron dispersados con gases lacrimógenos; al menos 41 personas fueron detenidas. También se prohibió un intento posterior de celebrar un desfile del orgullo en la provincia de Adana, mientras que en Ankara los tribunales **se negaron** a atender las demandas presentadas por dos OSC contra la prohibición por tiempo indefinido de los eventos LGBTQI.

En marzo, el intento de conmemorar el Día Internacional de la Visibilidad Trans en **Bosnia y Herzegovina** fue **frustrado**. Las autoridades locales de la capital, Sarajevo, arguyeron problemas de seguridad para negar al Centro Abierto de Sarajevo la autorización para organizar una protesta, a pesar de que la organización ya había realizado otras protestas en el mismo lugar. El permiso también fue denegado cuando el Centro intentó trasladar el evento a otro sitio. Pronto quedó en evidencia que el problema era el hecho de que se trataba de una CSO de la diversidad sexual. Los delitos de odio también siguen constituyendo un desafío en Bosnia y Herzegovina, pese a la reciente aprobación de leyes en ese sentido.

Al igual que en Turquía, en **Uganda** la restricción sistemática del espacio cívico perpetrada por el estado se ensaña particularmente con la sociedad civil que defiende los derechos de las personas LGBTQI. En mayo, por ejemplo, las autoridades **cancelaron** los eventos planeados para el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, y el Ministro de Ética e Integridad clausuró una conferencia de la sociedad civil sobre las personas que viven con VIH/SIDA con el argumento de que promovía la homosexualidad.

En **Camerún**, policías de civil **detuvieron** en abril a cinco integrantes del personal de Avenir Jeune de l'Ouest (Porvenir Joven del Occidente, AJO), incluido su director ejecutivo. AJO aboga por los derechos de las personas



En julio de 2018 los manifestantes desafiaron la prohibición y expresaron su orgullo en las calles de Estambul.

Crédito: Chris McGrath/Getty Images

“
 EN TANZANIA,
 DONDE LA
 HOMOSEXUALIDAD
 SIGUE SIENDO
 ILEGAL, EL
 PRESIDENTE JOHN
 MAGUFULI HA
 DEMONIZADO CADA
 VEZ MÁS A LAS
 PERSONAS LGBTQI
 COMO PARTE DE
 SU ESTRATEGIA
 POPULISTA
 DE DIVISIÓN Y
 CONQUISTA.

”

VIH-positivas, LGBTQI y trabajadoras sexuales. Durante el interrogatorio al que fueron sometidos, se les dijo que se les acusaba de homosexualidad, tipificada como delito en el Código Penal de Camerún. De ser encontrados culpables, enfrentarían sentencias de prisión de hasta cinco años.

Hechos particularmente preocupantes se produjeron en **Tanzania**, donde la homosexualidad sigue siendo ilegal y el presidente John Magufuli ha demonizado cada vez más a las personas LGBTQI como parte de su estrategia populista de división y conquista. En noviembre, cientos de personas de Dar es Salaam, la ciudad más poblada de Tanzania, **debieron esconderse** cuando Paul Makonda, Comisionado Regional de la ciudad y aliado del presidente, **anunció** la formación de un comité de 17 personas para identificar y castigar a las personas homosexuales. Según afirmó, el comité analizaría las publicaciones de redes sociales y sitios web para identificar a las personas que publicaran contenidos considerados homosexuales. Makonda pidió a los ciudadanos que denunciaran a las personas LGBTQI y pronto presumió de haber recibido 18.000 mensajes de apoyo y miles de nombres, señal de lo extendida que está la homofobia. Luego se informó que la policía estaba allanando las viviendas de los acusados. La medida obligará a las personas LGBTQI a permanecer en la clandestinidad, fomentará el miedo y la autocensura y alentará los ataques contra la comunidad LGBTQI.

El mes de julio presentó nuevas pruebas del arraigo de las actitudes homófobas entre los gobernantes de África. A la Coalición de Lesbianas Africanas, una red de OSC de 10 países africanos, con sede en Sudáfrica, le fue **retirado** el estatus de observador en la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. La Unión Africana, la organización madre de la Comisión, describió el trabajo de la Coalición como una afrenta a los “valores africanos”. Todavía queda un largo camino por recorrer y mucho trabajo pendiente para la sociedad civil antes de que todas las personas puedan disfrutar de los mismos derechos.

LA NEGATIVA A CONVERTIRSE EN VÍCTIMAS: ABUSOS SEXUALES EN LA IGLESIA CATÓLICA

En 2018 la Iglesia Católica tuvo su propio momento #MeToo. En la medida en que numerosos sobrevivientes se transformaron en activistas, fue un año de acción masiva y campañas de perfil cada

vez más alto en busca de reparación por los horribles y sistemáticos abusos sexuales cometidos por muchos sacerdotes católicos.

CHILE: VISITA PAPAL DESENCADENA ACCIONES POR ABUSOS

La **visita** del Papa Francisco a **Chile** en enero había sido planeada como un evento masivo de renovación de la fe. En cambio, se convirtió en el punto de partida para una creciente discusión sobre el abuso sexual dentro de la Iglesia, con cientos de denuncias por abuso contra obispos y sacerdotes.

Cuando el Papa Francisco visitó Chile, los sobrevivientes de abusos acusaron al Papa y al obispo Juan Barros de pasar por alto décadas de abusos sistemáticos. Varias **protestas** destacaron también el uso de fondos públicos para la visita, en un país donde la pobreza es elevada. Los sindicatos se unieron para organizar una “Marcha de los Pobres” en Santiago. La movilización fue reprimida por las fuerzas de seguridad, que afirmaron que la protesta no había sido autorizada; se informó que al menos 20 personas fueron arrestadas.

La intensidad de las protestas y la amplia cobertura mediática que atrajeron hicieron imposible ignorarlas, lo cual llevó al Papa Francisco a acceder a una reunión secreta con sobrevivientes de abusos antes de abandonar Chile. **Cristián León González**, portavoz de **Fundación Voces Católicas**, una OSC cercana a la Iglesia, evalúa el impacto de las protestas:

*Las protestas fueron clave. Pero si el Papa Francisco hubiese hecho caso de modo inmediato a los **reclamos** de la agrupación de laicos de Osorno para que el obispo Barros, acusado de encubrir abusos, fuera removido de la diócesis, probablemente la fuerza de las movilizaciones hubiese mermado y el escándalo no se hubiese producido, o al menos no con la fuerza con que lo hizo. Durante su visita, y sobre todo después de abandonar Chile, el Papa percibió que había falencias y lagunas en los informes que recibía tanto de los obispos chilenos como del nuncio acerca de la realidad de la*

Iglesia local. Por eso, tras regresar a Roma, asertivamente envió a dos visitadores a investigar lo que ocurría en Chile.

Así pues, las protestas tuvieron un efecto que se sintió hasta mucho después de la visita papal. En abril, el Papa Francisco recibió en el Vaticano a víctimas chilenas de abusos, en un intento de enmendar lo que describió como un “error” y pedir **perdón**. En mayo **hizo un llamado** a poner fin a la cultura del abuso y el ocultamiento en la Iglesia. En julio, una **protesta** tuvo lugar durante la misa en la catedral de Santiago. Ante el aumento de las presiones, el Papa Francisco expulsó a un obispo chileno que había sido señalado como uno de los principales agresores sexuales y desplazó a varios más. Cristián retoma la historia:

*Tras la visita, la feroz reprimenda del Papa a nuestra Conferencia Episcopal terminó con la presentación de la renuncia de todos los obispos de Chile. Esto ha hecho que poco a poco nuestra Iglesia tomara acciones para recomponer los agravios cometidos a tantos fieles a lo largo de décadas. Quizás lo más relevante haya sido la creación del **Departamento de Prevención de Abusos** en la órbita de la Secretaría General de la Conferencia Episcopal de Chile.*

*Se estableció también la **Delegación para la Verdad y la Paz**, que ve la parte política, ejecutiva e investigativa del arzobispado de Santiago, y se encarga por ejemplo de coordinar las denuncias recibidas por la Oficina de Pastoral de denuncias y el Departamento de Prevención de Abusos y de dar acompañamiento espiritual a las víctimas. Además tiene facultades investigativas, de coordinación con la Vicaría Judicial, el clero y la cancillería del arzobispado, y de coordinación con las instituciones civiles (Policía de Investigaciones, Tribunales de Justicia).*

Todo lo cual es muy bonito en el papel; lo crucial sin embargo es que estas medidas sean realmente implementadas y las víctimas de abusos sientan que la Iglesia los protege y defiende. El punto más débil de la respuesta ha sido que hasta la fecha no ha habido de

nuestros clérigos un auténtico acto de pedido de perdón, humilde, personal y de corazón, sino solamente declaraciones impersonales a través de la prensa. En eso aún estamos en deuda.

La sociedad civil, concluye Cristián, tiene mucho que ofrecer al proceso de investigación, y la Iglesia puede aprender de la sociedad civil:

La Fiscalía Nacional, que investiga abusos sexuales y encubrimientos, informó que de los centenares de causas iniciadas contra sacerdotes por estos delitos, 148 siguen abiertas. Estas involucran a 255 víctimas, la mayoría de las cuales eran niños/as o adolescentes cuando fueron abusados. Frente a estos hechos, que más allá de ser pecados también constituyen crímenes, tanto la sociedad civil como el mundo religioso se han percatado de la total falta de rendición de cuentas de la Iglesia hacia la comunidad, y de una rendición de cuentas muy reducida de la gestión administrativa y pastoral a través de procesos formales de evaluación. Es clave que haya vías expeditas para denunciar a la justicia civil competente los delitos de abuso sexual de menores, pudiendo conservar en confidencialidad la identidad de la víctima. Esta es la función esencial del Consejo Nacional de Prevención de Abusos y Acompañamiento de Víctimas.

La Iglesia local tiene mucho que aprender de la sociedad civil en materia de rendición de cuentas, comunicación y gestión. Dado que se rige por dos leyes – el derecho civil y el derecho canónico -el clero debería tener, si acaso, una responsabilidad aún mayor.

ESTADOS UNIDOS: SOBREVIVIENTES RECLAMAN RENDICIÓN DE CUENTAS

Las protestas de Chile formaron parte de un movimiento global más amplio por la justicia y la rendición de cuentas. En los Estados Unidos, la Corte Suprema de Pensilvania hizo público un informe del Gran Jurado sobre abusos sexuales cometidos en la Iglesia Católica a lo largo de 70 años. El

documento de 1400 páginas, resultado de una investigación de 18 meses, nombra a por lo menos 300 sacerdotes acusados de abuso sexual infantil por más de 1000 sobrevivientes en todo el estado, y detalla el encubrimiento sistemático por parte de altos funcionarios de la Iglesia tanto en el país como en el Vaticano. El Procurador General concluyó que “predadores en cada diócesis transformaron a la fe católica en arma y la emplearon como una herramienta de su abuso”. Como resultado de acusaciones directas en su contra, Theodore McCarrick, uno de los más altos funcionarios del Vaticano en los Estados Unidos, fue obligado a renunciar.

Durante mucho tiempo, varias organizaciones han ayudado a los sobrevivientes para que puedan hablar sobre los abusos sufridos y han trabajado para obligar a los obispos a rendir cuentas. Ha habido llamamientos para la concreción de un movimiento #MeToo dentro de la Iglesia Católica de los Estados Unidos, donde la falta de transparencia y rendición de cuentas contribuye a la impunidad y a la perpetuación del abuso. Las protestas han sido lideradas por católicos decididos a limpiar la institución, quienes han protestado pacíficamente, a veces a través de la oración tanto dentro como fuera de las iglesias, y a menudo durante la misa. Algunos grupos católicos comenzaron un movimiento #TimesUp para exigir la verdad. En octubre, el Congreso de los Estados Unidos debatió un proyecto de ley para permitir a los sobrevivientes demandar a los perpetradores y a las instituciones religiosas, pero la iniciativa se atascó en el Senado.

ALEMANIA: LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD

En septiembre se publicó un informe de 356 páginas sobre abusos sexuales en la Iglesia Católica alemana, con detalles de 3677 casos producidos a lo largo de 68 años. Más de la mitad de los abusados, en su mayoría niños varones, tenían 13 o menos años de edad.

Aunque el informe incluyó casos ocurridos hasta 2014, las autoridades de la iglesia primero argumentaron que los casos reportados eran antiguos y el problema ya había sido resuelto. Sin embargo, el presidente de la Conferencia de Obispos de Alemania finalmente admitió el encubrimiento,

y durante una visita a **Estonia** en septiembre, el Papa Francisco **reconoció** la necesidad de un cambio.

Tras la revelación, la Iglesia Católica alemana estableció un “pago en reconocimiento” de hasta 5500 euros (aproximadamente 6300 dólares) que sería entregado a los sobrevivientes de abusos. Los sobrevivientes respondieron que no solamente se trataba de cifras absurdamente bajas, sino que en todo caso más que dinero querían la verdad. Una persona, por ejemplo, **dijo** que solo aceptó el pago una vez que sus abusadores hubieron confesado sus delitos. También afirmó que, dado que el informe solo contaba los abusos denunciados voluntariamente, el número de personas abusadas podría ser hasta 10 veces mayor.

En octubre, el cardenal Reinhard Marx, uno de los principales asesores papales sobre el tema, **agradeció** la presión pública para forzar reformas y dijo que la iglesia necesitaba tener una “conversación honesta” sobre el poder, la homosexualidad, el celibato y la formación de los sacerdotes, entre otros temas.

Para entonces las protestas se habían extendido a la propia ciudad del Vaticano, donde las víctimas **italianas** de abusos hicieron una **sentada** el día de la inauguración del Sínodo de los Obispos, en el cual más de 300 clérigos de 125 países discutieron estrategias para la modernización de la Iglesia. Otra protesta, organizada por mujeres para exigir que la Iglesia escuche sus voces, se llevó a cabo afuera. Las protestas continuaron en febrero de 2019, cuando el Papa Francisco celebró una **cumbre** especial sobre abuso sexual en el Vaticano.

IRLANDA: UN RECLAMO DE JUSTICIA

Irlanda tiene una larga y problemática historia de abusos en la Iglesia Católica. La atención se ha centrado en los asilos de las Magdalenas, en los cuales entre 1922 y 1996 fueron recluidas numerosas madres solteras. A mediados de la década de 1990, cuando se descubrieron fosas comunes de infantes en un terreno que había sido vendido por uno de los asilos, muchas



Sobrevivientes de abusos sexuales realizaron una vigilia en la Ciudad del Vaticano en febrero de 2019.

Crédito: Simone Padovani/Awakening/Getty Images

mujeres se presentaron a testificar, revelando cientos de casos de abuso sexual, psicológico y físico. En 2013 el gobierno estableció un Plan Estatal de Reparaciones y ofreció una disculpa oficial a las víctimas de abusos, una victoria largamente perseguida por la organización **Justicia para las Magdalenas**. Esta política benefició a algunas de las afectados, pero **no a todas**. Los medios de comunicación continúan **revelando** testimonios.

Al mismo tiempo, la **Comisión Ryan** descubrió muchos casos de abuso sexual en reformatorios y escuelas industriales administradas por la Iglesia Católica y supuestamente supervisadas por el Departamento de Educación. Estas revelaciones también resultaron en una política de reparación que debe ser implementada tanto por el estado como por las instituciones religiosas, aunque el estado hasta el momento **no lo ha hecho**.

Al igual que en Alemania, para los sobrevivientes de abusos en Irlanda la máxima prioridad no es la reparación financiera. En ausencia del establecimiento de mecanismos que eviten la repetición de los abusos, la compensación económica es considerada apenas un acto **simbólico** de rendición de cuentas. La OSC **One in Four** – “uno de cada cuatro”, alusión al hecho de que el 27% de los irlandeses sufre abusos antes de los 18 años – aboga por cambios en el derecho canónico (el derecho de la Iglesia Católica), tales como el reporte obligatorio de abusos, y afirma que actualmente la ley es utilizada para proteger a los abusadores manteniéndolos fuera del alcance de las instituciones judiciales.

Cuando el Papa Francisco visitó Irlanda en agosto, hubo gente protestando mientras él celebraba la misa. En un principio el Papa Francisco dijo desconocer el caso de los asilos de las Magdalenas. Después de que más sobrevivientes de abusos compartieron sus experiencias, pidió públicamente **perdón**. Los manifestantes lo **acusaron** de proteger a los abusadores sexuales. La campaña **Dile No al Papa** organizó un boicot pacífico de su visita, solicitando entradas gratuitas para eventos para luego no asistir, una acción que **irritó** a las autoridades de la iglesia.

POLONIA: EL FIN DEL SILENCIO

En octubre, la **Fundación No tengas Miedo** reveló el **mapa** del abuso sexual en **Polonia**. El informe, basado en datos judiciales y notas de prensa para suplir la ausencia de cifras oficiales, documentó 255 casos de abuso contra menores de 15 años. Según la organización, la Iglesia ha encubierto sistemáticamente los abusos. Si bien más de 50 sacerdotes han sido condenados por cometer abusos, algunos fueron reasignados a otras parroquias después de cumplir sus condenas.

También en octubre tuvo lugar una reunión de activistas con legisladores, en la cual los primeros **exigieron** castigo para los sacerdotes católicos condenados por abusar sexualmente de niños, así como la extensión del estatuto de limitaciones para el procesamiento de este tipo de casos. En respuesta, funcionarios de la Iglesia prometieron publicar un informe sobre la magnitud del problema.

Una película estrenada en septiembre, “**Kler**” (“El clero”), sobre el abuso sexual en la Iglesia, generó **controversia** y dejó al descubierto la división de la sociedad polaca: mientras que algunos pidieron que se la prohibiera, otros la celebraron por ayudar a desafiar la cultura del silencio en torno del abuso. En octubre se **informó** que personas cercanas al partido gobernante habían presionado a varios cines para que dejaran de mostrar la película. Pero aun así la vieron más de tres millones de personas, lo que la convirtió en una de las películas más vistas en la Polonia poscomunista. A medida que continúen las revelaciones, los datos sobre casos de abusos seguirán alimentando la demanda de reparación. Ahora que han comenzado a hablar, los sobrevivientes de abusos no serán silenciados.